

CG950/2008

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INICIADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS” POR HECHOS QUE CONSTITUYEN PROBABLES INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-79/2008 Y SUS ACUMULADOS, SUP-RAP-105/2008 Y SUP-RAP-110/2008.

Distrito Federal, a 22 de diciembre de dos mil ocho.

En atención a que las conductas materia del actual procedimiento administrativo sancionador, se derivan de la instauración de un procedimiento principal, así como de la interposición de dos incidentes de inejecución, para su mayor claridad y tratamiento, la autoridad de conocimiento estima pertinente dividir la exposición de los antecedentes (resultandos), así como el pronunciamiento de fondo respecto de los mismos, en tres rubros, a saber: **PROCEDIMIENTO PRINCIPAL, PRIMER INCIDENTE y SEGUNDO INCIDENTE.**

VISTOS para resolver los autos del expediente identificado al rubro, y:

R E S U L T A N D O

PROCEDIMIENTO PRINCIPAL

I. Con fecha veinticinco de mayo de de dos mil seis, se recibió en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el escrito de esa misma fecha, signado por el Lic. Germán Martínez Cázares, entonces representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual hizo del conocimiento de esta autoridad hechos que consideró

constituyeron infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hizo consistir primordialmente en lo siguiente:

“En atención a su oficio SE/1960/2006, de fecha 23 de mayo de 2006 y recibido el 24 de mayo, comparezco mediante este escrito para ratificar en sus términos la denuncia presentada en contra de la coalición ‘Por el Bien de Todos’ de fecha 23 de mayo por la difusión de los promocionales que a continuación se transcriben:

*- Promocional identificado como ‘Fobaproa 1’: Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘Informativa # 1’, La voz afirma: ‘Informativa uno. Confirmado: **Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos, Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el Fobaproa. Encubriste a los que nos robaron y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad,** Y nos traes el cuento del empleo cuando tienes 0 en empleos creados’. Aparece en fondo negro la siguiente frase: ‘Diputados y senadores del PRD.’*

*- Promocional identificado como ‘Fobaproa 2’: Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘Informativa # 2’. La voz afirma: ‘Informativa dos. Calderón: con **tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el Fobaproa. Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia**’. Se inserta un video en el que aparece Felipe Calderón diciendo: ‘Seguiremos con las auditorías para que no sólo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero’. Aparece una imagen con tres personas abrazadas y riendo. La voz afirma: ‘Y **sígues encubriendo a los culpables y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso**’. En fondo negro se advierte la frase: ‘Candidatos a diputados del PRD.*

*En consecuencia, le solicito **se inicie el procedimiento especializado** al que hace referencia en la SUP-RAP-017/2006, en virtud de que los promocionales de mérito impliquen (sic) calumnia, diatriba, injuria y difaman al candidato registrado por el Partido Acción Nacional, contienen en su mayoría manifestaciones relativas a supuestas acciones pasadas y no vinculadas, al menos no formalmente, a los futuros programas o planes propuestos por el partido que represento y sus candidatos; constituyen discursos ajenos a la información directamente relacionada con la plataforma electoral de este partido y de la coalición que suscribe dichos promocionales. En suma, no tienen como propósito difundir una crítica razonada, una oferta política o un*

programa electoral, sino por el contrario empañar la imagen pública del candidato Calderón Hinojosa, toda vez que de forma directa y subliminal conducen a la población a formarse una imagen de que el candidato registrado por este Partido ha encubierto delitos y ha causado, con sus actos, males económicos a las personas.”

El quejoso acompañó como prueba para acreditar su dicho un disco compacto que contiene copia del promocional difundido por la otrora coalición “Por el Bien de Todos”.

El escrito de referencia fue radicado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

II. Con fecha primero de junio de dos mil seis, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, emitió el dictamen correspondiente respecto del procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, en el cual se propuso, en el **segundo** punto de conclusiones del fallo, declarar **fundada** la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, en el tercer punto, cesar la transmisión de los promocionales que fueron declarados contrarios al orden electoral, en el **cuarto** punto, ordenar a la coalición denunciada se abstuviera de difundir publicidad con elementos similares a los que fueron declarados contrarios a la normatividad electoral, y en el **quinto punto**, se instruyó iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, por las razones expresadas en los considerandos 10 y 11, a saber:

10. Que de lo razonado hasta este punto, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

***B)** La presente denuncia es **fundada**, respecto de las violaciones relativas a lo dispuesto en los artículos **38**, párrafo **1**, inciso **p)** y **186**, párrafo **2** del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cometidas por la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, al haber difundido en el promocional materia del actual procedimiento, expresiones que denigran al C. Felipe Calderón Hinojosa frente al electorado.*

Lo anterior, trastoca los límites a la libertad de expresión establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como los lineamientos a que debe sujetarse la crítica contenida dentro de la propaganda electoral, referidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de diversos precedentes emitidos por dicho órgano jurisdiccional en materia electoral.

Finalmente, esta autoridad considera pertinente realizar una evaluación global acerca de las características observadas en los promocionales materia del actual procedimiento, a efecto de evidenciar la necesidad de ordenar a la Coalición 'Por el Bien de Todos' el cese inmediato de su difusión entre la ciudadanía, así como la de cualquier otra publicidad en la que se denigre a los partidos políticos, coaliciones o candidatos durante la actual contienda electoral.

Tales características, que se desprenden del análisis detallado que se ha efectuado en el cuerpo de la presente resolución, son las siguientes:

1.- La omisión de difundir la plataforma electoral o los programas de gobierno de la Coalición 'Por el Bien de Todos' (independientemente de que, como ya se señaló en el apartado correspondiente, este requisito no es exigible en la totalidad de la propaganda que emitan los partidos políticos).

2.- Las imputaciones realizadas al C. Felipe Calderón Hinojosa: 'con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia'; 'Encubriste a los que nos robaron'; 'sigues encubriendo a los culpables' y 'eres un mentiroso'.

Los elementos anteriormente referidos, analizados de manera global, permiten arribar a la conclusión de que los promocionales en su conjunto tienen como finalidad denigrar y afectar la imagen pública del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en la legislación electoral federal.

*Así las cosas, esta autoridad considera que resulta indispensable para el normal desarrollo del proceso electoral 2005-2006, adoptar medidas que resulten suficientes para garantizar dicha circunstancia, así como para cumplir con los fines que constitucional y legalmente tiene encomendadas. De ahí que se considere necesario ordenar a la Coalición 'Por el Bien de Todos' **cese inmediatamente** la difusión de los promocionales en medios electrónicos, por considerarse contrarios*

al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo, y en lo sucesivo se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.

No obsta para lo anterior, que la Coalición ‘Por el Bien de Todos, haya manifestado dentro de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, que con fecha veintisiete de mayo de dos mil seis, cesó de transmitir los promocionales en cuestión, ya que dicha circunstancia no resulta suficiente para acreditar fehacientemente que la coalición denunciada no ha difundido los promocionales de referencia durante el periodo comprendido entre la fecha que señala y la de emisión del presente fallo, y por otra parte, aun en el supuesto de que se acreditara dicha circunstancia, ello no constituiría un obstáculo para que en el futuro la denunciada pudiera ordenar su retransmisión, en caso de que esta autoridad no se pronunciara al respecto.

*Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 14, 16, 17, 39, 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1; 2, párrafo 1; 3, párrafos 1 y 2; 23, párrafos 1 y 2; 25, párrafo 1, inciso a); 36, párrafo 1, incisos a) y b); 38, párrafo 1, incisos a), b) y p); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 68, párrafo 1; 69, párrafos 1, incisos a), b), c) d), e), f) y g) y 2; 70, párrafo 1; 72, párrafo 1, incisos a), b), c) y d); 73, párrafo 1; 82, párrafo 1, incisos h), t) w) y z); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; en relación con los numerales 2, párrafo 1, 14, párrafos 1, 3 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en el criterio sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la resolución dictada en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-17/2006, de fecha cinco de abril del presente año y en la ratio essendi de tesis relevante S3EL 003/2005, emitida por dicho órgano jurisdiccional identificada bajo el rubro **“CAMPAÑAS ELECTORALES. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO TIENE ATRIBUCIONES PARA HACERLAS CESAR O MODIFICARLAS, SI CON ELLAS SE VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD O IGUALDAD EN LA CONTIENDA”**.*

11.- *Que en virtud de que las conductas desplegadas por la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ se estimaron violatorias de los artículos 38,*

párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido en **los** promocionales materia del actual procedimiento, expresiones o alusiones innecesarias y desproporcionadas para hacer explícita la crítica del Partido Acción Nacional a las características personales del C. Felipe Calderón Hinojosa, así como para resaltar o enfatizar las desventajas o limitaciones que, a su juicio, tienen la oferta política y la plataforma del partido impetrante, **y al mensaje que pretende transmitirse en el sentido de que en caso de llegar a la Presidencia de la República, va a ser un funcionario que cometa delitos o los encubra**, lo que trastoca los límites establecidos a la libertad de expresión y consagrados en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los lineamientos a que debe sujetarse la crítica contenida dentro de la propaganda electoral, referidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de diversos precedentes emitidos por dicho órgano jurisdiccional en materia electoral, **se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de la Coalición “Por el Bien de Todos”, a efecto de que se interpongan las sanciones que en derecho procedan por la comisión de las violaciones legales detectadas por esta autoridad dentro del presente procedimiento...**,

RESOLUCIÓN

...

SEGUNDO.- Se declara **fundada** la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, por lo que hace al aspecto sintetizado en el párrafo identificado con el inciso **B)** del considerando 10 de la presente resolución.

TERCERO.- Se ordena a la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ **cese inmediatamente** la difusión en medios electrónicos, de los promocionales de referencia, por considerarse contrario al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo.

CUARTO.- Se ordena a la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ que en lo sucesivo se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral, en términos de lo precisado en el presente

fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos

QUINTO.- *Se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, a efecto de que se impongan las sanciones que en derecho procedan por la comisión de las violaciones legales detectadas por esta autoridad dentro del presente procedimiento.”*

III. En sesión extraordinaria de fecha cuatro de junio de dos mil seis, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG129/2006, relativa al procedimiento principal identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, y resolvió declarar fundada la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la entonces coalición “Por el Bien de Todos”, fallo que en los puntos resolutivos segundo, tercero y quinto determinó lo siguiente:

“SEGUNDO.- *Se declara **fundada** la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, por lo que hace al aspecto sintetizado en el párrafo identificado con el inciso **B)** del considerando 10 de la presente resolución.*

TERCERO.- *Se ordena a la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ **cese inmediatamente** la difusión en medios electrónicos, de los promocionales de referencia, por considerarse contrario al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo.*

CUARTO.- *Se ordena a la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ que en lo sucesivo se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.*

...”

IV. Por acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil seis, y en cumplimiento a lo ordenado por el dictamen de la Junta General Ejecutiva de este Instituto referido en el resultando II, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso a), 82, párrafo 1, incisos h) y w), 84, párrafo 1, incisos a) y p), 85, 86, párrafo 1, incisos d) y l), 87, 89, párrafo 1, incisos ll) y u), 269, 270, párrafo 2 y 4 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 párrafo 1; 16, párrafo 2; 20 y 41 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto ordenó iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número **JGE/QCG/347/2006**, así como emplazar a la coalición denunciada, a efecto de que en el término de cinco días hábiles contestara por escrito lo que a su derecho conviniera.

V. Mediante oficio número SJGE/741/2006, de fecha nueve de junio de dos mil seis, suscrito por el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el día veintiuno de julio del mismo año, se emplazó a la otrora coalición “Por el Bien de Todos” para que dentro del plazo de cinco días, contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

VI. Mediante escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil seis, el Lic. Horacio Duarte Olivares, en su carácter de representante común de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos” ante el Consejo General del Instituto, dio respuesta al emplazamiento formulado por esta autoridad mediante acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil seis, manifestando lo siguiente:

CONTESTACIÓN PROCEDIMIENTO PRINCIPAL

I. *Durante el proceso electoral, la coalición electoral que represento, Por el Bien de Todos, **difundió en medios electrónicos, los siguientes promocionales:***

‘Fobaproa 1’:

Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘informativa # 1’, La voz afirma: ‘Informativa uno. Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos, Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: El Fobaproa. Encubriste a los que nos robaron y dañaste a más de un millón de trabajadores

despedidos sin piedad. Y nos traes el cuento del empleo cuando tienes 0 en empleos creados.'

'Fobaproa 2':

Se advierte en fondo blanco la leyenda 'Informativa # 2'. La voz afirma: 'Informativa dos. Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el Fobaproa. Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia'. Se inserta un video en el que aparece Felipe Calderón diciendo: 'Seguiremos con las auditorias para que no solo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero'. Aparece una imagen con tres personas abrazadas y riendo. La voz afirma: 'Y sigues encubriendo a los culpables y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso'.

II. *Con fecha primero de junio de dos mil seis, la Junta General Ejecutiva emitió el 'DICTAMEN RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO INCOADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN 'POR EL BIEN DE TODOS', POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN VIOLACIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.'; dentro del cual en su Dictamen 'CUARTO.- Se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de la coalición 'Por el Bien de Todos', a efecto de que se impongan las sanciones que en derecho procedan por la comisión de las violaciones legales detectadas por esta autoridad dentro del presente procedimiento', recaído al expediente JGE/PE/PBT/CG/006/2006, integrado con motivo de la denuncia y solicitud del Partido Acción Nacional en contra de mi representada por hechos que presuntamente constituyen violaciones a la Constitución Mexicana y las leyes electorales.*

III. *Con fecha 4 de junio del año en curso el Consejo General en Sesión Extraordinaria, aprobó por mayoría de votos dicho dictamen mediante la resolución idéntica como CG129/2006 en la que, en su resolutivo tercero y cuarto, se ordena a la coalición que represento cese la difusión en los medios electrónicos de las promocionales de referencia, así como se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares; por considerarlos violatorios a los establecido por el artículo 38, párrafo 1 inciso p) y 182 párrafo 2 del código electoral.*

IV. *Mediante oficio POR EL BIEN DE TODOS-168/06 dirigido al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de fecha veintinueve de mayo de dos mil seis, el suscrito, en mi carácter de*

representante propietario de la coalición Por el Bien de Todos, hice del conocimiento de la referida autoridad que, a partir del día veintisiete de mayo del presente año, se dejaron de difundir los promocionales por los que se inconformaba el Partido Acción Nacional, solicitando que se agregara a las actuaciones del procedimiento especial, los resultados del monitoreo que realiza el Instituto Federal Electoral a medios masivos de comunicación, en los que se pudiera constatar el retiro de los promocionales. Lo cual se ratificó mediante ocurso de fecha 30 treinta de mayo de dos mil seis, que presenté al Instituto Federal Electoral, informando la misma situación.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

En el punto cuarto del Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva se ordena al Secretario de la misma iniciar el procedimiento administrativo a efecto de que se impongan las sanciones a la coalición que represento por la supuesta comisión de violaciones legales detectadas, específicamente a lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cometidas por la coalición Por el Bien de Todos, al haber difundido en el promocional materia del actual procedimiento, expresiones que a juicio de la autoridad, denigran al C. Felipe Calderón Hinojosa frente al electorado.

Por otro lado, en la Resolución emitida por el Consejo General se realiza el análisis de las supuestas violaciones a las disposiciones electorales, en la parte final del considerando 9 de la propia resolución, en el apartado que denomina 'DENOSTACIÓN, CALUMNIAS, DIATRIBAS, INJURIAS Y DIFAMACIÓN'; y se ordena a mi representada el cese de los promocionales de trato.

En efecto, en el referido considerando 9 de la resolución controvertida, la Junta afirma que debe tenerse presente que '...la configuración de alguna expresión que implique diatriba, calumnia, infamia o injuria se puede dar a través de la simple exteriorización de calificativos, expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonrosas o infamantes, o bien, a través de aquellas expresiones que resulten impertinentes, innecesarias o desproporcionadas, es decir, aquellas locuciones cuyo propósito fundamental sea descalificar a otro instituto político basadas en hechos aparentemente verídicos'.

Al realizar el análisis del primero de los promocionales (Fobaproa 1) en controversia, el Consejo General sostiene que '... la afirmación hecha por la Coalición denunciada en el sentido de que el C. Felipe Calderón

Hinojosa fue autor de un fraude al suscribir el FOBAPROA, pone en evidencia que tal aserción la realiza con la única finalidad de denigrar su imagen, trastocando los límites de la garantía de la libertad de expresión, plasmada en el artículo 6° constitucional, y excediendo así mismo, los límites establecidos... demostrándose en el presente caso que las afirmaciones en cuestión no encuentran sustento en los hechos demostrados’.

Así mismo, sigue sosteniendo el resolutivo que del mismo modo, se observa que el promocional en cuestión pretende transmitir el mensaje de que el C. Felipe Calderón Hinojosa encubrió a algunas personas, que desde la óptica de la coalición referida, cometieron un robo a través del FOBAPROA’.

Por otra parte, sostiene en su resolutivo que ‘...no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que el referido rescate bancario hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, ello no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa...las aseveraciones difundidas en los promocionales de estudio que vinculan al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude y de encubrimiento de un robo, se trata de expresiones que tiene como finalidad denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa...’.

A efecto de que la autoridad tenga elementos suficientes para valorar las circunstancias particulares de la conducta supuestamente infractora, solicito analice los siguientes argumentos de defensa:

En relación a lo anterior, el Consejo pasa por alto que la connotación de la palabra ‘fraude’ utilizada en el promocional, no se refiere a aquellas que tiene que ver con un ilícito penal, sino que se relaciona con su definición etimológica.

En este sentido, el Diccionario Enciclopédico Larousse, 2006, al presentar la definición etimológica de la palabra FRAUDE, señala textualmente:

FRAUDE s.m. (lat. Graus,-dis, mala fe, engaño)

Es así que, el Consejo General en su análisis se limita a la definición establecida por el Código Penal para la comisión del delito de fraude, sin realizar análisis alguno de las distintas definiciones que tiene la palabra ‘fraude’.

De igual manera, como la definición de la palabra fraude ‘que ofrece el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, es posible demostrar que dicho término no tiene solamente la connotación de ilícito penal, como lo determinó en su momento el Consejo:

FRAUDE. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete.// 2. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros //3. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, e incluso de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.

Así, cuando se resuelve que con los promocionales mi representada busca comunicar a los receptores la imputación de un delito en perjuicio del C. Felipe Calderón Hinojosa y que tal aserción se realiza con la única finalidad de denigrar su imagen; incurre en un error, pues como se ha dicho, pasa por alto que dicha palabra cuenta con diversas connotaciones.

En la especie, de la simple lectura de la frase ‘Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el fobaproa’ puede desprenderse con claridad que lo que se busca en el spot es evidenciar la participación que tuvieron el Partido Revolucionario Institucional y el C. Felipe Calderón Hinojosa como dirigente del Partido Acción Nacional, gestionando la firma y autorización del FOBAPROA (que cuando fue legalizado se denominó IPAB), que en el momento de su aprobación y, hasta la fecha, se encuentra inmerso en un debate nacional, en el que un importante sector de la población en nuestro país, sostiene que se trató de una operación en perjuicio de los contribuyentes en México.

De ahí que, la forma en que es manejado el término ‘fraude’ en el promocional, se encuentra encaminada a su definición etimológica ‘engaño’ o a su definición de ‘acción contraria a la verdad y a la rectitud’; lo cual se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión de mi representada, pues si bien constituye una crítica intensa, no es desproporcionada ni tiene como ‘única finalidad de denigrar’ la imagen del candidato como sostiene el Consejo; sino la de recordar a la población un hecho reconocido, que fue la aprobación del Fobaproa por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, momento en el que el C. Felipe Calderón Hinojosa era Presidente Nacional de uno de los partidos mencionados, Acción Nacional; habida cuenta que busca confrontar dos posiciones políticas asumidas sobre un tema relevante de interés nacional.

A efecto de acreditar lo anterior, ofrezco como prueba el semanario de información y análisis, Proceso, Número 1544 de fecha 4 de junio de 2006, con el que se demuestra que el mismo día en que fue emitida la resolución referida, comenzó a circular la revista que es una de las más prestigiadas en el país en materia política, y en la que aparece como reportaje principal el intitulado 'La Impunidad', firmado por Álvaro Delgado, en el que se cuestiona la posición asumida por el Partido Acción Nacional y Felipe Calderón Hinojosa y su participación en la aprobación en el tema del FOBAPROA.

En el propio reportaje se destaca que en la discusión política nacional, a dicho tema se le ha calificado por un sector de la población como un 'fraude'. A manera de ejemplo, el C. Fauzi Hamdan entonces presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda (y por cierto militante del Partido Acción Nacional), calificó como 'Fraude a la Constitución las operaciones del FOBAPROA...'

Así mismo, con diversas pruebas que obran en el expediente del Procedimiento Especializado, se desprende que en la discusión del tema se mencionó en distintos momentos que la aprobación del FOBAPROA constituiría una defraudación porque avalaría la impunidad de funcionarios y ex funcionarios que realizaron operaciones fraudulentas y que los partidos políticos de oposición en el H. Congreso de la Unión calificaron la aprobación del tema, como 'el fraude del siglo'.

Resulta de la mayor relevancia la discusión de fondo que se dio sobre el tema y las posiciones tanto de quienes votaron a favor, como en contra, que no es analizada por el Consejo General en la resolución; pues en dicha discusión se le otorgó el calificativo de 'fraude', toda vez que la iniciativa de ley del IPAB (que legalizó el FOBAPROA) implicó convertir en deuda pública créditos irregulares, y que, incluso existen elementos de prueba suficientes que fueron destinados ilegalmente para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, por parte de empresarios o banqueros, e inclusive para el beneficio de personas relacionadas con el Partido Acción Nacional.

Debe tenerse en cuenta, que el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, establece como diversas connotaciones a la palabra 'Firma', entre las que se encuentra 'Confiarle la representación o la dirección de su casa o de una dependencia' o 'Tener la representación y dirección de la casa de otro o de una dependencia'.

En ese sentido, contrario a lo sostenido por el Consejo de este Instituto, con el mensaje no se buscaba 'comunicar a los receptores del

promocional la imputación de un delito en perjuicio de dicha persona', 'con la única finalidad de denigrar su imagen' pues, como ha quedado demostrado, lo que se buscaba es constatar dos posiciones distintas en un tema de alta relevancia e interés nacional y evidenciar la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, de la que fue claro partícipe el ahora candidato presidencial de dicho partido en su carácter de Presidente Nacional.

Su participación se desprende además del libro que se anexó como prueba a los autos del expediente de trato, bajo el título 'Los Suspirantes', 'Los Precandidatos de Carne y Hueso' del autor Jorge Zepeda Patterson, de Editorial Planeta, Primera Reimpresión, Julio de 2005, en el cual en las páginas 91 y 92 aparece un reportaje de Salvador Camarena en el que se reconoce que el propio Felipe Calderón Hinojosa, respecto al tema 'Fobaproa', sabía que 'si no ayudaba al PRI a dar salida legal a los pasivos por 70 mil millones de dólares que había costado el recate financiero y bancario, una enorme crisis azotaría México'.

Se desprende, así mismo, el reconocimiento expreso del C. Calderón Hinojosa de haber participado en las negociaciones para su aprobación: 'Yo llegue a un acuerdo con Ernesto Zedillo. Él le pediría la renuncia a Guillermo Ortiz...Empecé a operar ese acuerdo, hablé con Fox y con otros gobernadores que entonces estaban en ejercicio, así como con los coordinadores (legislativos)':

De igual manera, su participación se desprende de la declaración que realiza Gabriel Reyes Orona, quién fungió como Director Jurídico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y que aparecen publicadas en la página 3 del periódico La Jornada, de fecha 6 de junio del presente año, bajo el título 'Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona', firmada por el reportero Ciro Pérez Silva. Prueba que obra de igual forma en los autos del expediente mencionado.

Por otra parte, por lo que hace a la expresión 'encubriste a los que nos robaron', en el promocional Fobaproa 1; el Consejo General estima que la misma 'trasmite a los receptores de ese mensaje la idea de que el C. Felipe Calderón Hinojosa realizó una conducta contraria a la ley, realizando acciones tendentes a ocultar a los responsables de un robo'. Equiparando la conducta que supuestamente le imputa mi representada al candidato del Partido Acción Nacional, con los delitos de 'encubrimiento' y 'robo'.

Sin embargo, también en este caso dicho consejo partió de la premisa falsa de que la palabra 'robo' solamente cuenta con una sola connotación que son aquellas que las vincula con un ilícito penal, lo cual no resulta exacto, pues conforme al Diccionario Enciclopédico Larousse, por la palabra 'robar' puede entenderse 'Quitar algo que pertenece a alguien por medio del engaño':

Lo anterior resulta de la mayor importancia pues el Consejo saca dicha frase del contexto que se presenta en el spot, ignorando de nueva cuenta que la discusión política sobre el tema, la posición de los partidos políticos de oposición, estuvo encaminada a evidenciar que la aprobación de la iniciativa de ley del IPAB (que legalizó el FOBAPROA) implicó convertir en deuda pública créditos irregulares; y que, incluso existen elementos de prueba suficientes para acreditar que fueron destinados ilegalmente para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional y para el beneficio de personas relacionadas con el Partido Acción Nacional.

De igual forma, mi representada argumentó en su defensa con la aprobación del rescate bancario se causó una afectación a trabajadores que fueron despedidos, lo cual es un hecho verificable, pues la conversión de deuda privada en pública relacionada con el rescate bancario, resulta evidente que tuvo repercusiones en la economía de nuestro país.

Resulta de la mayor importancia señalar mi representada hizo notar al Consejo General que el tema del rescate bancario se encuentra vinculado con las propuestas de gobierno que en el proceso electoral pasado se encontraba obligada a difundir la coalición Por en Bien de Todos.

En efecto, en el Programa de Gobierno de la coalición electoral Por el Bien de Todos, registrado ante el Instituto Federal Electoral, en el capítulo relativo a IV: POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO, apartado 'Financiamiento del Desarrollo', número 192 textualmente señala:

192.- Terminarse con el compromiso presupuestal que proviene de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorbe una parte sustantiva del PIB.

Así el tema del FOBAPROA se encuentra directamente relacionado con las propuestas de gobierno que, por obligación legal, debe difundir la coalición electoral Por el Bien de Todos dentro de su propaganda.

La verificación empírica del tema es posible, pues es un hecho público y notorio que el tema formó parte de un amplio debate nacional, que aún subsiste; y que se relacionó con la quiebra del sector bancario.

2.- PROMOCIONAL DENOMINADO FOBAPROA # 2

En la resolución impugnada, el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluye que dentro del segundo de los promocionales, ‘existían elementos que guardan identidad’ con los del primer promocional y que, por lo tanto, respecto de las frases ‘con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia’, ‘encubriste a los que nos robaron’ ‘y sigues encubriendo a los culpables’, debían prevalecer las mismas consideraciones expuestas dentro del análisis realizado al promocional identificado como ‘fobaproa # 1’.

Esa virtud, por lo que se refiere a tales argumentos, solicito a esta Junta General Ejecutiva que tenga por reproducidos mis argumentos formulados con relación a las valoraciones que realiza el Consejo respecto al primero de los promocionales, en obvio e repeticiones innecesarias.

El Consejo General sostiene adicionalmente los siguientes argumentos respecto al respecto al segundo de los promocionales:

‘Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que si bien dentro del promocional bajo análisis, se observa la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa manifestando ‘Seguiremos con las auditorias para que no sólo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero’, hecho que en la especie no fue redargüido por el partido actor, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta suficiente para arribar a las conclusiones que pretende transmitir la coalición denunciada, pues de la misma no es dable colegir, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBAPROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje haya encubierto conductas delictivas o contrarias a la ley, y finalmente que las afirmaciones antes referidas, permitan calificarlo como mentiroso, toda vez que el elemento en estudio, sólo permite desprender que el candidato aludido se pronunció sobre un hecho de interés nacional, sin que ello demuestre su participación en los hechos que se le pretenden atribuir en el promocional de referencia.

Asimismo, respecto de la expresión contenida en el promocional en estudio relativa a que: ‘Y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad’, ésta autoridad advierte que no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó

en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que el referido rescate bancario hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa.

Por último, tratándose de la expresión ‘eres muy mentiroso’, esta autoridad estima que dicho calificativo es un juicio de valor por el que se le atribuye una determinada característica personal al multicitado candidato, resulta de las premisas por las que se le vincula con la comisión de conductas delictivas derivadas de su participación en el FOBAPROA y que produjo consecuencias económicas negativas en la sociedad, transmitiendo a los receptores el mensaje de que dicho candidato se vale de un doble discurso, en virtud de que por una parte el citado candidato se manifiesta a favor de castigar a los responsables de obtener un beneficio en forma ilícita, y por otra, el fue artífice de conductas contrarias a la ley que devinieron en un daño económico social.

Al respecto, esta autoridad considera que el calificativo con el que se presenta al C. Felipe Calderón Hinojosa se hace con la finalidad de denigrar su imagen, en virtud de que en el juicio que se emite en su persona no se encuentra sustentado en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración; en consecuencia rebasa los límites de la libertad de expresión al ser una crítica desproporcionada y excesiva que no encuentra sustento en un hecho real.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis, contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

Sin embargo, sí existen elementos que permiten acreditar que Felipe Calderón Hinojosa participó en la aprobación del FOBAPROA, además de ser un hecho público en el ámbito de la política; así como, las razones por las cuales la expresión ‘fraude’ no resulta desproporcionada en el spot en controversia, argumentos que pido se tenga por reproducidos en el presente apartado en obvio de repeticiones innecesarias.

Ahora, por lo que se refiere a la afirmación contenida en los promocionales de que el C. Felipe Calderón Hinojosa, ‘mintió’ y ‘sigue encubriendo a los responsables’ se hace en el contexto de la declaración

que realizó el referido candidato presidencial (y que no objeta en su contenido el partido político denunciante), en la que sostuvo: ‘Seguiremos con la auditorias para que no sólo se castigue a los responsables, sino que devuelvan el dinero’. En ese contexto, es una verdad que el C. Felipe Calderón, no ha actuado en consecuencia con dicha declaración, pues no ha realizado acto alguno para la consecución del fin al que en su momento se comprometió.

Cabe mencionar que dentro de los autos del expediente que resolvió el Consejo General, solicité respetuosamente a esta Secretaría que se agregara a las actuaciones del procedimiento especial, los resultados del monitoreo que realiza el Instituto Federal Electoral a medios masivos de comunicación, en los que se pudiera constatar el retiro de los promocionales; a efecto de que pudieran ser considerados valorados en la audiencia de contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas; por lo que pido nuevamente, se valoren los monitoreos en cuestión.

Por otro lado, el artículo 36 del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que ‘la investigación... se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva’

Así mismo, el artículo 38 del ordenamiento citado establece que una vez que ‘Admitida la queja por el Secretario, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo...’

Citado lo anterior, toda vez que si, del análisis que realizó el Consejo General para efecto de determinar en su resolución de fecha 4 de junio de 2006, que esta coalición violó lo estipulado en los artículos 38 párrafo 1, inciso p) y 186 párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; esta Junta General Ejecutiva llegase a determinar que se aplique alguna sanción de las establecidas en los artículos 269 del código electoral y 51 del Reglamento mencionado; solicito se tome en consideración lo dispuesto en el artículo 52 de este ultimo ordenamiento que dispone que ‘se tomará en cuenta las circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como la gravedad de la falta’

En este contexto, las circunstancias y gravedad de la falta que señala dicha disposición se dio en el contexto siguiente:

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

Es de recordar a esta Junta que durante todo el proceso electoral se llevo a cabo una campaña, misma que fue reconocida a nivel nacional y sancionada por el propio Consejo General; con el único objeto de denostar, calumniar, difamar y denigrar al candidato de mi representada para la Presidencia de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, propaganda conocida a nivel nacional como 'propaganda negra'.

En relación a lo anterior, cabe mencionar que el propio Consejo General resolvió en Sesión el Procedimiento Especial por la denuncia incoada por la coalición Por el Bien de Todos, en contra del Partido Acción Nacional con motivo de ocho promocionales de campaña en contra de mi representada y su candidato, declarando infundados algunos hechos expuestos por la coalición bajo el criterio de que los spots de Acción Nacional 'respondían a las agresiones formuladas por mi representada.'

Sin embargo, debe recordar esta Junta, que el partido político impulsor desde el inicio del proceso electoral de una campaña negra, de agresiones y denostaciones, no fue la coalición que represento, sino el Partido Revolucionario Institucional seguido, ante la inactividad del Instituto Federal Electoral, del Partido Acción Nacional; por lo que, en el presente caso, quién respondió a las agresiones no fue este último partido, sino la coalición Por el Bien de Todos a la campaña difamatoria llevada a cabo por los partidos infractores.

Lo anterior, atendiendo el criterio de los propios consejeros del Instituto al resolver en sesión del 25 de mayo del año actual el expediente JGE/PE/PBT/CG/004/2006 y aplicado al caso que nos ocupa, los promocionales difundidos por mi representada (Fobaproa 1 y Fobaproa 2) que el Consejo General ordenó retirar de los medios de comunicación, no fueron sino una respuesta a la agresión que ha venido recayendo sobre la coalición Por el Bien de Todos y su candidato; presentando hechos reales y verificables en los que se ha vinculado al candidato; del Partido Acción Nacional, y que se trata de un tema de interés nacional y vinculadas con el Programa de Gobierno de la coalición que represento.

Así, de acuerdo con criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tales como los sustentados en los recursos de apelación con números de expediente SUP-RAP-041/2002 y SUP-RAP-005/2003, en los cuales ha sostenido que los procedimientos administrativos sancionatorios en materia electoral, son recursos de ultima ratio (principio de intervención mínima), ya que involucran sanciones privativas de derechos, por lo que antes de acudir al expediente sancionador se deben de agotar otros medios jurídicos con consecuencias o efectos menos drásticos o graves (principio de

subsidiariedad); como lo son las vías internas partidistas o los procesos jurisdiccionales con lo que se pueda modificar, anular o revocar el acto irregular (foja 42 de la sentencia).

En la misma foja 42, y con la intención de reforzar el anterior argumento, el tribunal electoral sostiene que el procedimiento administrativo sancionador como especie del ius puniendo, debe tener un carácter garantista y un carácter mínimo (derivado del postulado del intervencionismo mínimo). Como uno de los postulados fundamentales del garantismo, destaca el tribunal el principio de necesidad expresado en la máxima latina 'nulla lex (poenalis) sine necessitate'; consistente en que la intervención punitiva del Estado constituye un recurso último que no debe utilizarse para sancionar infracciones fútiles o vanas, sino sólo aquellos comportamientos realmente lesivos que dañen el tejido social.

Lo anterior y aplicado al caso que nos ocupa, sin conceder los hechos y valoraciones imputadas injustamente a mi representada en la resolución del 4 de junio de 2006, si esta Junta General Ejecutiva y en su caso el Consejo General los declara nuevamente válidos; a criterio del Tribunal Electoral es eficaz que no se aplique una sanción administrativa al partido político o coalición electoral que presuntamente infringió el derecho; sino que, se busque la manera, ya sea por vías internas o jurisdiccionales de remediar los presuntos hechos constituyentes de violación a la norma; consistiendo en este caso, el retiro de los spots en los medios masivos de comunicación difundidos por mi representada, situación que ya se ordenó en la resolución de fecha 4 de junio de 2006, lo cual, representa por sí sola la sanción en esencia."

VII. Mediante acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil seis, el Secretario de la Junta General Ejecutiva tuvo por recibido el escrito referido en el resultando anterior.

PRIMER INCIDENTE

I. Con fecha siete de junio de de dos mil seis, se recibió en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el escrito de esa misma fecha, signado por el Lic. Germán Martínez Cázares, entonces representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual promovió el **primer incidente de inejecución** de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, en contra de la otrora coalición "Por el Bien de

Todos”, por la difusión de un promocional denominado “Informativa 9” mismo que hizo consistir primordialmente en lo siguiente:

*“Respetuosamente comparezco para promover **incidente de inejecución** de la Resolución del Consejo General recaída al procedimiento instaurado por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, identificado como **JGE/PE/PBT/CG/006/2006**, al tenor de los siguientes:*

HECHOS

*I. En sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2006, el Consejo General aprobó la **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO INCOADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA COALICIÓN ‘POR EL BIEN DE TODOS’, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN VIOLACIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**, identificada bajo el número **CG129/2006** y en virtud de la cual se puso fin al procedimiento especializado número **JGE/PE/PBT/CG/006/2006**.*

II. En la parte relativa a las consideraciones de hecho y de derecho de la resolución de mérito, el Consejo General concluyó, entre otros extremos, lo siguiente:

...

10. Que de lo razonado hasta este punto, es posible arribar a las siguientes conclusiones:

...

*A) La presente denuncia es **fundada**, respecto de las violaciones relativas a lo dispuesto en los artículos **38**, párrafo **1**, inciso **p)** y **186**, párrafo **2** del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cometidas por la Coalición ‘Por el Bien de Todos’, al haber difundido en el promocional materia del actual procedimiento, expresiones que denigran al C. Felipe Calderón Hinojosa frente al electorado.*

Lo anterior, trastoca los límites a la libertad de expresión establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los lineamientos a que debe sujetarse la crítica contenida dentro de la propaganda electoral, referidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de diversos precedentes emitidos por dicho órgano jurisdiccional en materia electoral.

*Así las cosas, esta autoridad considera que resulta indispensable para el normal desarrollo del proceso electoral 2005-2006, adoptar medidas que resulten suficientes para garantizar dicha circunstancia, así como para cumplir con los fines que constitucional y legalmente tiene encomendadas. De ahí que se considere necesario ordenar a la coalición 'Por el Bien de Todos' **cese inmediatamente** la difusión de los promocionales en medios electrónicos, por considerarse contrarios al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo, **y en lo sucesivo** se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.*

No obsta para lo anterior, que la coalición 'Por el Bien de Todos', haya manifestado dentro de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, que con fecha veintisiete de mayo de dos mil seis, cesó de transmitir los promocionales en cuestión, ya que dicha circunstancia no resulta suficiente para acreditar fehacientemente que la coalición denunciada no ha difundido los promocionales de referencia durante el periodo comprendido entre la fecha que señala y la de emisión del presente fallo, y por otra parte, aún en el supuesto de que se acreditara dicha circunstancia, ello no constituiría un obstáculo para que en el futuro la denunciada pudiera ordenar su retransmisión, en caso de que esta autoridad no se pronunciara al respecto.

III. Con base en lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió lo siguiente:

SEGUNDO.- *Se declara **fundada** la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la coalición 'Por el Bien de Todos', por lo que hace al aspecto sintetizado en el párrafo identificado con el inciso B) del considerando 10 de la presente resolución.*

CUARTO.- Se ordena a la coalición 'Por el Bien de Todos' que en lo sucesivo se abstenga de difundir cualquier publicidad **que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral**, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.

....

IV. A las 20:52 horas del 7 de junio de 2006, la coalición 'Por el Bien de Todos' transmitió por el canal 2 (XEW-TV) operado por la empresa Televisa el siguiente promocional:

Promocional identificado como 'Informativa 9': Se advierte en fondo blanco la leyenda 'Informativa # 9'. La voz afirma: 'Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar'. Aparece en pantalla la imagen de una carta. En un cuadro sobrepuesto se resalta una firma y la siguiente expresión: 'Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio, Director de Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat S.A.'. Acto seguido, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que se resalta el siguiente mensaje: 'Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución'. La voz afirma: 'en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió...'. Se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa, identificado como 'Presidente Acción Nacional', diciendo 'Hemos preparado una solución responsable e integral al problema del FOBAPROA'. Aparecen en escena tres personas abrazadas y riendo. Luego se observa la efigie de Felipe Calderón Hinojosa, misma que se convierte en un cero en color rojo, encabezada por la leyenda 'Manos sucias'. El narrador sentencia: 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos sucias, cero empleos'. En fondo negro se observa la leyenda: 'Candidatos a senadores de la coalición Por el Bien de Todos'.

DERECHO

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha interpretado que el Consejo General tiene plenas facultades para prevenir o corregir la comisión de conductas ilícitas, así como para tomar las medidas pertinentes que conduzcan a restaurar el orden jurídico violado y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral (al respecto, véanse las sentencias recaídas a los expedientes de apelación identificados como SUP-RAP-17/2006 y SUP-RAP-034/2006 y su acumulado).

A juicio de la Sala Superior, el Instituto Federal Electoral, en tanto responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y garante de la celebración periódica y pacífica de las elecciones federales, así como del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, debe garantizar una contienda electoral en la que imperen los principios de constitucionalidad y legalidad por parte de los actores políticos, en especial de los partidos, coaliciones y candidatos, por lo que ha de adoptar de forma oportuna las medidas eficaces para corregir y depurar violaciones al ordenamiento jurídico, como condición necesaria para una elección libre y auténtica. En la sentencia recaída el expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado la Sala Superior adujo, a la letra, lo siguiente:

*[El procedimiento especializado] no nació como una medida particular para solucionar la controversia planteada en aquél asunto, sino que es un procedimiento general, producto de las facultades explícitas e implícitas con las que cuenta el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en atención a los fines que constitucional y legalmente se le han asignado, para, de oficio o a instancia de parte, **poner inmediata solución a las situaciones anómalas que se presenten en el desarrollo del proceso respectivo, que sean atentatorias de los principios a los cuales se debe ceñir todo proceso electoral federal, y que requieran de una resolución pronta y eficaz, suficiente para poner fin a los efectos perniciosos que puedan causar sobre el proceso mismo.***

Ahora bien, la facultad de la autoridad electoral de prevenir o corregir la comisión de conductas ilícitas, así como de tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden jurídico violado y garantizar, de manera consecuente, el debido desarrollo del proceso electoral, se completa con la existencia de una facultad implícita consistente en la habilitación jurídica para exigir el cumplimiento de las resoluciones a través de las cuales se imponga a un sujeto electoral determinado una medida correctora o restauradora del orden jurídico electoral violado. A este respecto, resulta aplicable la ratio decidendi de la tesis de jurisprudencia que se cita a continuación:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

*Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias a que se refieren las fracciones que en él se enuncian, **es por demás evidente que de aquí se desprenda también la facultad para hacer efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, toda vez que la función de los tribunales no se reduce a la dilucidación de controversias de manera pronta, completa e imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus resoluciones.** Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de las autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la Ley Fundamental, que se traduce en causa de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos de los artículos 5o, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-023/98. Incidente de inejecución de sentencia.- Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.- 7 de julio de 1998.- Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/98. Incidente de inejecución de sentencia.- Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.- 7 de julio de 1998.- Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución de sentencia.- Partido Acción Nacional.- 11 de diciembre de 2000.- Unanimidad de votos.

La facultad implícita de la autoridad electoral para exigir coactivamente el cumplimiento de una resolución válidamente adoptada encuentra sustento en, por una parte, la facultad expresa del Consejo General de vigilar que los partidos, agrupaciones políticas y coaliciones cumplan con las obligaciones a las que están sujetos (artículo 82, párrafo 1, inciso h) del Código Electoral) y, por otra parte, en la obligación a cargo de los partidos, agrupaciones políticas y coaliciones que deriva de la norma que califica el incumplimiento a las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral como supuesto directo condicionante de una sanción (artículo 269, párrafo 1, inciso b) de la Ley Electoral).

Es incontrovertible que las resoluciones del Consejo General por las que se imponen medidas correctoras o depuradoras del ordenamiento jurídico- electoral establecen obligaciones específicas a cargo del sujeto responsable de la conducta cuya ilicitud ha sido determinada. Dichas obligaciones, por lo demás, deben cumplirse atendiendo a las dimensiones de realización establecidas en la propia resolución, de modo que una vez impuesta válidamente una obligación correctora o depuradora, se actualiza la facultad de la autoridad electoral de vigilar, en cualquier momento, su cabal cumplimiento.

En este orden de ideas, aceptar que la autoridad electoral carece de facultades para vencer la oposición del sujeto cuyas conductas han quedado significadas por una determinada resolución, conduce inexorablemente al absurdo de admitir la ineficacia jurídica de las facultades depuradoras o correctoras de la autoridad y, consecuentemente, del procedimiento especializado a través del cual dichas facultades deben ejercerse. Así las cosas, y precisamente en razón de que la autoridad electoral administrativa cuenta con facultades para la implementación del procedimiento abreviado, 'es que cuenta con las facultades para hacer efectivas sus determinaciones, pues en caso contrario, se estaría implementando un procedimiento ineficaz para poner fin a las violaciones que cometan los partidos políticos en el desarrollo de un proceso electoral federal, por lo tanto, se estaría negando al Instituto Federal Electoral la plena ejecución de sus atribuciones y facultades, como garante del proceso electoral federal' (sentencia relativa al expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado, p. 92).

*Como se acredita con la prueba técnica anexa, la coalición 'Por el Bien de Todos' incumplió con el resolutivo cuarto de la Resolución de mérito, toda vez que ha difundido un nuevo promocional que contiene elementos similares a los ilegalizados en la resolución que puso fin al expediente número **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**. En efecto, en el*

promocional objeto del presente incidente de inejecución la coalición 'Por el Bien de Todos': a) se asocia a Felipe Calderón Hinojosa con la operación y consecuencias del Fondo para la Protección del Ahorro Bancario, mejor conocido como FOBAPROA ('siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA...'); b) se pretende transmitir el mensaje de que dicho candidato se vale de un doble discurso, en virtud de que por una parte se manifiesta a favor de una solución responsable e integral, y por otra parte, participó, en calidad de abogado defensor, en conductas contrarias a la ley que devinieron en un daño económico; c) se incluyen aseveraciones tendientes a establecer un nexo causal entre conductas atribuibles a Felipe Calderón Hinojosa y la comisión de los delitos de robo y encubrimiento ('Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos sucias...'); y d) se incluyen mensajes que no se encuentran fundados en hechos reales y objetivos y que, en consecuencia, no respetan el derecho a una información veraz que garantice a la ciudadanía la emisión de un voto razonado y ampliamente informado, ajeno a cualquier aseveración calumniosa.

*Con base en lo anteriormente expuesto, y en virtud de que la coalición 'Por el Bien de Todos' ha incurrido en contumacia en relación con las obligaciones específicas establecidas en la resolución recaída al expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, esta autoridad electoral debe ordenar de inmediato el retiro del promocional objeto del presente incidente de inejecución y, en su caso, adoptar las medidas coactivas eficaces para garantizar el derecho subjetivo que fue reconocido por esta autoridad en la resolución cuyo incumplimiento se reclama. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las medidas de apremio y de corrección disciplinaria a las que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.*

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido:

1.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos del presente escrito por el que se interpone incidente de inejecución, por reconocida la personalidad con la que me ostento, por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y por autorizadas a las personas señaladas para recibirlas.

2.- Previos los trámites de ley, se ordene de inmediato el retiro del promocional objeto del presente incidente de inejecución y, en su caso, se impongan las medidas coactivas eficaces para garantizar el derecho subjetivo que fue reconocido por esta autoridad en la resolución cuyo incumplimiento se reclama.

3. Se impongan las medidas procedentes de apremio y de corrección disciplinaria a las que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

El quejoso acompañó como prueba para acreditar su dicho un disco compacto que contiene copia del promocional difundido por la otrora coalición “Por el Bien de Todos”.

II.- Mediante acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil seis, el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto admitió a trámite el **primer incidente de inejecución** respecto del incumplimiento recaído a la resolución del procedimiento principal.

III.- Con fecha catorce de junio de dos mil seis, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, emitió el dictamen correspondiente respecto del primer incidente de inejecución promovido dentro del expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006 (Procedimiento Principal), en el cual se propuso, en el **primer** punto de conclusiones del fallo, declarar **fundado** el primer incidente promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora coalición ‘Por el Bien de Todos, y en el **tercer** punto, agregar copias certificadas de las actuaciones al presente procedimiento administrativo sancionador, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución del procedimiento principal, por las razones expresadas en los considerandos 10 y 11, a saber:

“10.- ...En conclusión, toda vez que las expresiones referidas en la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, al igual que las que se han analizado en el presente incidente, revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo, es dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis.

*En tal virtud, procede declarar **fundado** el presente incidente, toda vez que el promocional difundido por la coalición ‘Por el Bien de Todos’, contiene elementos similares a los que fueron declarados contraventores de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incumpliendo el punto resolutivo ‘CUARTO’ de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal de fecha cuatro de junio del presente año.*

11.- Que de lo razonado hasta este punto, es posible arribar a la conclusión de que la coalición 'Por el Bien de Todos' incumplió con lo ordenado en el punto resolutivo 'CUARTO' de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal, de fecha cuatro de junio del presente año. De ahí que se considere necesario ordenar a la Coalición 'Por el Bien de Todos' **cese inmediatamente** la difusión del promocional denunciado, en términos de lo precisado en el presente fallo.

(...)

12.- Que en virtud de que el promocional difundido por la Coalición 'Por el Bien de Todos', al igual que los promocionales estudiados en el procedimiento principal, atenta en contra de lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p); 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que el incumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto, de fecha cuatro de junio del presente año, constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del mismo ordenamiento legal, **se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este instituto, remita copia certificada de las presentes actuaciones al expediente JGE/QCG/347/2006, iniciado con motivo de lo ordenado por la Junta General Ejecutiva dentro del dictamen emitido en el expediente principal.**

(...)

PRIMERO.- Se propone declarar **fundado** el presente incidente de inejecución, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición "Por el Bien de Todos", en virtud de haberse incumplido con lo ordenado en el punto resolutivo CUARTO de la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente principal.

(...)

TERCERO.- Agréguese copias certificadas de las presentes actuaciones al procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de expediente **JGE/QCG/347/2006**, iniciado en contra de la Coalición 'Por el Bien de Todos'.

IV. En sesión extraordinaria de fecha dieciséis de junio de dos mil seis, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG137/2006, relativa al procedimiento identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, en la que resolvió declarar **fundado el primer incidente de inejecución** de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída al procedimiento principal incoado por el Partido Acción Nacional en contra de la entonces Coalición “Por el Bien de Todos”.

V. Mediante acuerdo de fecha doce de octubre de dos mil seis, y en cumplimiento a lo ordenado por el dictamen de la Junta General Ejecutiva de este Instituto referido en el resultando **III**, con fundamento en los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 38, párrafo 1, inciso a), 82, párrafo 1, incisos h) y w); 84, párrafo 1, incisos a) y p); 85; 86, párrafo 1, incisos d) y l); 87; 89, párrafo 1, incisos ll) y u); 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, párrafo 1, inciso c); 14, 16, párrafo 2; 20, 21, 22, 36 y 39 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva ordenó: **1)** Emplazar a los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos” respecto de la instrucción ordenada en el dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva, de fecha catorce de junio de dos mil seis, recaído al **primer incidente de inejecución** de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del presente (sin contar sábados, domingos y días inhábiles en términos de ley), manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes, **2)** Requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que remitiera la información relativa al resultado de la práctica de los monitoreos ordenados por el Instituto Federal Electoral, en relación con los promocionales emitidos por la coalición “Por el Bien de Todos” alusivos al Partido Acción Nacional o a su entonces candidato a la Presidencia de la República el C. Felipe Calderón Hinojosa, durante los meses de mayo y junio de dos mil seis, detallando los días y horas de difusión, las frecuencias en que se emitieron y los lugares donde los mismos fueron transmitidos, y **3)** Requerir a las empresas Televisa, S.A. de C.V., y TV Azteca, S.A. de C.V., a efecto de que dentro del término de **cinco días hábiles**, contados a partir de la notificación del acuerdo en

cuestión, informaran el número de repeticiones, los días y las frecuencias en que fueron transmitidos los promocionales emitidos por la coalición “Por el Bien de Todos” alusivos al Partido Acción Nacional o a su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Felipe Calderón Hinojosa, durante los meses de mayo y junio de dos mil seis.

VI. Mediante oficios número SJGE/019/2007, SJGE/020/2007 y SJGE/021/2007, de fecha diecisiete de enero de dos mil siete, suscritos por el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el día dos de marzo del mismo año, se emplazó a los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, integrantes de otrora la coalición “Por el Bien de Todos” para que dentro del plazo de cinco días, contestaran por escrito lo que a su derecho conviniera y aportaran pruebas que estimaran pertinentes.

VII. Mediante los oficios SJGE/017/2007 y SJGE/018/2007, de fecha diecisiete de enero de dos mil siete, notificados el primero de marzo del mismo año, suscritos por el entonces Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, se requirió a las empresas Televisa, S.A. de C.V. y TV Azteca, S.A. de C.V., a efecto de que remitieran la información relacionada con los hechos que sustentan el actual procedimiento.

VIII. Con fecha diecisiete de enero de dos mil siete, se giró el oficio número SJGE/016/2007, suscrito por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, mismo que fue notificado el día veintiocho de febrero de dos mil siete al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, a efecto de que proporcionara información relacionada con hechos que sustentan el actual procedimiento.

IX. En día nueve de marzo de dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este organismo público autónomo el escrito signado por el Lic. Horacio Duarte Olivares, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto y representante común de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, mediante el cual dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad, en el que medularmente expresó lo siguiente:

CONTESTACIÓN PRIMER INCIDENTE

“El motivo del emplazamiento que se realiza a los partidos que integramos la coalición ‘Por el Bien de Todos’, deriva de lo resuelto por la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el supuesto

incidente de inejecución de resolución del procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, en el cual se concluyó que el promocional identificado como 'Informativa 9' se expone al citado candidato -Felipe Calderón Hinojosa- como una persona deshonesto vinculado con la comisión de conductas contraventoras de la ley (FOBAPROA), lo cual a juicio de la autoridad administrativa electoral 'rebasa los límites a la libertad de expresión al exponer una crítica desproporcionada y excesiva...'

Señalando además la responsable que el promocional identificado como 'informativa 9' así como los analizados en el expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006 'revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo', por lo que consideró que 'es dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis'.

Por ende, se ordena el inicio de un procedimiento administrativo oficioso en contra de la coalición electoral Por el Bien de Todos, a efecto de que se le impusieran las sanciones que en derecho procedieren por la presunta violación a lo ordenado en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obstante, el Secretario de la Junta General Ejecutiva en ningún momento señala con precisión cuáles son las presuntas violaciones a la normatividad electoral que se imputan a la coalición que represento, ni el porqué, del acto de molestia que se realiza a los integrantes de la otrora coalición 'Por el Bien de Todos'.

*En principio debe destacarse que la determinación que deba tomarse en el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa debe gozar de **un mayor grado de exhaustividad** que aquel en el que se resolvió el procedimiento especializado, si se tiene en cuenta que la resolución que en él se tome podría implicar la imposición de una sanción.*

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en reiterados criterios que los procedimientos administrativos sancionatorios tramitados y resueltos por el Instituto Federal Electoral llevan implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), pues su consecuencia radica en restringir, limitar, suspender o privar de derechos a algún gobernado.

Lo anterior ha sido recogido en las siguientes tesis relevantes y de jurisprudencia:

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. (Se transcribe)

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. (Se transcribe)

*En ese sentido, aunque el Consejo General del Instituto Federal Electoral hubiera determinado en el supuesto incidente de inejecución de resolución del procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006, que el contenido del promocional difundido por la coalición electoral 'Por el Bien de Todos' resulta violatorio a lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal resolución derivó de un procedimiento de naturaleza muy particular, cuya característica principal es que debe ser **breve y expedito**, con la finalidad de garantizar medidas inmediatas que permitan suspender la difusión de promocionales que se estimen contrarios al marco constitucional y/o legal.*

En cambio, un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, goza de características distintas que obligan al Instituto Federal Electoral tener un mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, pues su acción se encuentra encaminada a ejercer el poder correctivo o sancionador del Estado.

En el caso del procedimiento especializado del que se derivó el inicio del presente procedimiento sancionador, se desprende que la Junta General Ejecutiva y, en su momento el Consejo General, omitieron realizar actuaciones que resultaban relevantes para el descargo de las conductas que se imputan a los partidos que integramos la otrora coalición electoral 'Por el Bien de Todos'.

*En el caso concreto, debe señalarse que en el procedimiento especializado no se realizó **un análisis exhaustivo del promocional** que, consideraron tenía 'elementos similares' a los analizados en el expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, cuestión que en la especie se debe analizar pues resulta es un procedimiento diverso al especializado, que como ya se dijo persigue fines diversos.*

En principio, se objeta que el Secretario de la Junta General Ejecutiva en ningún momento señala con precisión cuáles son las presuntas violaciones a la normatividad electoral que se imputan a los integrantes de la otrora coalición 'Por el Bien de Todos'.

No debe pasar desapercibido que el acto de molestia que se realiza, parte de una inconformidad del Partido Acción Nacional en la que afirmó en su momento que se había difundido 'un nuevo promocional' que, a su juicio, contenía 'elementos similares a los ilegalizados (sic) en la resolución que puso fin al expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006'.

Sin embargo, al momento en que el Secretario de la Junta General Ejecutiva realizó el acto de molestia a los partidos integrantes de la otrora coalición 'Por el Bien de Todos', sostuvo que:

'En virtud de que del análisis al promocional contenida en el disco compacto aportado por el Partido Acción Nacional, se advierte la existencia de elementos similares a los contenidos en los promocionales que fueron considerados violatorios de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales... se admite a trámite el incidente de inejecución de la resolución mencionada promovido por el Partido Acción Nacional'.

(Lo destacado en negritas es nuestro).

*Como puede apreciarse, el Secretario de la Junta General Ejecutiva emplazó a la otrora coalición 'Por el Bien de Todos' para manifestar lo que a nuestro interés conviniera, pues advirtió la existencia de '**elementos similares**' entre el supuesto promocional difundido por dicha coalición y los que motivaron la resolución en el expediente en que se actúa.*

*Sin embargo, se trata de una afirmación dogmática y subjetiva, pues el Secretario de la Junta General Ejecutiva **NO** señaló a qué '**elementos similares**' se refirió, lo cual a todas luces representó una violación a nuestras garantías de audiencia y defensa. Pues aún cuando en la resolución que recayó al procedimiento especial se señala que: 'revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo', no manifiesta el motivo por el cual se presenta una falta de sustento en hechos reales o porque presuntamente tenía como finalidad la de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica 'como fraude o robo', - cuestión que tampoco se analizó- arribando simplemente a la conclusión de que, estos son 'elementos comunes' de los spots entre los que se pretende realizar una similitud, por lo que se debe realizar el análisis exhaustivo relativo a los supuestos 'elementos similares'.*

No se debe de pasar por alto el hecho de que al no realizarse un análisis exhaustivo relativo a la presunta similitud de los promocionales en cuestión, se determinó abrir un incidente de inejecución de sentencia, aún cuando se trataba de un promocional diverso, motivo por el cual dichas cuestiones deben ser analizadas en el procedimiento que en este acto se contesta.

Se debe hacer notar que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral no debió dar trámite de 'incidente de inejecución de resolución' a la petición formulada por el Partido Acción Nacional, **pues se trataba de un nuevo promocional (según reconoció expresamente el propio partido incoante en su escrito inicial)**, lo cual ameritaba que se le diera trámite de un procedimiento especializado diverso.

Argumento de defensa que no fue valorado para el procedimiento especializado, pero que el procedimiento que nos ocupa debe ser valorado, pues lo contrario constituiría una violación en nuestro perjuicio del principio de exhaustividad y de la garantía de audiencia de los integrantes de la otrora coalición 'Por el Bien de Todos'.

No debe pasar desapercibido que el propio representante del Partido Acción Nacional sostuvo que se inconformaba por la presunta difusión **'de un nuevo promocional'**.

Sobre el particular, se debe poner de relieve el precedente sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-17/2006, con fecha cinco de abril de 2006, en el cual estableció las reglas que deben respetarse al instaurar un procedimiento especializado:

‘...

Ahora bien, ante la posibilidad de que se emita un acto que afecte la esfera jurídica de un gobernado, un criterio de aceptación generalizada para determinar que la autoridad ha respetado la garantía de audiencia, consiste en considerar que esa garantía ha quedado salvaguardada si concurren los siguientes elementos o formalidades esenciales:

1. Proporcionar al demandado o posible afectado **una noticia completa** ya sea de la demanda o denuncia, con sus anexos, o bien, del acto privativo de derechos o posesiones que pretenda realizar la autoridad, mediante la notificación personal que se le haga, la cual debe ser suficiente y eficaz, de manera tal que se tenga un conocimiento fehaciente del hecho acto u omisión de que se trate y, por ende, una posibilidad real y amplia de defenderse:

2. Otorgar la oportunidad razonable a las partes o al posible afectado para aportar, esto es, ofrecer v desahogar las pruebas pertinentes v relevantes en que se finque la defensa, lo cual incluye, además, el derecho a que dichas pruebas sean admitidas y valoradas.

3. Otorgar la posibilidad a las partes y al posible afecto una oportunidad para que se expresen alegatos, esto es, de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trata, mediante la formulación de argumentaciones jurídicas con base en las pruebas ofrecidas, y

4. Finalizar el proceso o procedimiento administrativo mediante el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual deberá cumplir, de manera estricta, con los requisitos de motivación y fundamentación legal, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.'

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 47/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyo rubro y texto son del tenor siguientes:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. (Se transcribe).

En conclusión, si estos elementos se presentan en el procedimiento que al efecto sea implementado, con el objeto de que la autoridad electoral decida lo referente a las pretensiones planteadas por los denunciantes, la resolución que al efecto se emitiera en modo alguno sería conculcatorio.

Aunado a lo anterior, semejante procedimiento por instrumentarse debe realizarse en conformidad con los criterios de idoneidad, necesidad v proporcionalidad, habida cuenta que en un caso concreto tal procedimiento podría interferir con algún derecho fundamental.

En el presente caso, la omisión de ésta autoridad en el procedimiento especializado, provocó que violara en nuestro perjuicio, las garantías de seguridad jurídica, audiencia y defensa previstas y tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues causó un acto de afectación en la esfera jurídica de mí entonces representada. Con motivo de la supuesta difusión de un promocional, pues ordenó su retiro inmediato sin cumplir las formalidades esenciales de todo procedimiento que son exigidas en la sentencia de referencia:

1. NO proporcionó a mí representada una noticia completa del presunto hecho que se le imputaba, de manera tal que pudiera tener un conocimiento fehaciente del hecho, acto u omisión de que se trataba y, por ende, una posibilidad real y amplia de defenderse; habida cuenta que, como se ha dicho con antelación, en el auto por el que se requirió a mi representada se hablaba de que existía un supuesto promocional, pero la autoridad no acreditó su existencia, ni su difusión, pues fuimos emplazados con el simple dicho del partido político inconforme.

Por otro lado, se afirma de manera subjetiva que el promocional contenía 'elementos similares' que aquellos difundidos en un spot diverso, sin que se señalara a qué 'elementos similares' se refería la autoridad que realizó el acto de molestia.

2. NO se otorgó a mí representada una oportunidad razonable para aportar, ofrecer y desahogar, las pruebas pertinentes y relevantes en que se fincara nuestra defensa, lo cual debió incluir además, el derecho a que dichas pruebas fueran admitidas valoradas.

De hecho, de una simple lectura del proveído ordenado por el Secretario de la Junta General Ejecutiva se aprecia que ordenó lo siguiente:

*'Córrase traslado con el presente proveído a la coalición 'Por el Bien de Todos' para que en plazo (sic) de tres días contados a partir del siguiente al de su notificación, manifieste lo que a su derecho convenga **respecto de las irregularidades que se le imputan...***

Como puede apreciarse, en el proveído se otorgó a mi representada un plazo de tres días para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto 'de las irregularidades que se le imputan', **sin que en ningún momento se le otorgara el derecho de aportar pruebas**, lo cual resultaba indispensable por tratarse de un '**nuevo promocional**', tal y como lo reconocía expresamente el partido político que se inconformaba.

Tampoco se realizó una audiencia de ofrecimiento, admisión desahogo de pruebas, de tal manera que mi representada en dicha audiencia hubiera podido estar en aptitud de presentar argumentos y pruebas de descargo.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia en el caso que nos ocupa pues, como se ha dicho reiteradamente, la Junta General Ejecutiva nos emplazó sosteniendo de manera dogmática y subjetiva que dos promocionales contaban con 'elementos similares', sin precisar a que elementos se refería, cuestión que ocurre también en el emplazamiento que se contesta, pues no se establece con claridad porque 'revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en

hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo’.

Pero además, resultaba importante que se nos otorgara posibilidad de comparecer a una audiencia de pruebas y alegatos, habida cuenta que el promocional que motivo la instauración del ‘incidente de inejecución de resolución’ contenía una serie de elementos que no eran comunes con el spot que fue motivo del procedimiento especializado resuelto por el Consejo General del Instituto Federal Electoral e identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

No debe pasar desapercibido que del promocional cuyo estudio nos ocupa se desprende con claridad que aproximadamente en el 80% ochenta por ciento de su contenido se refería a los servicios que prestó el C. Felipe Calderón Hinojosa a la institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A.

En ese sentido, el promocional, en un ochenta por ciento del tiempo que lo compone, se refería aun hecho que no formó parte del promocional que fue materia del procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

Por tanto, en el supuesto incidente de inejecución del procedimiento especializado, la Junta General Ejecutiva y en su momento el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para haber podido realizar cualquier consideración o valoración sobre el contenido del spot en controversia, resultaba indispensable que diera a mi representada la oportunidad de presentar elementos probatorios a efecto de demostrar a la autoridad que los servicios que prestó el C. Felipe Calderón Hinojosa a la institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A. son hechos verificables y cumplen con el canon veracidad.

3. Por cuanto al tercer elemento que sostuvo la Sala Superior en la sentencia recaída al Recurso de Apelación con número de expediente SUP-RAP-17/2006, NO se otorgó a la coalición ‘Por el Bien de Todos’ la oportunidad de expresar alegatos, esto es, de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trataba, mediante la formulación de argumentaciones jurídicas con base en las pruebas ofrecidas; pues, como se ha dicho, no obstante que se trataba de un **nuevo promocional**, no fuimos citados a una audiencia de ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas y alegatos.

Ahora bien, en el supuesto incidente de inejecución de sentencia del expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, el Consejo General concluye que la coalición ‘Por el Bien de Todos’ incumplió con lo ordenado en el punto resolutivo CUARTO de

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

*la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento especializado con número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, resuelto con fecha cuatro de junio del presente año; por lo que ordenó a la otrora coalición 'Por el Bien de Todos' **cesar inmediatamente** la difusión del promocional en controversia.*

Para arribar a la conclusión apuntada, se basa en el 'supuesto' estudio del promocional identificado como 'Informativa # 9', análisis que es superficial y falta de exhaustividad y, por ende, violatorio del principio de legalidad electoral.

El referido estudio se realiza en el considerando número 10 diez arábigo de la resolución, y en el mismo sostiene que 'la existencia y contenido del promocional en estudio, no se encuentra sujeto a controversia ni es objeto de prueba, en virtud de tratarse de un hecho público y notorio, que adicionalmente obra en poder de esta autoridad, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral'.

Como puede apreciarse, se sostuvo que la existencia y contenido del promocional 'no se encuentra sujeto a controversia', pasando por alto que la coalición 'Por el Bien de Todos' si objetó su contenido e hizo notar que no había verificado la efectiva transmisión del promocional, argumentos que no fueron analizados en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Por otra parte, se afirma de manera dogmática y subjetiva que el promocional no 'es objeto de prueba, en virtud de tratarse de un hecho público y notorio', sin señalar por qué estima que es un hecho con tales características.

Sostiene además que el spot 'obra en poder de esta autoridad, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral', omitiendo acreditar cuál es el documento preciso que le fue enviado por señalada Dirección de Prerrogativas con la que es nuevamente requerido para la integración del procedimiento administrativo sancionador y que no se acompaña al emplazamiento realizado con fecha dos de marzo del año en curso, cuestión que tampoco ocurrió en el emplazamiento del presunto incidente de inejecución del procedimiento especializado con número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006 lo cual hicimos valer como argumento de defensa en su momento, cuestión que tampoco fue analizada en la resolución.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral en la resolución del presunto incidente de inejecución del procedimiento especializado con número de expediente JGE/PE/PAN/CG/2006 sostiene lo siguiente:

‘...

Una vez detallado el contenido del promocional sujeto a valoración, la autoridad de conocimiento colige que el contenido de las imágenes y afirmaciones expuestas en el mismo, concretamente por lo que hace a la afirmación ‘Se robaron el dinero y siguen en la impunidad’. Tienen la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley derivadas de la aprobación del FOBAPROA. En este contexto, se advierte que el promocional que nos ocupa difunde un elemento similar a los que fueron declarados contraventores de las normas electorales en el procedimiento principal.

En virtud, esta autoridad estima que el contexto gráfico y lingüístico en que se presenta el promocional de merito, guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como ‘Fobaproa 1 y Fobaproa 2’, en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación del FOBAPROA, toda vez que de nueva cuenta se vale de expresiones carentes de sustento en un hecho real y objetivo presentando a dicho candidato frente a los receptores de los mensajes como una persona vinculada con de la ejecución fuera de la ley.

En ese sentido, no pasa inadvertida para esta autoridad, la conclusión del promocional, utilizando la frase ‘Manos sucias, cero empleos’, concatenada con los elementos gráficos y lingüísticos expuestos en el promocional de mérito, presentándolo como una persona deshonesto que ha tenido vínculos con conductas contrarias a la ley (‘fraude del FOBAPROA’ en los promocionales estudiados en el principal y ‘robo’ en este incidente), y que no genera empleos, hechos que en la especie no encuentran sustento en hechos veraces o al menos no demostrados.

Sobre este particular, debe decirse que si bien la expresión ‘Manos sucias’ no fue valorada individualmente dentro del procedimiento principal, lo cierto es que la misma formó parte una valoración en conjunto de las frases ‘con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia’, ‘encubriste a los que nos robaron y sigues encubriendo a los culpables’, los cuales fueron estimadas por esta autoridad como contraventoras de la normatividad electoral, en virtud de que dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas al orden jurídico.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la expresión ‘Manos sucias’, se emplea como una conclusión mediante la que se expone al citado candidato

como una persona deshonesto vinculado con la comisión de conductas contraventoras de la ley (FOBAPROA), sin que dicha circunstancia se encuentre sustentada en hechos reales o al menos no demostrados.

En tal virtud, la vinculación que hace la coalición denunciada del C. Felipe Calderón Hinojosa con la realización de conductas contrarias a la ley a través de su participación o vinculación con el multicitado fideicomiso, no se encuentra sustentado en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración, por lo que rebasa los límites de la libertad de expresión al exponer una crítica desproporcionada y excesiva que no se encuentra fundada en un hecho real o demostrado.

En conclusión, toda vez que las expresiones referidas en la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, al igual que las que se han analizado en el presente incidente, revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo, de dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis.

...'

Tal y como puede apreciarse, el Consejo General 'colige' que el contenido de las imágenes y afirmaciones expuestas en el mismo, concretamente por lo que hace a la afirmación 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad', tienen la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley derivadas de la aprobación del FOBAPROA; y que es ese contexto '...el promocional que nos ocupa difunde un elemento similar a los que fueron declarados contraventores de las normas electorales en el procedimiento principal'.

Tales argumentos resulten violatorios del principio de exhaustividad, pues como se ha destacado, en aproximadamente el 80% ochenta por ciento de contenido del promocional en controversia se refería a los servicios que prestó el C. Felipe Calderón Hinojosa a la institución bancaria Scotiabank Inverlat S.A., lo cual es un hecho que no formó parte de los promocionales que fueron materia del procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

Por tanto, la Junta General Ejecutiva y en su momento el Consejo General, para haber podido realizar cualquier consideración o valoración sobre el contenido del spot en controversia, debieron haber hecho el análisis de dichos

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

argumentos, además de que se encontraban obligados a verificar si tal afirmación cumplía o no con el canon de veracidad, lo cual no realizó; cuestión que en el presente procedimiento se debe realizar, haciendo uso el Instituto Federal Electoral de sus facultades investigadoras.

En la especie, al tratarse de un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, goza de características distintas que obligan al Instituto Federal Electoral, no solo a tener mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, sino que además debe desplegar sus facultades de investigación, con el objeto de conocer la verdad histórica de los hechos y determinar si lo dicho en el spot de referencia, denominado 'Informativa # 9' constituye un hecho real y verificable.

En este sentido se solicita respetuosamente ordene el Secretario de la Junta General Ejecutiva, la realización de las diligencias necesarias a efecto de corroborar los hechos materia de la queja.

Se solicita corrobore con la información que obra en los archivos de este instituto la fecha o periodo en el cual Felipe Calderón Hinojosa, fue Presidente del Partido Acción Nacional.

Así mismo se requiere solicite a Inverlat informe a esta Instituto, Si Felipe Calderón Hinojosa prestó sus servicios a dicha institución y cual fue el periodo durante el cual lo hizo.

Se requiere también respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que solicite a la H. Cámara de. Diputados del Congreso de la Unión, un informe del proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionado con el rescate bancario, a efecto de que sea agregado a los autos del presente expediente, con el fin de corroborar la participación que tuvo el Partido Acción Nacional en la aprobación de dicha conversión, cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente del Partido Acción Nacional.

Finalmente se solicita se realicen todas las diligencias que se consideren necesarias, haciendo uso de sus facultades de investigación, que puedan servir a efecto de determinar, si los hechos expuestos en el promocional denominado 'Informativa # 9', son o no ciertos.

Por otra parte, y que es ese contexto la afirmación en el sentido de que '...el promocional que nos ocupa difunde un elemento similar a los que fueron declarados contraventores de las normas electorales en el procedimiento principal', resulta violatoria del principio de legalidad al carecer de la debida motivación, pues no señala a qué 'elementos similares' se refiere.

Además, afirma de manera ligera que el mensaje contenido en el promocional 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad...' tiene "la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley derivadas de la aprobación del FOBAPROA', sin realizar un análisis objetivo del promocional y dando por sentado que los hechos que se describen en el spot son falsos, lo cual es a todas luces violatorio del principio de objetividad, por lo cual en el procedimiento administrativo sancionador debe realizarse el análisis correspondiente, pues como ya se dijo, son procedimientos con una finalidad diversa.

Por además respecto de la frase 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad', omitieron tomar en cuenta que es una expresión que no hace imputación alguna al C. Felipe Calderón Hinojosa, pues se realiza en plural y de manera general, refiriéndose a aquellas personas que pudieron haber participado en la aprobación de la iniciativa de ley del IPAB, que legalizó el FOBAPROA, e implicó convertir en deuda pública créditos irregulares, y que, es un hecho público y notorio que existen elementos de prueba suficientes para acreditar que fueron destinados ilegalmente para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, por parte de empresarios o banqueros como Gerardo de Provoisin, Carlos Cabal Peniche (Banca Unión), Ángel Isidoro Rodríguez (Banpaís), Jorge Lankenau (banca Confía) e, inclusive, para el beneficio de personas relacionadas con el Partido Acción Nacional.

De igual manera omite tomar en consideración que la frase 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad', no es una expresión que se encontrara contenida en los dos promocionales que fueron motivo de análisis en el procedimiento principal, por lo que no era posible que se acusara a la otrora coalición 'Por el Bien de Todos' de incumplir con lo resuelto en dicho fallo.

En ese sentido, resulta violatoria del principio de legalidad la afirmación del Consejo General en el sentido de que '...el contexto gráfico y lingüístico en que se presenta el promocional de mérito, guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como 'Fobaproa # 1 Y Fobaproa # 2', en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación del FOBAPROA, toda vez que de nueva cuenta se vale de expresiones carentes de sustento en un hecho real y objetivo presentando a dicho candidato frente a los receptores de los mensajes como una persona vinculada con de la ejecución de conductas fuera de la ley'.

Dichas afirmaciones son subjetivas pues no realizan un análisis objetivo del contenido del mensaje que se contiene en el promocional y da por sentado que

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

los hechos que se describen en el spot son falsos (prestación de servicios de Felipe Calderón al banco Inverlat), lo cual es a todas luces violatorio del principio de objetividad.

Pero aunado a lo anterior, sostiene de manera dogmática y subjetiva que existe identidad del promocional pues ‘guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como ‘Fobaproa 1 y Fobaproa 2, en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación de FOBAPROA’, pasando por alto que en el promocional que motivó el presente procedimiento **en ninguna parte se acusa al candidato del Partido Acción Nacional de haber participado en la comisión de un fraude, o en el encubrimiento de un robo, o en la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos o se le acusa de ser una persona “vinculada con de la ejecución de conductas fuera de la ley.**

Con el objeto de demostrar la inexactitud de lo sostenido, basta un simple cotejo de los elementos que contienen los promocionales respecto de los cuales se concluyó de manera ligera que contaban con ‘elementos similares’, lo cual se desprende de las propias transcripciones de los promocionales que se realiza en la resolución del supuesto incidente de inejecución de sentencia relativo al procedimiento especial JGE/PE/PAN/CG/006/2006:

<i>‘Informativa # 1’</i>	<i>‘Informativa # 9’</i>
<i>Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos’, acompañando esta imagen se escucha una voz que repite el contenido de la leyenda antes trascrita.</i> <i>Posteriormente, aparece en un fondo color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: ‘FOBAPROA’, la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos</i>	<i>Se observa un documento en el que se resalta un cuadro sobrepuesto en el que se aprecia una firma en conjunto con la siguiente locución: Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio. Director Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat S.A, mientras la voz el off continúa diciendo: ‘Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar’.</i> <i>En forma inmediata, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que</i>

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

'Informativa # 1'	'Informativa # 9'
<p><i>firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude mas grande de la historia: el fobaproa'.</i></p> <p><i>Seguido de las imágenes antes descritas, se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: 'encubriste a los que nos robaron'.</i></p> <p><i>Acto continuo, aparece el rostro del C. Felipe Calderón Hinojosa que de manera inmediata se convierte en el número cero, en color rojo, apreciándose en la parte superior del mismo la leyenda 'Manos', y en la inferior 'Sucias', seguido de imágenes de varias personas que aparentemente muestran una condición socio-económica, acompañado de la voz que continua diciendo: 'y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad, y nos traes el cuento del empleo cuando tienes cero en empleos creados'.</i></p> <p><i>En primer plano, aparece en la pantalla un fondo de color blanco con la leyenda en letras de color rojo. 'Informativa # 2', seguida de una voz en off, que</i></p>	<p><i>sobresale el siguiente mensaje: 'Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución'.</i></p> <p><i>Conjuntamente con la imagen antes descrita, la voz en off continua manifestando: 'en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió...'</i></p> <p><i>Seguido a las frases e imágenes antes detalladas se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa señalando lo siguiente: 'Hemos preparado una solución responsable e integral al problema del FOBAPROA'. En forma inmediata aparecen en escena tres personas abrazadas y con un semblante sonriente.</i></p> <p><i>Posteriormente se observa la efigie de Felipe Calderón, misma que se convierte en un cero en color rojo, imagen en cuya parte superior se aprecia la leyenda 'Manos sucias'.</i></p> <p><i>A la par de las anteriores iconografías la voz en off culmina su mensaje señalando: 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos Sucias, cero empleos'.</i></p>

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

'Informativa # 1'	'Informativa # 9'
<p data-bbox="344 476 755 974"><i>dice 'Informativa dos', mostrándose a continuación un fondo en color blanco dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda 'FOBAPROA', la cual se ubica en forma transversal y en las que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el fobaproa'.</i></p> <p data-bbox="344 1010 755 1310"><i>Seguida a las anteriores imágenes aparece el C. Felipe Calderón Hinojosa, sosteniendo una hoja o documento acompañado de una voz que señala lo siguiente: 'Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia'.</i></p> <p data-bbox="344 1346 755 1709"><i>Acto continuo, se inserta la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa apreciándose que se encuentra sentado detrás de un escritorio y al lado de la bandera nacional, diciendo con voz enérgica: 'Seguiremos con las auditorias para que no solo se castigue a los responsables, sino que devuelvan el dinero'.</i></p> <p data-bbox="344 1745 755 1877"><i>Posteriormente se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con</i></p>	<p data-bbox="911 476 1321 905"><i>.se observa un documento en el que se resalta un cuadro sobrepuesto en el que se aprecia una firma en conjunto con la siguiente locución: 'Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio. Director Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat SA.', mientras la voz en off continua diciendo: 'Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar.'</i></p> <p data-bbox="911 911 1321 1205"><i>En forma inmediata, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que sobresale el siguiente mensaje: 'Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución'.</i></p> <p data-bbox="911 1211 1321 1877"><i>Conjuntamente con la imagen antes descrita, la voz en off continua manifestando: 'en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió...'. Seguida a las frases e imágenes antes detalladas se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa señalando lo siguiente: 'Hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA'. En forma inmediata aparecen en escena tres personas abrazadas y con un semblante sonriente.</i></p>

'Informativa # 1'	'Informativa # 9'
<p>esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: 'Y sigues encubriendo a los culpables'.</p> <p>En seguida de la imagen antes descrita, se aprecian imágenes de varias personas que aparentemente denotan una condición socio económica baja y con la expresión adusta, acompañado de la voz antes referida que continúa diciendo: 'y no te importaron los más d de un millón de trabajadores despedidos sin piedad, Calderón: eres muy mentiroso.</p>	<p>Posteriormente se observa la efigie de Felipe Calderón Hinojosa, misma que se convierte en un cero en color rojo, imagen en cuya parte superior se aprecia la leyenda: 'Manos sucias'. A la par de las anteriores iconografías la voz en off culmina su mensaje señalando: 'Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos Sucias, cero empleos'.</p>

Como puede apreciarse de una simple lectura del contenido de los promocionales, contrario a lo sostenido en la resolución del Consejo General no existe identidad en su contenido y, por ende, actúo indebidamente al concluir que la otrora coalición Por el Bien de Todos incumplió con lo resuelto en el procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

Debe destacarse que nunca precisa a qué se refiere cuando afirma que contiene elementos similares y, por el contrario, ha quedado demostrado que el promocional materia del 'incidente de incumplimiento de resolución' contiene **un mensaje totalmente distinto**, que busca trasmitir a la sociedad un hecho cierto y verificable que es que cuando el C. Felipe Calderón Hinojosa fue Presidente Nacional del Partido Acción Nacional fue, al mismo tiempo, abogado defensor del Banco Inverlat que, a la postre, fue beneficiado por 30 mil millones de dólares del FOBAPROA.

Es por lo anterior que debe hacerse un análisis el contenido del mensaje principal del promocional, lo cual resulta necesario para poder determinar el contexto en el que era expresado y poder constatar el canon de veracidad.

Tampoco es exacto, como afirma el Consejo en la resolución, que en el promocional se acuse al candidato del Partido Acción Nacional de haber participado 'en la comisión de un fraude', o 'en el encubrimiento de un robo', o

*‘en la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos’, pues con los anteriores cuadros esquemáticos queda demostrado con claridad que en el promocional identificado como Informativa 9, **jamás se utilizan dichas expresiones.***

No es óbice para lo anterior el que se afirme en la resolución, que dicha frase formó parte una valoración en conjunto de las frases ‘con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia’, ‘encubriste a los que nos robaron’ y ‘sigues encubriendo a los culpables’, las cuales fueron estimadas por esta autoridad como contraventoras de la normatividad electoral, pues para que se pudiera estimar que existía incumplimiento de la resolución, resultaba indispensable que existiera plena identidad de elementos y, como ha quedado demostrado, el contexto en el que se emiten los mensajes contenidos en los spots es totalmente distinto.

Por último, es importante dejar de relieve que no es exacto, como se afirma en la resolución del supuesto incidente de inejecución del procedimiento especializado que ‘dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas contrarias al orden jurídico’; pues lo que se buscaba con dicho promocional es contrastar dos posiciones distintas en un tema de alta relevancia e interés nacional y evidenciar la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, de la que fue partícipe el entonces candidato presidencial de dicho partido en su carácter de Presidente Nacional y como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas.

Lo anterior resulta de la mayor importancia pues la responsable ignora la discusión jurídica y política sobre el tema, y que la posición de los partidos políticos de oposición, estuvo encaminada a evidenciar que la aprobación de la iniciativa de ley del IPAB (que legalizó el FOBAPROA) implicó convertir en deuda pública créditos irregulares, y que, incluso existen elementos de prueba suficientes para acreditar que fueron destinados ilegalmente para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, por parte de empresarios o banqueros como Gerardo de Provoisin, Carlos Cabal Peniche (Banca Unión), Ángel Isidoro Rodríguez (Banpaís), Jorge Lankenau (banca Confía) e, inclusive, para el beneficio de personas relacionadas con el Partido Acción Nacional.

Pasa por alto, así mismo, que el tema que es materia del promocional (que es el rescate bancario) se encuentra vinculado con las propuestas de gobierno que en el presente proceso electoral pasado se encontraba obligada a difundir la coalición electoral ‘Por el Bien de Todos’.

En efecto, en el Programa de Gobierno de la coalición electoral 'Por el Bien de Todos', registrado ante el Instituto Federal Electoral, en el capítulo relativo a IV. POLITICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO, apartado 'Financiamiento del Desarrollo', número 192, textualmente se señala:

192.- Terminarse con el compromiso presupuestal que proviene de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorbe una parte sustantiva del PIB.

Por lo que se debe realizar en la especie el análisis respectivo, pues es claro que el tema que se manejaba en el promocional resultaba pertinente y relacionado con el Programa de Gobierno que, por obligación legal, la coalición electoral 'Por el Bien de Todos' debía difundir dentro de la propaganda que difundió en la campaña del proceso electoral 2005-2006.

De lo anterior debe concluirse, que la autoridad debe realizar un análisis exhaustivo del promocional en cuestión, pues es indispensable que en el caso de un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, se goce de características distintas que obligan al Instituto Federal Electoral tener un mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, pues su acción se encuentra encaminada ejercer el poder correctivo o sancionador del Estado.

No obstante, de una lectura cuidadosa de la resolución del supuesto incidente de inejecución de sentencia relativo al procedimiento especial JGE/PE/PAN/CG/006/2006, se puede apreciar que en ningún momento analizaron las cuestiones que en este momento se plantean, con lo cual violó a todas luces el principio de exhaustividad y el derecho de audiencia de los integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos, pues es de explorado derecho que para que pueda darse por satisfecha dicha garantía no es suficiente que se conceda al acusado la oportunidad de comparecer al procedimiento en el que se le acusa, sino que se atiendan todas y cada una de las cuestiones que hace valer su defensa.

No obstante, resulta indispensable que lo anterior sea valorado en el presente procedimiento sancionatorio habida cuenta que, con dicho análisis, es posible acreditar las circunstancias del caso y, en particular, que los mensajes difundidos por la coalición electoral 'Por el Bien de Todos', se sustentan en datos veraces y objetivos.

En efecto, en diversos criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral se ha sostenido que la circunstancia de que el

ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos se encuentre modulada o condicionada por su propia naturaleza y por las funciones que tienen encomendadas, así como por las garantías constitucional y legalmente establecidas para su consecución, no se deriva la reducción de este ámbito de libertad a extremos que podrían considerarse incongruentes con el papel que está llamada a cumplir en el sistema democrático, vaciada de todo contenido real, pues con ello no sólo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios partidos estuvieran siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus fines constitucionales, ya que al ser coparticipes en la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, su función no se limita a fungir como intermediarios entre los ciudadanos y el acceso al poder público.

Se ha sostenido que, por el contrario, si bien es cierto que su trascendencia en el desenvolvimiento democrático se proyecta en particular intensidad en los procesos electivos, también lo es que son expresiones del pluralismo político de la sociedad, receptores y canalizadores, por ende, de las demandas, inquietudes y necesidades existentes en la población, lo que implica que también ocupan un lugar preponderante en el escrutinio ciudadano del ejercicio de las funciones públicas, respecto del cual los institutos políticos y, especialmente, los ciudadanos, cuentan con un interés legítimo, garantizado constitucionalmente por el derecho a la información igualmente reconocido en el artículo 6 in fine, a saber cómo se ejerce el poder público, pues éste, según prevé el artículo 39 de la propia Ley Fundamental, dimana del pueblo soberano mismo y sólo su ejercicio se traslada a los poderes de la Unión o a los de los Estados, en términos del artículo 41, primer párrafo del ordenamiento en cita.

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones correspondientes a los recursos de apelación con números de expedientes SUP-RAP-009/2004, SUP-RAP-31/2006, SUP-RAP-34/2006, correspondiendo los dos últimos, a procedimientos especializados.

En particular, en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-009/2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral, establece que para que se puedan definir con claridad los parámetros que debe requisitar una propaganda electoral a fin de que encuadre debidamente en el debate de las ideas y propuestas, en el marco de la sana crítica y de los principios del Estado democrático y social de derecho y que infunda a sus militantes y simpatizantes, así como a la comunidad en general, una auténtica cultura democrática, deben atenderse los siguientes criterios:

a) *En cuanto a la naturaleza del contenido del mensaje, la propaganda electoral debe privilegiar los mensajes cuyo contenido abarque situaciones o hechos de*

carácter objetivo, donde la verificación empírica sea posible, para de ahí derivar ideas y opiniones sobre la plausibilidad de alternativas, por encima de la emisión de apreciaciones abstractas o juicios de valor, con pretensiones de verosimilitud, en los que no es posible demostración alguna.

b) A través de la propaganda electoral, los partidos políticos deben promover el desarrollo de la opinión pública, del pluralismo político y la participación democrática de la ciudadanía, por lo que la tarea particular de estos entes, debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público.

Sobre estas bases, ha sostenido el Tribunal y el Consejo General del propio Instituto que, se entiende fácilmente que aquellos mensajes cuyo contenido guarde congruencia con las finalidades anotadas, es decir, propenda ala sana consolidación de una opinión pública libre, al perfeccionamiento del pluralismo político y al desarrollo de una cultura democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del ordenamiento jurídico y, por ello, se encuentran legitimadas las eventuales críticas negativas que en tales mensajes se contenga, aun aquellas que resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos los partidos políticos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se trate no contengan conforme los usos sociales, expresiones intrínsecamente injuriosas o difamantes, o bien, resulten gratuitas, desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en cuyos casos carecen de toda cobertura legal, por resultar inconducentes o innecesarias, según sea el caso, con el interés general que pretende consolidar la Carta Magna.

c) El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercado lógicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige

la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.

En el caso, del análisis del promocional en controversia, para efecto del presente procedimiento sancionatorio, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) *En cuanto a la naturaleza del contenido del mensaje, la propaganda electoral privilegia un mensaje cuyo contenido abarca situaciones o hechos de carácter objetivo, pues versa sobre un tema de alta relevancia e interés nacional y evidencia la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional del tema conocido como FOBAPROA de la que fue partícipe el entonces candidato presidencial de dicho partido en su carácter de Presidente Nacional y como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas.*

Es decir que, el tema de la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, de la que fue partícipe el entonces candidato presidencial de dicho partido en su carácter de Presidente Nacional y como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas. es un tema de relevancia nacional, toda vez que los ciudadanos tienen derecho a encontrarse debidamente informados de hechos como los que se exponen en el promocional.

b) *Con el promocional en cuestión, la otrora coalición Por el Bien de Todos promovió el desarrollo de la opinión pública, pues expuso la participación de Felipe Calderón Hinojosa en su carácter de Presidente Nacional de su partido y como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas, en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA.*

Para tal efecto, solicito respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionado con el rescate bancario, a efecto de que sea agregado a los autos del presente expediente.

Por tanto, el promocional busca la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público, y que los receptores del mensaje conozcan la participación y posición asumida por el candidato del Partido Acción Nacional en relación al tema expuesto en dicho promocional.

c) En cuanto al contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral, debe atenderse al hecho que se hicieron en el curso del proceso electoral y que, de acuerdo a lo sostenido por el propio Consejo General, se realizan en el marco de una crítica negativa que, aun cuando pudieran parecer dura e intensa, y generar incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, no es desproporcionada, pues como ha quedado destacado, tiene vinculación con el Programa de Gobierno que por obligación legal debía difundir la coalición en su propaganda y busca la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público, y que los receptores del mensaje contrasten y conozcan un hecho real, pues expuso la participación de Felipe Calderón Hinojosa en su carácter de Presidente Nacional del Partido Acción Nacional v como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional del tema conocido como FOBAPROA.

*Debe decirse además que el Partido Acción Nacional no presentó prueba alguna que fuera útil para acreditar no sólo que hubieran sido difundidos los promocionales, sino **su duración, periodicidad en su difusión, canales o frecuencias en que podrían haber sido difundidos**, lo cual resultaba indispensable para acreditar la supuesta afectación de que se duele; y **en el presente caso resulta fundamental para que la autoridad pueda valorar las circunstancias del caso y, en su caso, la gravedad de la falta.***

*En el mismo sentido, y para los mismos efectos, debe tenerse en cuenta que la coalición electoral Por el Bien de Todos difundió dicha campaña **en respuesta** a una campaña negra **iniciada** por el Partido Acción Nacional en la que, de manera **totalmente desproporcionada**, se atacó **reiterada y sistemáticamente** a su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.*

Por lo anteriormente expuesto y fundado a los integrantes de la Junta general Ejecutiva y en su momento del Consejo General del Instituto Federal Electoral atentamente solicito:

PRIMERO.- *Tener en los términos del presente ocurso, dando contestación al emplazamiento realizado a mí representado con fecha dos de marzo del presenta año, en el procedimiento administrativo con número de expediente identificado al rubro.*

SEGUNDO.- *Se me tenga por reconocida la personería con que me ostento.*

TERCERO.- *En su oportunidad y previos los trámites de ley, dictar resolución declarando infundado el procedimiento.*

X. Mediante proveído de fecha doce de marzo de dos mil siete, el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este organismo público autónomo tuvo por recibido el escrito mediante el cual dio respuesta al emplazamiento formulado por auto de fecha doce de octubre de dos mil seis, respecto de los hechos materia del primer incidente de inejecución, signado por el Lic. Horacio Duarte Olivares, representante común de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”.

SEGUNDO INCIDENTE

I. Con fecha veintitrés de junio de dos mil seis, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este organismo público autónomo el escrito signado por el C. Germán Martínez Cázares, entonces representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, mediante el cual promovió el **segundo incidente** de inejecución de resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, al tenor de los siguientes términos:

*“**GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES**, en mi carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, personalidad que tengo debidamente acreditada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, edificio A, planta baja, colonia Arenal Tepepan de esta ciudad, y autorizando para recibirlas a Lariza Montiel Luis y Miguel Novoa Gómez, respetuosamente comparezco para promover **incidente de inejecución** de la Resolución del Consejo General recaída al procedimiento instaurado por el Partido Acción Nacional en contra la coalición ‘Por el Bien de Todos’, identificado como **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, al tenor de los siguientes:*

HECHOS

*I. En sesión extraordinaria celebrada el 4 de junio de 2006, el Consejo General aprobó la **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO INCOADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR EL BIEN DE TODOS”, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN VIOLACIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**, identificada*

bajo el número **CG129/2006** y en virtud de la cual se puso fin al procedimiento especializado número **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**.

II. En la parte relativa a las consideraciones de hecho y de derecho de la resolución de mérito, el Consejo General concluyó, entre otros extremos, lo siguiente:

De conformidad con las directrices precisadas en la transcripción que antecede, corresponde realizar el análisis de cada uno de los promocionales materia del presente asunto, a efecto de determinar si su contenido se ajusta o no a dichos parámetros de orden jurídico.

PROMOCIONAL DENOMINADO FOBAPROA #1

En primer término, en pantalla aparece sobre un fondo de color blanco la leyenda 'Informativa # 1, en letras rojas, seguido de la imagen del rostro del C. Felipe Calderón Hinojosa, misma que en la parte inferior dice en letras negras 'FOBAPROA' y a un costado la leyenda también en color negro con la palabra cómplice subrayada en color rojo: 'Informativa uno. Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos'; acompañando esta imagen se escucha una voz que repite el contenido de la leyenda antes transcrita.

Posteriormente, aparece en un fondo color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: 'FOBAPROA'; la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el fobaproa'.

Seguido de las imágenes antes descritas, se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: 'encubriste a los que nos robaron'.

Acto continuo, aparece el rostro del C. Felipe Calderón Hinojosa que de manera inmediata se convierte en el número cero en color rojo, apreciándose en la parte superior del mismo la leyenda 'Mano'; y en la inferior 'Sucias'; seguido de imágenes de varias personas que aparentemente muestran una condición socio-económica, acompañado de la voz que continúa diciendo: 'y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad, y nos traes el cuento del empleo cuando tienes cero en empleos creados'.

Por último, sobre fondo calor negro se aprecia la leyenda: 'Diputados y Senadores del PRD':

De conformidad con lo expresado hasta este punto, esta autoridad colige que el contenido de las frases expuestas en el promocional de referencia, soportadas en la serie de imágenes que acompañan a cada una de ellas, tienen la finalidad de transmitir a los receptores de esos mensajes, que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó en un acontecimiento (suscripción del FOBAPROA) que la Coalición 'Por el bien de Todos' considera un fraude, lo cual, de acuerdo a la percepción de dicha coalición, tuvo como consecuencia la pérdida de empleos.

Del mismo modo, se observa que el promocional en cuestión pretende transmitir el mensaje de que el C. Felipe Calderón Hinojosa encubrió a algunas personas, que desde la óptica de la coalición referida, cometieron un robo a través del FOBAPROA.

En efecto, la forma en que se presenta el mensaje en cuestión, se encuentra destinado a formar una opinión en el auditorio, en específico, tener por ciertos o con apariencia de verdaderos, hechos consistentes en la comisión de un fraude y de encubrimiento por parte del candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional a través de su participación en la suscripción del FOBAPROA, transmitiendo el mensaje de que dicha personaje realiza acciones contrarias a la ley en perjuicio de la población.

Al respecto, conviene reproducir, a manera de criterio orientador, los conceptos jurídicos de los delitos de fraude y de calumnia contenidos en los artículos 356 y 386 del Código Penal Federal, mismos que a la letra establecen lo siguiente:

Artículo 356

(Se cita) Artículo 386

(Se cita)

Como podemos observar, en materia penal, el delito de calumnia se configura a través de la imputación que se hace a otra persona física de un hecho considerado por la legislación penal como delito, siendo condición para su configuración la falsedad del hecho, o bien la inocencia de la persona.

Por su parte, la comisión del delito de fraude se configura cuando se realiza un engaño en perjuicio de una persona o se saca algún provecho de la falsa apreciación de la realidad que éste tiene y se obtiene alguna cosa o se alcanza un beneficio indebido.

Al respecto, conviene precisar que los conceptos antes enunciados no implican que esta autoridad prejuzgue, respecto de la existencia o no de conductas delictivas, previstas y sancionadas por el ordenamiento penal, cuya aplicación se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Instituto Federal Electoral.

Una vez establecidos los anteriores criterios, la afirmación hecha por la Coalición denunciada en el sentido de que el C. Felipe Calderón Hinojosa fue autor de un fraude al suscribir el FOBAPROA, pone en evidencia que al comunicar a los receptores del promocional la imputación de un delito en perjuicio de dicha persona, tal aserción se realiza con la única finalidad de denigrar su imagen, trastocando los límites de la garantía de la libertad de expresión, plasmada en el artículo 60 constitucional, y excediendo así mismo, los límites establecidos a través de los diversos criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-009-2004, toda vez que el empleo de expresiones calumniosas con el único fin de denigrar la imagen pública del candidato del partido denunciante, contradice los parámetros de referencia, conforme a los cuales, el sujeto emisor debe transmitir mensajes cuyo contenido abarque situaciones o hechos de carácter objetivo, que sean susceptibles de verificación empírica, demostrándose en el presente caso que las afirmaciones en cuestión no encuentran sustento en hechos demostrados.

Ahora bien, por lo que hace a la expresión ‘encubriste a los que nos robaron’; la autoridad de conocimiento, estima que la misma trasmite a los receptores de ese mensaje la idea de que el C. Felipe Calderón Hinojosa realizó una conducta contraria a la ley, realizando acciones tendentes a ocultar a los responsables de un robo.

Sobre este particular, conviene reproducir, a manera de criterio orientador, los conceptos jurídicos de los delitos de robo y encubrimiento contenidos en los artículos 367 y 400 del Código Penal Federal, mismos que a la letra establecen lo siguiente:

Artículo 367.

(se cita)

Artículo 400

(se cita)

De los dispositivos legales antes transcritos, podemos obtener la definición del delito de robo, mismo que se traduce en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin tener el derecho a disponer legalmente de la misma.

Tratándose del delito de encubrimiento, se exige como presupuesto para su configuración la realización anterior de un delito, en cuya ejecución no participe el sujeto que con posterioridad al mismo oculte el producto del delito, favorezca el ocultamiento del responsable del primer delito, o bien, le preste cualquier tipo de auxilio o ayuda.

En esta tesitura, es conveniente precisar que esta autoridad al enunciar los tipos penales en cita, no prejuzga respecto de la existencia o no de conductas delictivas, previstas y sancionadas por el ordenamiento penal, lo cual se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Instituto Federal Electoral.

Por su parte, en cuanto al uso de la expresión en la que se asevera: 'daño: más de un millón de empleos perdidos'; la autoridad de conocimiento considera que se trata de una afirmación a través de la cual la Coalición denunciada transmite en los destinatarios del mensaje, que las conductas supuestamente desplegadas por el C. Felipe Calderón Hinojosa tuvieron un resultado que se tradujo en la pérdida de empleos, sin embargo, dicha tesis carece de sustento en un hecho de carácter objetivo, pues como ya quedó asentado en líneas precedentes, no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que el referido rescate bancario hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, ello no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa.

Esto es así, toda vez que el nexo causal por el que la coalición denunciante pretende responsabilizar al multicitado candidato con el detrimento o menoscabo en los empleos, no se encuentra apoyado en un hecho sujeto a un canon de veracidad y por tanto no cumple con los requisitos que debe revestir toda crítica contenida dentro de la propaganda de los partidos políticos.

Una vez establecidas las anteriores consideraciones, podemos arribar a la conclusión de que las aseveraciones difundidas en los promocionales en estudio que vinculan al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude y del encubrimiento de un robo, se trata de expresiones que tienen como finalidad denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, presentándolo frente a los receptores de los mensajes como una persona responsable de la ejecución de conductas contrarias a la ley, rebasando los límites a la libertad de expresión, pues se le atribuyen conductas no veraces, o al menos no demostradas.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis, contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PROMOCIONAL DENOMINADO FOBAPROA # 2

En un primer plano, aparece en la pantalla un fondo de color blanco con la leyenda en letras de color rojo: 'Informativa # 2', seguida de una voz en off, que dice 'Informativa dos'; mostrándose a continuación un fondo en color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: 'FOBAPROA', la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el fobaproa'.

Seguida a las anteriores imágenes aparece el C. Felipe Calderón Hinojosa, sosteniendo una hoja o documento acompañado de una voz que señala lo siguiente: 'Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia'.

Acto continuo, se inserta la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, apreciándose que se encuentra sentado detrás de un escritorio y al lado de la bandera nacional, diciendo con voz enérgica: 'Seguiremos con las auditorías para que no sólo se castigue a los responsables, sino que devuelvan el dinero'.

Posteriormente se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: ‘Y sigues encubriendo a los culpables’.

Enseguida de la imagen antes descrita, se aprecian imágenes de varias personas que aparentemente denotan una condición socio-económica baja y con expresión adusta, acompañado de la voz antes referida que continúa diciendo:’ y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad Calderón: eres muy mentiroso’.

En la parte final, aparece en un fondo de color negro la frase: ‘Candidatos a Diputados del PRD’.

Al respecto, conviene considerar que dentro del promocional en estudio, existen elementos que guardan identidad con algunos que ya han sido objeto de valoración por parte de esta autoridad, al realizar el análisis del promocional identificado como FOBAPROA #1, particularmente con las expresiones ‘...con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el fobaproa’, ‘Y sigues encubriendo a los culpables’.

En esta tesitura, esta autoridad considera que respecto de las frases ‘con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia’, ‘encubriste a los que nos robaron’ y sigues encubriendo a los culpables”, deben prevalecer las mismas consideraciones expuestas dentro del análisis realizado al promocional identificado como ‘fobaproa # 1’, en virtud de que dichas expresiones pretenden transmitir a los receptores del mensaje, que el C. Felipe Calderón Hinojosa ha cometido conductas contrarias a la ley, lo que no encuentra sustento en hechos veraces o al menos no demostrados.

En efecto, debe hacerse hincapié que las frases ‘con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia’, ‘encubriste a los que nos robaron’ y sigues encubriendo a los culpables’ expuestas dentro de los promocionales motivo del presente procedimiento, de conformidad con el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado, constituyen aseveraciones calumniosas, en virtud de que carecen de sustento para hacer explícita la crítica de la Coalición ‘Por el Bien de Todos’ a las

características personales del aludido candidato, al imputarle la comisión de conductas ilícitas apoyadas en acontecimientos inexactos.

En tal virtud, el contenido de la información que difunde la coalición denunciada a los receptores del mensaje, no se encuentra fundado en hechos reales y objetivos, en consecuencia, no respeta el derecho a una información veraz que garantice a la ciudadanía la emisión de un voto razonado y ampliamente informado, ajeno a cualquier aseveración calumniosa.

*De esta forma, el uso de la **calumnia**, por lo que hace a las afirmaciones antes mencionadas, **denigra** a la persona del candidato presidencial por el partido denunciante, perjudicando la fama pública u opinión colectiva que se tiene de dicho personaje.*

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que si bien dentro del promocional bajo análisis, se observa la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa manifestando ‘Seguiremos con las auditorías para que no sólo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero’, hecho que en la especie no fue redargüido por el partido actor, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta suficiente para arribar a las conclusiones que pretende transmitir la coalición denunciada, pues de la misma no es dable colegir, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBABROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje haya encubierto conductas delictivas o contrarias a la ley, y finalmente que las afirmaciones antes referidas, permitan calificarlo como mentiroso, toda vez que el elemento en estudio, sólo permite desprender que el candidato aludido se pronunció sobre un hecho de interés nacional, sin que ello demuestre su participación en los hechos que se le pretenden atribuir en el promocional de referencia.

Asimismo, respecto de la expresión contenida en el promocional en estudio relativa a que: ‘Y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad’, ésta autoridad advierte que no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que el referido rescate bancario hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, ello no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa.

Por último, tratándose de la expresión ‘eres muy mentiroso’, esta autoridad estima que dicho calificativo es un juicio de valor por el que

se le atribuye una determinada característica personal al multicitado candidato, resultado de las premisas por las que se le vincula con la comisión de conductas delictivas derivadas de su participación en el FOBAPROA y que produjo consecuencias económicas negativas en la sociedad, transmitiendo a los receptores el mensaje de que dicho candidato se vale de un doble discurso, en virtud de que por una parte el citado candidato se manifiesta a favor de castigar a los responsables de obtener un beneficio en forma ilícita, y por otra, él fue artífice de conductas contrarias a la ley que devinieron en un daño económico social.

Al respecto, esta autoridad considera que el calificativo con el que se presenta al C. Felipe Calderón Hinojosa se hace con la finalidad de denigrar su imagen, en virtud de que el juicio que se emite en su persona no se encuentra sustentado en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración; en consecuencia rebasa los límites de la libertad de expresión al ser una crítica desproporcionada y excesiva que no encuentra sustento en un hecho real.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis, contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. *Que de lo razonado hasta este punto, es posible arribar a las siguientes conclusiones:*

A) *La presente denuncia es **infundada**, por lo que hace al motivo de inconformidad consistente en que el promocional no propicia la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los documentos básicos y de la plataforma electoral que para la elección en cuestión registró la Coalición 'Por el Bien de Todos'.*

B) *La presente denuncia es **fundada**, respecto de las violaciones relativas a lo dispuesto en los artículos **38**, párrafo **1**, inciso **p)** y **186**, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cometidas por la Coalición "Por el Bien de Todos", al haber difundido en el promocional materia del actual procedimiento,*

expresiones que denigran al C. Felipe Calderón Hinojosa frente al electorado.

Lo anterior, trastoca los límites a la libertad de expresión establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los lineamientos a que debe sujetarse la crítica contenida dentro de la propaganda electoral, referidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de diversos precedentes emitidos por dicho órgano jurisdiccional en materia electoral.

Finalmente, esta autoridad considera pertinente realizar una evaluación global acerca de las características observadas en los promocionales materia del actual procedimiento, a efecto de evidenciar la necesidad de ordenar a la Coalición 'Por el Bien de Todos' el cese inmediato de su difusión entre la ciudadanía, así como la de cualquier otra publicidad en la que se denigre a los partidos políticos, coaliciones o candidatos durante la actual contienda electoral.

Tales características, que se desprenden del análisis detallado que se ha efectuado en el cuerpo de la presente resolución, son las siguientes:

1.- La omisión de difundir la plataforma electoral o los programas de gobierno de la Coalición 'Por el Bien de Todos' (independientemente de que, como ya se señaló en el apartado correspondiente, este requisito no es exigible en la totalidad de la propaganda que emitan los partidos políticos).

2.- Las imputaciones realizadas al C. Felipe Calderón Hinojosa: 'con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia'; 'Encubriste a los que nos robaron'; 'sigues encubriendo a los culpables' y 'eres un mentiroso'.

Los elementos anteriormente referidos, analizados de manera global, permiten arribar a la conclusión de que los promocionales en su conjunto tienen como finalidad denigrar y afectar la imagen pública del candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en la legislación electoral federal.

En adición a lo anterior, debe decirse que no escapa a esta autoridad que el contexto histórico en el que han sido transmitidos los promocionales de mérito, obedece a una contienda basada en la

difusión de promocionales, que en algunos casos la autoridad administrativa y jurisdiccional han determinado como transgresores de la normatividad electoral, misma en la que han participado el Partido Acción Nacional, la Coalición 'Por el Bien de Todos' y la Coalición 'Alianza por México'.

*Así las cosas, esta autoridad considera que resulta indispensable para el normal desarrollo del proceso electoral 2005-2006, adoptar medidas que resulten suficientes para garantizar dicha circunstancia, así como para cumplir con los fines que constitucional y legalmente tiene encomendadas. De ahí que se considere necesario ordenar a la Coalición "Por el Bien de Todos" **cese inmediatamente** la difusión de los promocionales en medios electrónicos, por considerarse contrarios al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo, y **en lo sucesivo** se abstenga de difundir cualquier publicidad que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.*

No obsta para lo anterior, que la Coalición 'Por el Bien de Todos' haya manifestado dentro de las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, que con fecha veintisiete de mayo de dos mil seis, cesó de transmitir los promocionales en cuestión, ya que dicha circunstancia no resulta suficiente para acreditar fehacientemente que la coalición denunciada no ha difundido los promocionales de referencia durante el periodo comprendido entre la fecha que señala y la de emisión del presente fallo, y por otra parte, aun en el supuesto de que se acreditara dicha circunstancia, ello no constituiría un obstáculo para que en el futuro la denunciada pudiera ordenar su retransmisión, en caso de que esta autoridad no se pronunciara al respecto.

III. Con base en lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolutivo lo siguiente:

SEGUNDO. - Se declara **fundada** la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición 'Por el Bien de Todos'; por lo que hace al aspecto sintetizado en el párrafo identificado con el inciso **B)** del considerando 10 de la presente resolución.

TERCERO.- Se ordena a la Coalición 'Por el Bien de Todos' **cese inmediatamente** la difusión en medios electrónicos, de los

promocionales de referencia, por considerarse contrario al orden constitucional y legal, en términos de lo precisado en el presente fallo.

CUARTO.- Se ordena a la coalición “Por el Bien de Todos” que en lo sucesivo se abstenga de difundir cualquier publicidad **que contenga elementos similares a los que han sido declarados contraventores de la normatividad electoral**, en términos de lo precisado en el presente fallo, particularmente, en cuanto a las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o sus candidatos.

IV. A las 20:52 horas del 7 de Junio de 2006, la coalición ‘Por el Bien de Todos’ transmitió por el canal 2 (XEW-TV) operado por la empresa Televisa, el siguiente promocional:

Promocional identificado como ‘Informativa 9’: Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘Informativa # 9’. La voz afirma: ‘Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar’. Aparece en pantalla la imagen de una carta. En un cuadro sobrepuesto se resalta una firma y la siguiente expresión: ‘Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio. Director Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat S.A.’. Acto seguido, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que se resalta el siguiente mensaje: ‘Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución’. La voz afirma: ‘en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió...’. Se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa, identificado como ‘Presidente Acción Nacional’, diciendo: ‘Hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA’. Aparecen en escena tres personas abrazadas y riendo.

Luego se observa la efigie de Felipe Calderón Hinojosa, misma que se convierte en un cero en color rojo encabezada por la leyenda ‘Manos sucias’. El narrador sentencia: ‘Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos sucias, cero empleos’. En fondo negro se observa la leyenda: ‘Candidatos a senadores de la coalición Por el Bien de Todos’.

V. Mediante escrito de fecha 6 de junio de 2006, la Representación del Partido Acción Nacional promovió incidente de inejecución de la resolución que puso fin al procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

VI. En sesión extraordinaria celebrada el 16 de junio de 2006, el Consejo General aprobó la **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO INCOADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LA COALICIÓN ‘POR EL BIEN DE TODOS’, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, identificada bajo el número CG137/2006.

VII. En la parte relativa a las consideraciones de hecho y de derecho de la resolución por la que se resolvió el incidente de inejecución interpuesto por El Partido Acción Nacional, el Consejo General concluyó, entre otros extremos, lo siguiente:

ANÁLISIS DEL PROMOCIONAL DENUNCIADO

Ahora bien, dentro del promocional en cuestión, se aprecia sobre un fondo de color blanco la leyenda: 'Informativa # 9', en letras rojas, acompañado de una voz en off que dice: "Informativa nueve" Acto seguido se observa un documento en el que se resalta un cuadro sobrepuesto en el que se aprecia una firma en conjunto con la siguiente locución: 'Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio. Director Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat S.A.', mientras la voz el off continúa diciendo: 'Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar.'

En forma inmediata, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que sobresale el siguiente mensaje: 'Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución'. Conjuntamente con la imagen antes descrita, la voz en off continúa manifestando: 'en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió...'. Seguida a las frases e imágenes antes detalladas se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa señalando lo siguiente: 'Hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA'. En forma inmediata aparecen en escena tres personas abrazadas y con un semblante sonriente.

Posteriormente se observa la efigie de Felipe Calderón Hinojosa, misma que se convierte en un cero en color rojo, imagen en cuya parte

superior se aprecia la leyenda ‘Manos sucias’. A la par de las anteriores iconografías la voz en off culmina su mensaje señalando: ‘Se robaron el dinero y siguen en la impunidad Manos Sucias, cero empleo’.

Por último, en un fondo de color negro se observa la leyenda: ‘Candidatos a senadores de la Coalición Por el Bien de Todos.’

Al respecto, conviene precisar que la existencia y contenido del promocional en estudio, no se encuentra sujeto a controversia ni es objeto de prueba, en virtud de tratarse de un hecho público y notorio, que adicionalmente obra en poder de esta autoridad, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Una vez detallado el contenido del promocional sujeto a valoración, la autoridad de conocimiento colige que el contenido de las imágenes y afirmaciones expuestas en el mismo, concretamente por lo que hace a la afirmación ‘Se robaron el dinero y siguen en la impunidad’ tienen la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley derivadas de la aprobación del FOBAPROA. En este contexto, se advierte que el promocional que nos ocupa difunde un elemento similar a los que fueron declarados contraventores de las normas electorales en el procedimiento principal.

En tal virtud, esta autoridad estima que el contexto gráfico y lingüístico en que se presenta el promocional de mérito, guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como ‘Fobaproa # 1 y Fobaproa # 2’, en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación del FOBAPROA, toda vez que de nueva cuenta se vale de expresiones carentes de sustento en un hecho real y objetivo presentando a dicho candidato frente a los receptores de los mensajes como una persona vinculada con de la ejecución de conductas fuera de la ley.

En ese mismo sentido, no pasa inadvertida para esta autoridad, la conclusión del promocional, utilizando la frase ‘Manos sucias, cero empleos’, concatenada con los elementos gráficos y lingüísticos expuestos en el promocional de mérito, presentándolo como una

persona deshonesto que ha tenido vínculos con conductas contrarias a la ley ('fraude del FOBAPROA' en los promocionales estudiados en el principal y 'robo' en este incidente), y que no genera empleos, hechos que en la especie no encuentran sustento en hechos veraces o al menos no demostrados.

Sobre este particular, debe decirse que si bien la expresión 'Manos sucias' no fue valorada individualmente dentro del procedimiento principal, lo cierto es que la misma formó parte de una valoración en conjunto de las frases 'con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia'; 'encubriste a los que nos robaron' y sigues encubriendo a los culpables'. las cuales fueron estimadas por esta autoridad como contraventoras de la normatividad electoral, en virtud de que dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas contrarias al orden jurídico.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la expresión 'Manos sucias', se emplea como una conclusión mediante la que se expone al citado candidato como una persona deshonesto vinculado con la comisión de conductas contraventoras de la ley (FOBAPROA), sin que dicha circunstancia se encuentre sustentada en hechos reales o al menos demostrados.

En tal virtud, la vinculación que hace la coalición denunciada del C. Felipe Calderón Hinojosa con la realización de conductas contrarias a la ley a través de su participación o vinculación con el multicitado fideicomiso, no se encuentra sustentado en hechos reales concretos y susceptibles de demostración, por lo que rebasa los límites de la libertad de expresión al exponer una crítica desproporcionada y excesiva que no se encuentra fundada en un hecho real o demostrado.

En conclusión, toda vez que las expresiones referidas en la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, al igual que las que se han analizado en el presente incidente, revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo, es dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis.

*Consecuentemente, procede declarar **fundado** el presente incidente, toda vez que el promocional difundido por la Coalición 'Por el Bien de Todos', contiene elementos similares a los que fueron declarados contraventores de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2*

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incumpliendo el punto resolutivo 'CUARTO' de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal de fecha cuatro de junio del presente año.

VIII. Con base en lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral adoptó la siguiente determinación:

PRIMERO.- *Se declara **fundado** el presente incidente de inejecución, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la Coalición 'Por el Bien de Todos', en virtud de haberse incumplido con lo ordenado en el punto resolutivo CUARTO de la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente principal.*

SEGUNDO.- *Se ordena a la Coalición 'Por el Bien de Todos' **cese inmediatamente** la difusión en medios electrónicos, del promocional objeto del presente incidente.*

IX. Los días 21 y 22 de junio de 2006, durante la emisión del programa 'Las noticias con Adela' conducido por Adela Micha, la coalición 'Por el Bien de Todos' difundió el siguiente promocional:

Aparece una televisión con la imagen del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y una voz de fondo que dice: 'Salinas creó la peor crisis de la historia'.

Se observa una imagen del rostro de Felipe Calderón Hinojosa con un fondo blanco. En la parte inferior de ésta se advierte la palabra 'FOBAPROA' y el número '1999' en color negro. Acto seguido, se escucha una voz que afirma: 'La crisis derivó en el fraude del Fobaproa en 1999 que aprobó el PAN y el PRI con Calderón'.

Se muestra una imagen de una casa y un automóvil frente a ella con una pinta de 'se vende'; ambos visiblemente abandonados, y la inserción de la frase 'Más de 628 mil Casas Embargadas'. Ahí se escucha: 'Se embargaron más de 628 mil casas'.

Acto seguido aparece una imagen de una familia desplazándose al lado de una gran barda, y sobre la cual se inserta la frase 'Más de Un Millón de Empleos Perdidos'. En ese momento se escucha lo siguiente: 'Se perdieron más de un millón de empleos'.

Cambia la imagen y aparece una mujer con las manos en el rostro y la leyenda 'Una deuda de 120 Mil Millones de Dólares', así como una voz que dice: 'y tenemos una deuda de 120 mil millones de dólares'.

Se repite la imagen en la que aparece la efigie de Felipe Calderón Hinojosa y la palabra 'FOBAPROA' en la parte inferior. Se escucha una voz que expresa lo siguiente: 'Que Calderón no te siga engañando. El PAN y el PRI te dañaron'.

Se muestra entonces distinta imagen del candidato Calderón. A través de una simulación digital, la efigie se transforma en el número '1' y en la parte superior se consigna la frase 'Manos Sucias'; y otra que en parte inferior señala 'Empleo', con la finalidad de crear la frase completa 'Manos Sucias, 1 Empleo'. Durante esta transformación digitalizada se escucha: 'Manos sucias, un empleo para su cuñado'.

DERECHO

La Sala Superior del Tribunal Electoral ha interpretado que el Consejo General tiene plenas facultades para prevenir o corregir la comisión de conductas ilícitas, así como para tomar las medidas pertinentes que conduzcan a restaurar el orden jurídico violado y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral (al respecto, véanse las sentencias recaídas a los expedientes de apelación identificados como SUP-RAP-17/2006 y SUP-RAP-034/2006 y su acumulado).

A juicio de la Sala Superior, el Instituto Federal Electoral, en tanto responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y garante de la celebración periódica y pacífica de las elecciones federales, así como del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, debe garantizar una contienda electoral en la que imperen los principios de constitucionalidad y legalidad por parte de los actores políticos, en especial de los partidos, coaliciones y candidatos, por lo que está llamado a adoptar de forma oportuna las medidas eficaces para corregir y depurar violaciones al ordenamiento jurídico, como condición necesaria para una elección libre y auténtica.

Al respecto, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado la Sala Superior adujo, a la letra, lo siguiente:

[El procedimiento especializado] no nació como una medida particular para solucionar la controversia planteada en aquél asunto, sino que es un procedimiento general, producto de las facultades explícitas e implícitas con las que cuenta el Consejo General del Instituto Federal

*Electoral, en atención a los fines que constitucional y legalmente se le han asignado, para, de oficio o a instancia de parte, **poner inmediata solución a las situaciones anómalas que se presenten en el desarrollo del proceso respectivo, que sean atentatorias de los principios a los cuales se debe ceñir todo proceso electoral federal, y que requieran de una resolución pronta y eficaz, suficiente para poner fin a los efectos perniciosos que puedan causar sobre el proceso mismo.***

Ahora bien, la facultad de la autoridad electoral de prevenir o corregir la comisión de conductas ilícitas, así como de tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden jurídico violado y garantizar, de manera consecuente, el debido desarrollo del proceso electoral, se complementa con la existencia de una facultad implícita consistente en la habilitación jurídica para exigir el cumplimiento de las resoluciones a través de las cuales se imponga a un sujeto electoral determinado una medida correctora o restauradora del orden jurídico electoral violado. Sobre el particular, resulta aplicable la ratio decidendi de las tesis que se cita a continuación:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS RESOLUCIONES.- (SE TRANSCRIBE)

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER.- (SE TRANSCRIBE)

La facultad implícita de la autoridad electoral para exigir coactivamente el cumplimiento de una resolución válidamente adoptada encuentra sustento en, por una parte, la facultad expresa del Consejo General de vigilar que los partidos, agrupaciones políticas y coaliciones cumplan con las obligaciones a las que están sujetos (artículo 82, párrafo 1, inciso h) del Código Electoral) y, por otra parte, en la obligación a cargo de los partidos, agrupaciones políticas y coaliciones que deriva de la norma que califica el incumplimiento a las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral como supuesto directo condicionante de una sanción (artículo 269, párrafo 1, inciso b) de la Ley Electoral).

Es incontrovertible que las resoluciones del Consejo General por las que se imponen medidas correctoras o depuradoras del ordenamiento

jurídico-electoral establecen obligaciones específicas a cargo del sujeto responsable de la conducta cuya ilicitud ha sido determinada. Dichas obligaciones, por lo demás, deben cumplirse atendiendo a las dimensiones de realización establecidas en la propia resolución, de modo que una vez impuesta válidamente una obligación correctora o depuradora, se actualiza la facultad de la autoridad electoral de vigilar, en cualquier momento, su cabal cumplimiento.

En este orden de ideas, aceptar que la autoridad electoral carece de facultades para vencer la oposición del sujeto cuyas conductas han quedado significadas por una determinada resolución, conduce inexorablemente al absurdo de admitir la ineficacia jurídica de las facultades depuradoras o correctoras de la autoridad y, consecuentemente, del procedimiento especializado a través del cual dichas facultades deben ejercerse (véase, sentencia relativa al expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado, p. 92).

*Como se acredita en la prueba técnica anexa, la coalición 'Por el Bien de Todos' ha incumplido nuevamente con el resolutivo cuarto de la Resolución de mérito, toda vez que ha difundido un nuevo promocional que contiene elementos similares a los ilegalizados en la resolución que puso fin al expediente número **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**.*

En efecto, en la resolución que de forma primigenia ordenó el retiro de los promocionales e impuso la obligación de no difundir nuevamente los elementos propagandísticos ilegalizados, así como en la diversa en la que el Consejo General se pronunció sobre el incumplimiento a esa orden por parte de la coalición 'Por el Bien de Todos', la autoridad electoral determinó exhaustivamente los elementos comunicativos -- auditivos y visuales-- que vulneraron la normativa electoral y que, por tanto, integran el ámbito material de validez de la obligación de no hacer 'qué no hace') contenida en el resolutivo cuarto de la resolución del 4 de junio de 2006. Dichos elementos --por lo demás confirmados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de conformidad con la sentencia SUP-RAP-042/2006-- son los siguientes:

a) Objetivo: dar a conocer datos sobre acontecimientos que se reputan como veraces, puesto que llevan por título la expresión 'Informativa' y tienen una secuencia progresiva ('1' y '2'), de manera tal que se anuncian como continentes de noticias sobre acontecimientos históricos;

b) Formulación lingüística del mensaje: los enunciados utilizados son categóricos y no retóricos. En consecuencia, no constituyen opiniones

o evaluaciones relacionadas con acontecimientos públicamente sobresalientes por corresponder a quien fuera un servidor público o figura destacada por su relevancia en el ámbito político, social o cultural, o bien, de las posiciones institucionales de una fuerza política;

c) Temática específica: i) La autoría del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA); ii) sus graves efectos nacionales consistieron en una deuda de ciento veinte mil millones de dólares y el despido de más de un millón de trabajadores; y iii) su relevancia por la comisión de conductas delictivas, ya que, se afirma, Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional estuvieron involucrados en una conducta fraudulenta al suscribir dicho fondo, y con ello, a su vez, se encubrió a quienes robaron a la población en general. Esto es, la coalición ha afirmado que el candidato a la Presidencia de la República registrado por el Partido Acción Nacional, es cómplice de un delito y encubridor de otros individuos que, a su vez, cometieron uno distinto, mientras que el partido político mencionado es copartícipe de un delito;

d) Expresiones gratuitas o desproporcionadas: los mensajes originalmente emitidos estaban reforzados con elementos auditivos que exageran las afirmaciones, como lo son ‘con tus manos sucias’; ‘fraude más grande de la historia’; ‘trabajadores despedidos sin piedad’; ‘nos traes el cuento del empleo, cuando tienes cero en empleos creados’, y ‘Calderón eres muy mentiroso’, así como con componentes gráficos simbólicos que refuerzan las expresiones orales, por ejemplo, un cuadro en el que aparece la suscripción de un documento con la imagen sobrepuesta del candidato Felipe Calderón; otro cuadro, en la que el candidato esboza una sonrisa y muestra un documento, de manera simultánea a la reproducción de la deuda contraída con la creación de dicho fondo; un diverso cuadro en que el propio candidato ofrece castigar a los culpables y obtener la devolución del dinero, como preludio a otro en el que aparecen tres hombres vestidos de traje en actitud festiva y que representarían a los beneficiados con el supuesto fraude y que habrían robado a la población, y una secuencia de individuos de edad avanzada y de extracción humilde que, en oposición a los anteriores, representarían a las personas despedidas y cuya condición no importó a los responsables del fraude, así como un cuadro final en la que el rostro del candidato se convierte en un cero que equivale a los empleos generados.

El promocional difundido por la coalición ‘Por el Bien de Todos’, en abierto desafío a dos resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, reproduce los cuatro grupos de elementos

comunicativos --en su expresión visual y auditiva--que fueron ilegalizados por esta autoridad, además de que tiene la misma estructura argumentativa de los promocionales previamente conocidos por esta autoridad, toda vez que: 1) se imputa a Felipe Calderón Hinojosa el hecho de haber participado en el FOBAPROA y, en cuanto tal, la responsabilidad de haber cometido algún delito (robo o fraude), y 2) se le atribuyen de manera directa las consecuencias económicas y sociales derivadas de la operación de dicho fondo.

En primer lugar, debe destacarse que el promocionar que se reprocha por la vía de este incidente tiene un carácter preponderantemente informativo. Tal cualidad se desprende tanto de las conclusiones explícitas e implícitas del mensaje, como de su tono general. En efecto, en el promocional se formulan afirmaciones con apariencia de verosimilitud sobre supuestos acontecimientos históricos. Se explicitan, incluso, circunstancias de tiempo y de modo, así como presuntos hechos negativos ocurridos como consecuencia de conductas particulares. Las frases ‘la crisis derivó en el fraude del FOBAPROA en 1999...’, ‘se embargaron más de 628 mil casas’; ‘tenemos una deuda de más de 120 mil millones de dólares’, por citar los ejemplos más emblemáticos, constituyen, de nueva cuenta, afirmaciones categóricas sobre hechos que no pueden ser imputados a Felipe Calderón Hinojosa y/o al Partido Acción Nacional.

Además, en el promocional se observa en dos ocasiones la efigie de Felipe Calderón Hinojosa vinculada a la frase ‘FOBAPROA’ y el número ‘1999’, con lo cual se intenta establecer, una vez más, un vínculo entre la actuación pública del citado candidato y el contexto histórico de aquél año, bajo la apariencia de un recuento o relataría de hechos.

De forma similar a los enunciados contenidos en los promocionales identificados como ‘Informativa # 1’ e ‘Informativa # 2’, el promocional detectado no contiene expresiones que pudiesen ser reputadas como opiniones o evaluaciones relacionadas con acontecimientos públicamente sobresalientes, debido a que, como ya quedó resuelto por esta autoridad administrativa en las dos resoluciones descritas en el apartado de hechos de este escrito, Felipe Calderón Hinojosa no tuvo participación alguna en la creación, operación o disolución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario.

Es importante insistir en que el promocional detectado comparte con los diversos ilegalizados una temática común, a saber: 1) se imputa a Felipe Calderón Hinojosa y al Partido Acción Nacional la autoría del

Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario; 2) como consecuencia derivada de tal autoría, se les asocia con, al menos, tres efectos nacionales graves: embargos generalizados de viviendas, empleos perdidos y aumento de la deuda pública, y 3) se subraya que el candidato Felipe Calderón Hinojosa participó en la comisión de ilícitos, al ‘aprobar’, ‘avalar’, ‘firmar’ o al efectuar cualesquier acción similar relacionada con el FOBAPROA.

Ahora bien, en el promocional se advierten, al menos, cuatro elementos auditivos que exageran el mensaje propagandístico, a saber: ‘Que Calderón no te siga engañando’, ‘El PAN y el PRI te dañaron’, ‘Manos sucias’, ‘Un empleo para su cuñado’, Asimismo, se advierten componentes gráficos simbólicos que acentúan la desproporcionalidad de la crítica negativa, tales como la imagen de Carlos Salinas de Gortari en un televisor; el cuadro en el que aparece la efigie de Felipe Calderón, la palabra ‘Fobaproa’ (se oscurece paulatinamente conforme avanza la narración) y el número ‘1999’; el cuadro en el que se aprecia una vivienda con signos de deterioro, así como un vehículo con la frase ‘se vende’; la imagen en la que se observa un grupo de personas de escasos recursos, presumiblemente una familia, caminando junto a una barda; el cuadro que contiene la imagen de una mujer con ambas manos sobre las mejillas en señal de angustia o desasosiego, imagen que aparece en los promocionales ilegalizados ‘Informativa 1’ e ‘Informativa 2’.

El cuadro siguiente sintetiza los elementos que componen el promocional objeto del presente incidente de inejecución, y que son similares a los previamente ilegalizados por esta autoridad electoral:

Elementos comunes a promocionales previamente ilegalizados	Contenido del promocional que se reprocha por la vía del presente incidente
Objetivo: Dar a conocer datos sobre acontecimientos que se reputan como Veraces	El carácter preponderante o predominantemente informativo se advierte en el tono general del promocional, así

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

	como en las conclusiones explícitas e implícitas del mensaje.
Formulación lingüística del mensaje	Los enunciados utilizados son categóricos y no retóricos
<p>Temática específica:</p> <p>i) La autoría del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA);</p> <p>ii) Sus graves efectos nacionales consistieron en una deuda de ciento veinte mil millones de dólares y el despido de más de un millón de trabajadores, y</p> <p>iii) Su relevancia por la comisión de conductas delictivas</p>	<p>i) 'La crisis derivó en el fraude del FOBAPROA en 1999 que aprobó el PAN y el PRI con Calderón'.</p> <p>ii) 'Se embargaron más de 628 mil casas'; 'se perdieron más de un millón de empleos'; 'y tenemos una deuda de más de un millón de empleos'.</p> <p>iii) 'La crisis derivó en el fraude del FOBAPROA en 1999 que aprobó el PAN y el PRI con Calderón'.</p>
Expresiones gratuitas o desproporcionadas: los mensajes originalmente emitidos estaban reforzados con	<p>Elementos auditivos que exageran las afirmaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Que Calderón no te siga engañando'.

<p>elementos auditivos que exageran las afirmaciones, como lo son 'con tus manos sucias'; 'fraude más grande de la historia'; 'trabajadores despedidos sin pieda'; 'nos traes el cuento del empleo, cuando tienes cero en empleos creados', y 'Calderón eres muy mentiroso', así como con componentes gráficos simbólicos que refuerzan las expresiones orales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 'El PAN y el PRI te dañaron'. • 'Manos sucias' • 'Un empleo para su cuñado'. Gráficos simbólicos que refuerzan las expresiones orales: • La imagen de Carlos Salinas de Gortari en un televisor; • Cuadro en el que aparece la efigie de Felipe Calderón, la palabra 'Fobaproa' (se obscurece paulatinamente conforme avanza la narración) y el número '1999'. • Cuadro en el que aparece una vivienda con signos de deterioro, así como un vehículo con la frase 'se vende'. • Cuadro en el que aparece un grupo de personas de escasos recursos, presumiblemente una familia, caminando
--	---

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

	<p>junto a una barda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuadro en el que aparece la imagen de una mujer, con ambas manos sobre las mejillas en señal de angustia o desasosiego, la misma que aparece en los promocionales ilegalizados 'Informativa 1' e 'Informativa 2'.
--	---

*Es importante destacar que en la sentencia recaída al expediente de apelación SUP-RAP-049/2006 promovido por la propia coalición 'Por el Bien de Todos', la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la constitucionalidad y legalidad del punto resolutivo cuarto de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto del procedimiento especializado incoado por el Partido Acción Nacional, en contra de la coalición 'Por el Bien de Todos', por hechos que considera constituyen violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, identificada con la clave **CG129/2006**, emitida el 4 de junio de 2006, en los términos siguientes:*

En efecto, opuestamente a lo que sostiene el recurrente, la utilización de la frase 'elementos similares' en el resolutivo cuarto de la resolución recurrida, no es, por sí misma, violatoria de los principios de certeza y objetividad, pues se encuentra vinculada a lo que se señala en el propio cuarto resolutivo, así como a la parte considerativa de la resolución.

*De la lectura integral de la resolución impugnada se desprende que **la autoridad administrativa específica cuáles son esos 'elementos similares' y expresamente señala en el resolutivo cuarto que son particularmente las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o candidatos.***

Asimismo, la coalición actora no tiene en cuenta que los resolutivos de una resolución siempre deben analizarse en relación con la parte considerativa de la misma, en tanto que la resolución es un todo, que guarda íntima relación con cada una de sus partes.

*En la especie, contrariamente a lo que señala la coalición actora, en el apartado B) **del considerando 10 de la resolución recurrida se señala expresamente qué tipo de expresiones son aquellas que la autoridad administrativa considera que denigran a los partidos políticos, coaliciones o candidatos.***

En la página 93 de la resolución se determinó que la configuración de una expresión que implique diatriba, calumnia, infamia o injuria, se puede dar a través de la simple exteriorización de calificativos, expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonrosas o infamantes, o bien, a través de aquellas expresiones que resulten impertinentes, innecesarias o desproporcionadas, es decir, aquellas locuciones cuyo propósito fundamental sea descalificar a otro instituto político basadas en hechos aparentemente verídicos.

También en las páginas 93 a 95 de la resolución impugnada se sostienen y transcriben los criterios que ha utilizado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-RAP-34/2006 y SUP-RAP-36/2006, para determinar cuándo hay denostación, calumnias, diatribas, injurias o difamación. Asimismo, se hace un análisis específico de los promocionales en litigio, atendiendo a su finalidad, se destacan las definiciones de las figuras delictivas y se hace una evaluación global de las características observadas en los promocionales, a efecto de evidenciar la necesidad del cese inmediato de su difusión.

Por consiguiente, ante lo infundado e inoperante de los agravios hechos valer por la coalición actora, procede confirmar la resolución impugnada.

*Con base en lo anteriormente expuesto, y en virtud de que la coalición 'Por el Bien de Todos' de forma sistemática y contumaz ha incumplido con las obligaciones específicas establecidas en la resolución recaída al expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, esta autoridad electoral debe ordenar de inmediato el retiro del promocional materia del presente incidente de inejecución, así como requerir a las empresas de televisión y radio, a costa del obligado y de forma directa, que se nieguen a difundir promocionales que contengan elementos similares a*

los declarados ilegales por esta autoridad, en aplicación del los principios procesales explicitados en la tesis identificada bajo el rubro
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PROCESAL SON APLICABLES EN MATERIA ELECTORAL A LOS SUPUESTOS EN QUE LA CONDENA CONSISTE EN OBLIGACIONES DE HACER.

Lo anterior, sin perjuicio de las medidas coactivas eficaces para garantizar el derecho subjetivo que fue reconocido por esta autoridad en la resolución cuyo incumplimiento se reclama, así como de la imposición de las medidas de apremio y de corrección disciplinaria a las que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido:

PRIMERO: Tenerme por presentado en tiempo y forma en los términos del presente escrito por el que se interpone incidente de inejecución, por reconocida la personalidad con la que me ostento, por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y por autorizadas a las personas señaladas para recibirlas.

SEGUNDO: Previos los trámites de ley, se ordene de inmediato el retiro del promocional que es materia del presente incidente de inejecución y, en su caso, se requiera a las empresas de televisión y radio, a costa del obligado, que se nieguen a difundir promocionales que contengan elementos similares a los declarados ilegales por esta autoridad.

TERCERO: Se impongan las medidas coactivas eficaces para garantizar el derecho subjetivo que fue reconocido por esta autoridad en la resolución cuyo incumplimiento se reclama.

CUARTO: Se impongan las medidas procedentes de apremio y de corrección disciplinaria a las que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medio de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO: Se acumulen las constancias que obren en el presente expediente al procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de la coalición 'Por el Bien de Todos' con motivo del incumplimiento a la **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIALIZADO INCOADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA COALICIÓN 'POR EL**

**BIEN DE TODOS', POR HECHOS QUE CONSIDERA
CONSTITUYEN VIOLACIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES** *recaída al
expediente identificado como JGE/PE/PBT/CG/006/2006 (sic)."*

Anexo a su escrito de queja, aportó como prueba un disco compacto que contiene copia del promocional difundido por la coalición "Por el Bien de Todos".

II. Mediante proveído de fecha veinticinco de junio de dos mil seis, el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este organismo público autónomo, admitió y dio trámite al incidente de inejecución de la resolución mencionada en el resultando que antecede; asimismo ordenó dar vista a la otrora Coalición "Por el Bien de Todos" con el contenido de dicho acuerdo, a efecto de que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al de su debida notificación, manifestara lo que a su derecho conviniera.

III. En fecha veintinueve de junio de dos mil seis, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este organismo público autónomo el escrito signado por el Lic. Horacio Duarte Olivares, representante común de la otrora Coalición "Por el Bien de Todos".

IV. Mediante oficio número SJGE/790/2006 suscrito por el entonces Secretario Ejecutivo de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fecha veintiséis de junio de dos mil seis, se dio vista a la otrora Coalición "Por el Bien de Todos", con el contenido del acuerdo referido en el resultando que antecede.

V. En sesión extraordinaria celebrada por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el día veinticinco de octubre de dos mil seis se aprobó el dictamen respecto del segundo incidente de inejecución de la Resolución del Consejo General de este organismo público autónomo recaída al procedimiento especializado.

El fallo en cuestión, en la parte que interesa determinó lo siguiente:

"...

En el presente caso, los hechos denunciados deben estimarse consumados en razón de que el periodo para la generación de actos proselitistas ha concluido, y tomando en consideración que la finalidad de la interposición del presente incidente es el cese o abstención del promocional de mérito, es inconcuso que al no existir la difusión de dicho

promocional, esta autoridad se encuentra impedida para ordenar el cese de su transmisión y reparar el posible incumplimiento de la resolución dictada en el procedimiento principal.

A mayor abundamiento, debemos tener presente que aun cuando la finalidad de los procedimientos especializados es corregir o prevenir conductas que afecten de manera relevante los derechos de los partidos políticos, o bien, el normal desarrollo del proceso electoral, lo cierto es que en el caso que ocupa, la difusión de los promocionales se consumió de manera irreparable, por tanto, no existe la posibilidad fáctica de corregir un hecho que ha dejado de subsistir.

Consecuentemente, toda vez que los hechos denunciados se han consumado de manera irreparable, se actualiza la causal de improcedencia planteada en esta parte considerativa, por lo que resulta procedente sobreseer el presente asunto.

10.- Que en virtud de que las conductas desplegadas por la Coalición 'Por el Bien de Todos' guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal, se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este instituto, remita copia certificada de las presentes actuaciones al expediente JGE/QCG/347/2006, iniciado con motivo de lo ordenado por la Junta General Ejecutiva dentro del dictamen emitido en el expediente principal, a efecto de determinar la existencia de una probable violación a la normatividad electoral vigente.

(...)

'PRIMERO.- *Se propone declarar el sobreseimiento del incidente de inejecución presentado por el Partido Acción Nacional en contra de la coalición 'Por el Bien de Todos', en términos del considerando 9 del presente dictamen.*

SEGUNDO.- *Agréguense copias certificadas de las presentes actuaciones al procedimiento administrativo sancionador identificado con el número de expediente JGE/CG/347/2006, a efecto de determinar la existencia de una probable violación a la normatividad electoral vigente.'*

VI. Mediante proveído de fecha doce de marzo de dos mil siete, el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este organismo público autónomo tuvo por recibida la siguiente documentación: **A)** Copia certificada del escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil seis, suscrito por el Lic. Germán Martínez Cázares, entonces representante propietario del Partido Acción Nacional por el cual

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

promueve incidente de inejecución en contra de la Resolución del Consejo General de este Instituto recaída al procedimiento especializado instaurado por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”, identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006; **B)** Copia certificada del dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, recaído al incidente de inejecución de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, y **C)** Copia certificada de la resolución emitida por el Consejo General de fecha treinta de noviembre del mismo año, recaída al incidente de inejecución de la resolución JGE/PE/PAN/CG/006/2006, y asimismo ordenó: **1.-** Emplazar a los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, integrantes de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos” respecto de la instrucción ordenada en el dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis, recaído al **segundo incidente** de inejecución de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, a efecto de que en el término de cinco días hábiles manifestaran por escrito lo que su derecho conviniera; **2.-** Requerir a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que remitiera diversa información relacionada con los hechos investigados, y **3.-** Requerir a las empresas televisivas Televisa, S.A. de C.V., y TV Azteca, S.A de C.V., a efecto de que dentro del término de cinco días hábiles remitieran diversa información relacionada con los hechos denunciados.

VII. Mediante oficios números SJGE/228/2007, SJGE/229/2007 y SJGE/230/2007, de fechas doce de marzo de dos mil siete, suscritos por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el día doce de abril del mismo año, se emplazó a los Partidos del Trabajo, Convergencia y de la Revolución Democrática integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos” para que dentro del plazo de cinco días, contestaran por escrito lo que a su derecho conviniera y aportaran pruebas en relación a los hechos que les son imputados.

VIII. Mediante oficio número SJGE/225/2007 suscrito por el entonces Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fecha once de abril de dos mil siete, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la información referida en el resultando **VI**.

IX. En fecha diecisiete de abril de dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este organismo público autónomo el oficio número

DEPPP/DAIAC/0821/07, signado por el Mtro. Fernando Agíss Bitar, entonces Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, mediante el cual proporcionó la información solicitada a través de auto de fecha doce de marzo de dos mil siete.

X. Mediante oficios números SJGE/226/2007 y SJGE/227/2007 suscritos por el Secretario de la Junta General Ejecutiva de este Instituto, con fechas diecisiete y dieciocho de abril de dos mil siete, respectivamente, se solicitó a las empresas televisivas Televisa, S.A. de C.V. y TV Azteca, S.A. de C.V., la información referida en el resultando **VI** del presente fallo.

XI. El día diecinueve de abril de dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva de este organismo público autónomo el escrito signado por el Lic. Horacio Duarte Olivares, representante común de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, mediante el cual dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad electoral, respecto del segundo incidente de inejecución, al tenor de los siguientes términos:

CONTESTACIÓN SEGUNDO INCIDENTE

“...El motivo del emplazamiento que se realiza a los partidos que integramos la coalición Por el Bien de Todos, deriva de lo resuelto por la Junta General Ejecutiva y el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el supuesto incidente de inejecución de resolución del procedimiento especializado identificado con el número del expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, en el cual se resolvió ‘que los hechos se han consumado de manera irreparable por lo que actualiza la causal de improcedencia planteada (...) por lo que resulta procedente sobreseer el presente asunto’.

Señalando además la responsable que ‘en virtud de que las conductas desplegadas por la coalición ‘Por el Bien de Todos’ guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este instituto, remita copia certificada de las presentes actuaciones al expediente JGE/QCG/347/2006, (...) a efecto de determinar la existencia de una probable violación a la normatividad electoral vigente’.

No obstante, el Secretario de la Junta General Ejecutiva en ningún momento señala con precisión cuáles son las presuntas violaciones a la normatividad electoral que se imputan a la coalición que represento, ni el

porqué, del acto de molestia que se realiza a los integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos.

En principio debe destacarse que la determinación que deba tomarse en el procedimiento administrativo sancionador en que se actúa debe ser exhaustivo pues debe tomarse en cuenta que la resolución que en él se tome podría implicar la imposición de una sanción.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en reiterados criterios que los procedimientos administrativos sancionatorios tramitados y resueltos por el Instituto Federal Electoral llevan implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), pues su consecuencia radica en restringir, limitar, suspender o privar de derechos a algún gobernado.

Lo anterior ha sido recogido en las siguientes tesis relevantes y de jurisprudencia:

**RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.**
(Se transcribe...)

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.
(Se transcribe...)

Un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, goza de características distintas a un procedimiento especializado que tiene una finalidad diversa, características que obligan al Instituto Federal Electoral a tener un mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, pues su acción se encuentra encaminada a ejercer el poder correctivo o sancionador del Estado.

En principio, se objeta que el Secretario de la Junta General Ejecutiva en ningún motivo señala con precisión cuáles son las presuntas violaciones a la normatividad electoral que se imputan a los integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos.

No debe pasar desapercibido que el acto de molestia que se realiza, parte de una inconformidad del Partido Acción Nacional, en la que afirmó en su momento que se había difundido ‘un nuevo promocional’ que, a su juicio, contenía ‘elementos similares a los ilegalizados (sic) en la resolución que puso fin al expediente número JGE/PE/PAN/CG/006/2006’.

Sin embargo, al momento en que el Secretario de la Junta Ejecutiva realizó el acto de molestia a los partidos integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos, sostuvo que:

‘... en virtud de que las conductas desplegadas por la Coalición ‘Por el Bien de Todos guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este instituto, remita copia certificada de las presentes actuaciones al expediente JGE/QCG/347/2006, (...) a efecto de determinar la existencia de una probable violación a la normatividad electoral vigente’.

Como puede apreciarse, el Secretario de la Junta General Ejecutiva emplazó a la otrora coalición Por el Bien de Todos para manifestar lo que a nuestro interés conviniera, pues advirtió la existencia de ‘identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal’.

Sin embargo, se trata de una afirmación dogmática y subjetiva, pues el Secretario de la Junta General Ejecutiva NO señaló que ‘identidad guardaban’, lo cual a todas luces representó una violación a nuestras garantías de audiencia y defensa. Pues aún cuando en la resolución que recayó al procedimiento especial se señala que: en virtud de que las conductas desplegadas por la coalición ‘Por el Bien de Todos’ guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal se instruye al Secretario de la Junta General Ejecutiva de este instituto, remita copia certificada de las presentes actuaciones al expediente JGE/QCG/347/2006, (...) a efecto de determinar la existencia de una probable violación a la normatividad electoral vigente’, no manifiesta el motivo por el cual se considera que dichos promocionales guardan identidad, cuestión que debió de ser precisada aún cuando no se haya realizado el estudio de fondo del asunto pues se actualizó una causal de improcedencia; arribando simplemente a la conclusión de que, ‘las conductas desplegadas por la coalición ‘Por el Bien de Todos’ guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal’, pretendiendo realizar una similitud, sin efectuar ninguna precisión en relación a cuales elementos guardaban identidad, razón por la cual se debe realizar el análisis exhaustivo a la supuesta ‘identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal’.

Se debe hacer notar que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral no debió dar trámite de ‘incidente de inejecución de resolución’ a la petición formulada por el Partido Acción Nacional, pues se trataba de un nuevo promocional (según reconoció expresamente el propio partido

incoante en su escrito inicial), lo cual ameritaba que se le diera trámite de un procedimiento especializado diverso.

Argumento de defensa que no fue valorado para el procedimiento especializado pues sobrevino una causal de improcedencia, pero que el procedimiento que nos ocupa debe ser valorado, pues lo contrario constituiría una violación en nuestro perjuicio del principio de exhaustividad y de la garantía de audiencia de los integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos.

No debe pasar desapercibido que el propio representante del Partido Acción Nacional sostuvo que se inconformaba por la presunta difusión 'de un nuevo promocional'.

En el presente caso, la omisión de ésta autoridad en el procedimiento provocó que violara en nuestro perjuicio, las garantías de seguridad jurídica, audiencia y defensa previstas y tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues causa un acto de afectación en la esfera jurídica de los integrantes de la otrora coalición Por el Bien de Todos, al realizar un emplazamiento, sin señalar cuales son los motivos por los cuales considera que hay similitud entre el promocional que nos ocupa y los promocionales valorados dentro del procedimiento principal, no proporcionando una noticia completa del presunto hecho que se le imputa, de manera tal que pudiera tener un conocimiento fehaciente del hecho, acto u omisión de que se trata y, por ende, una posibilidad real y amplia de defensa.

Pero además, resultaba importante que se precisaran de conformidad con la resolución del Consejo General porque el nuevo promocional guardaba 'identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal', habida cuenta que el promocional que motivó la instauración del 'incidente de inejecución de resolución' contiene una serie de elementos que no son comunes con los spots que fueron motivo del procedimiento especializado resuelto por el Consejo General del Instituto Federal Electoral e identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, esto es, el llamado 'procedimiento principal'.

No debe pasar desapercibido que del promocional cuyo estudio nos ocupa se desprende con claridad que aproximadamente en el 80% ochenta por ciento de su contenido se refería a la crisis económica que se generó después de la administración de gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1995 y de sus consecuencias.

En ese sentido, el promocional, en un ochenta por ciento del tiempo que lo compone, se refería a un hecho que no formó parte del promocional que fue materia del procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

Por lo tanto, la Junta General Ejecutiva y en su momento el Consejo General, debe realizar cualquier consideración o valoración sobre el contenido del spot en controversia, verificando efectivamente si tal afirmación cumple o no con el canon de veracidad; haciendo uso el Instituto Federal Electoral de sus facultades investigadoras.

En la especie, al tratarse de un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, goza de características distintas que obligan al Instituto Federal Electoral, no sólo a tener un mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, sino que además debe desplegar sus facultades de investigación, con el objeto de conocer la verdad histórica de los hechos y determinar si lo dicho en el spot de referencia, constituye un hecho real y verificable.

En este sentido se solicita respetuosamente ordene el Secretario de la Junta General Ejecutiva, la realización de las diligencias necesarias a efecto corroborar los hechos materia de la queja.

Se requiere respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionado con el rescate bancario, a efecto de que sea agregado a los autos del presente expediente, con el fin de corroborar la participación que tuvo el Partido Acción Nacional en la aprobación de dicha conversión y la participación de Felipe calderón Hinojosa.

Finalmente se solicita se realicen todas las diligencias que se consideren necesarias, haciendo uso de sus facultades de investigación, que puedan servir a efecto de determinar, si los hechos expuestos en el promocional son o no ciertos.

Por otra parte, y que es ese contexto la afirmación en el sentido de que 'las conductas desplegadas por la coalición 'Por el Bien de Todos' guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal', resulta violatoria del principio de legalidad al carecer de la debida motivación, pues no señala los motivos por los cuales a su parecer 'guardan identidad'.

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

Con el objeto de demostrar la inexactitud de lo sostenido, basta un simple cotejo de los elementos que contienen los promocionales respecto de los cuales se concluyó de manera ligera que guardaba 'identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal':

<i>'Informativa # 1'</i>	<i>Nuevo Promocional</i>
<p><i>Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos, acompañando esta imagen se escucha una voz que repite en contenido de la leyenda antes transcrita.</i></p> <p><i>Posteriormente, aparece en un fondo de color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: 'FOBAPROA', la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el fobaproa'.</i></p> <p><i>Seguido de las imágenes antes descritas, se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: 'encubriste a los que nos robaron'.</i></p> <p><i>Acto continuo, aparece el rostro del C. Felipe</i></p>	<p><i>En fondo negro, se observa una imagen del ex Presidente de la República Mexicano Carlos Salinas de Gortari simulando salir en televisión y el número '1995', al mismo tiempo se escucha una voz en off que dice: 'Salinas creó la peor crisis de la historia'; en seguida deviene una imagen en fondo blanco con la imagen dando la de Felipe Calderón y el número '1999', 'FOBAPROA'; seguida de una voz que dice: 'la crisis derivó en el fraude del FOBAPROA en 1999 que aprobó el PAN y el PRI con Calderón'.</i></p> <p><i>A continuación aparece la imagen de una casa con un automóvil, ambos deteriorados, con la frase 'Mas de 628 mil casas Embargadas'; al tiempo que se escucha la voz que dice: 'Se embargaron más de 628 mil casas',</i></p> <p><i>Seguida de la imagen de unas personas que caminan al lado de una barda de metal, con la frase escrita 'Más de un millón de Empleos Perdidos', seguida de una</i></p>

<p><i>Calderón Hinojosa que de manera inmediata se convierte en el número cero en color rojo, apreciándose en la parte superior del mismo la leyenda 'Manos', y en la inferior 'Sucias', seguido de imágenes de varias personas que aparentemente muestran una condición socio-económica, acompañado de la voz que anterior continua diciendo: 'y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad, y nos traes el cuento del empleo cuando tienes cero en empleos creados'.</i></p>	<p><i>voz fuera de cuadro que dice: 'se perdieron más de un millón de empleos'. Aparece la imagen de una persona de edad avanzada con un semblante de preocupación, con el texto: 'Una deuda de 120 Mil Millones de Dólares', al tiempo que una voz en off dice: 'y tenemos una deuda de más de 120 mil millones de dólares'. Enseguida aparece nuevamente la imagen de Felipe Calderón en fondo blanco con la palabra 'FOBAPROA' y se escucha una voz que dice: 'Que Calderón no te siga engañando, el PAN y el PRI te dañaron', Continuando con otra imagen de Felipe Calderón más pequeña con fondo blanco en la que aparece la frase: 'Manos Sucias' distorsionándose la imagen para completar la frase anterior con el texto: '1 empleo', al tiempo que una voz fuera de cuadro dice: 'Manos sucias, un empleo para su cuñado. Finalizando con la frase textual: 'CANDIDATOS A SENADORES DE LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS'.</i></p>
<p><i>'Informativa .. 2', En un primer plano, aparece en la pantalla un</i></p>	<p><i>Nuevo promocional En fondo negro, se</i></p>

**CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006**

<p>fondo de color blanco con la leyenda en letras de color rojo: 'Informativa · 2', seguida de una voz en off, que dice 'Informativa dos', mostrándose a continuación un fondo en color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: 'FOBAPROA', la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian una manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: 'Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el fobaproa'. Seguida a las anteriores imágenes aparece el C. Felipe Calderón Hinojosa, sosteniendo una hoja o documento acompañado de una voz que señala lo siguiente: 'Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia'.</p> <p>Acto continuo, se inserta la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, apreciándose que se encuentra sentado detrás de un escritorio y al lado de la bandera Nacional, diciendo con voz enérgica: 'Seguiremos con las auditorías para que no solo se castigue a los responsables, sino que</p>	<p>observa una imagen del ex Presidente de la República Mexicana Carlos Salinas de Gortari simulando salir en televisión y el numero '1995', al mismo tiempo que se escucha una voz en off que dice: 'Salinas creó la peor crisis de la historia'; en seguida deviene una Imagen en fondo blanco con la imagen de Felipe Calderón y el numero '1999', FOBAPROA'; seguida de una voz que dice: 'la crisis derivo en el fraude del FOBAPROA en 1999 que aprobó el PAN y el PRI con Calderón'. A continuación aparece la imagen de una casa con un automóvil ambos deteriorados, con la frase 'Más de 628 mil, Casas Embargadas'; al tiempo que se escucha la voz que dice: 'Se embargaron más de 628 mil casas', Seguida de la imagen de unas personas que caminan al lado de una barda de metal, con la frase escrita 'Más de Un millón de Empleos Perdidos'. Seguida de una voz fuera de cuadro que dice: 'se perdieron más de un millón de empleos', Aparece la imagen de una persona de edad</p>
---	--

<p><i>devuelvan el dinero'. Posteriormente se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con la iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: 'Y sigues encubriendo a los culpables'. Enseguida de la imagen antes descrita, se aprecian imágenes de varias personas que aparentemente denotan una condición socio-económica baja y con la expresión adusta, acompañado de la voz antes referida que continúa diciendo: "y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso'.</i></p>	<p><i>avanzada con un semblante de preocupación, con el texto: 'Una Deuda de 120 Mil millones de Dólares', al tiempo que una voz en off dice: 'y tenemos una deuda de más de 120 mil millones de dólares'. Enseguida aparece nuevamente la imagen de Felipe Calderón en fondo blanco con la palabra 'FOBAPROA' y se escucha una voz que dice: 'Que Calderón no te siga engañando, el PAN y el PRI te dañaron'. Continuando con otra imagen de Felipe Calderón más pequeña con fondo blanco en la que aparece la frase. 'Manos Sucias', distorsionándose la imagen para completar la frase anterior con el texto: '1 empleo', al tiempo que una voz fuera de cuadro dice: 'Manos sucias, un empleo para su cuñado'. Finalizando con la frase textual: 'CANDIDATOS A SENADORES DE LA COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS'.</i></p>
---	---

Como puede apreciarse de una simple lectura del contenido de los promocionales, no existe identidad en su contenido y, por ende, actuó indebidamente al concluir que la otrora coalición Por el Bien de Todos incumplió con lo resuelto en el procedimiento especializado JGE/PE/PAN/CG/006/2006.

Debe destacarse que nunca precisa a qué se refiere cuando afirma que ‘guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal’ y, por el contrario, ha quedado demostrado que el promocional materia del ‘incidente de incumplimiento de resolución contiene un mensaje totalmente distinto, que busca transmitir a la sociedad un hecho cierto verificable de alta relevancia e interés nacional como lo es la crisis económica del año 1995 y las derivaciones de la misma, entre las cuales se encuentra la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, así como las consecuencias que trajo tal crisis.

Es por lo anterior que debe hacerse un análisis el contenido del mensaje principal promocional, lo cual resulta necesario para poder determinar el contexto en el que era expresado y poder constatar el canon de veracidad.

No es óbice para lo anterior el que se afirme en la resolución que las conductas desplegadas ‘guardan identidad con los elementos valorados dentro del procedimiento principal’ pues para que se pudiera estimar que existía incumplimiento de la resolución, resultaba indispensable que existiera plena identidad de elementos, y, como ha quedado demostrado, el contexto en el que se emiten los mensajes contenidos en los spots es totalmente distinto.

Lo anterior resulta de la mayor importancia pues la responsable ignora la discusión jurídica y política sobre el tema, y que la posición de los partidos políticos de oposición, estuvo encaminada a evidenciar que la aprobación de la iniciativa de ley del IPAB (que legalizó el FOBAPROA) implicó convertir en deuda pública créditos irregulares, y que, incluso existen elementos de prueba suficientes para acreditar que fueron destinados ilegalmente para campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional, por parte de empresarios o banqueros como Gerardo de Provoisin, Carlos Cabal Peniche (Banca Unión), Ángel Isidoro Rodríguez (Banpaís), Jorge Lankenau (banca Confía) e, inclusive, para el beneficio de personas relacionadas con el Partido Acción Nacional.

Pasa por alto, así mismo, que el tema que es materia del promocional (que es el rescate bancario) se encuentra vinculado con las propuestas de gobierno que en el pasado proceso electoral se encontraba obligada a difundir la coalición electoral Por el Bien de Todos.

En efecto, en el Programa de Gobierno de la coalición electoral Por el Bien de Todos, registrado ante el Instituto Federal Electoral, en el capítulo

relativo a IV. POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO, apartado 'Financiamiento del Desarrollo', número 192, textualmente se señala:

192.- Terminarse con el compromiso presupuestal que proviene de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorbe una parte sustantiva del PIB.

Por lo que se debe realizar en la especie el análisis respectivo, pues es claro que el tema de manejaba en el promocional resultaba pertinente y relacionado con el Programa de Gobierno que, por obligación legal, la coalición electoral Por el Bien de Todos debía difundir dentro de la propaganda que difundió en la campaña del proceso electoral 2005-2006.

De lo anterior debe concluirse, que la autoridad debe realizar un análisis exhaustivo del promocional en cuestión, pues es indispensable que en el caso de un procedimiento sancionatorio como el que nos ocupa, se goce de características distintas que obligan al Instituto Federal Electoral tener un mayor escrúpulo en el análisis de las constancias que obran en el expediente, pues su acción se encuentra encaminada ejercer el poder correctivo o sancionador del Estado.

No obstante, resulta indispensable que lo anterior sea valorado en el presente procedimiento sancionatorio habida cuenta que, con dicho análisis, es posible acreditar las circunstancias del caso y, en particular, que los mensajes difundidos por la coalición electoral Por el Bien de Todos, se sustentan en datos veraces y objetivos.

En efecto, en diversos criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral se ha sostenido que la circunstancia de que el ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos se encuentre modulada o condicionada por su propia naturaleza y por las funciones que tienen encomendadas, así como las garantías constitucional y legalmente establecidas para su consecución, no se deriva la reducción de este ámbito de libertad a extremos que podrían considerarse incongruentes con el papel que está llamada a cumplir en el sistema democrático, vaciada de todo contenido real, pues con ello no solo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios partidos estuvieran siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus fines constitucionales, ya que al ser coparticipes en la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, su función no se limita a

fungir como intermediarios entre, los ciudadanos y el acceso al poder público.

Se ha sostenido que, por el contrario, si bien es cierto que su trascendencia en el desenvolvimiento democrático se proyecta en particular intensidad en los procesos electivos, también lo es que son expresiones del pluralismo político de la sociedad, receptores y canalizadores, por ende, de las demandas, inquietudes y necesidades existentes en la población, lo que implican que también ocupan un lugar preponderante en el escrutinio ciudadano del ejercicio de las funciones públicas, respecto del cual los institutos políticos y, especialmente, los ciudadanos, cuentan con interés legítimo, garantizado constitucionalmente por el derecho a la información igualmente reconocido en el artículo 6 in fine, a saber cómo se ejerce el poder público, pues éste, según prevé el artículo 39 de la propia Ley Fundamental, dimana del pueblo soberano mismo y sólo su ejercicio se traslada a los Poderes de la Unión o a los de los Estados, en términos del artículo 41, primer párrafo del ordenamiento en cita.

Este criterio ha sostenido por la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las resoluciones correspondientes a los recursos de apelación con números de expedientes SUP-RAP-009/2004, SUP-RAP-31/2006, SUP-RAP-34/2006, correspondiendo los dos últimos, a procedimientos especializados.

En particular, en el recurso de apelación con número de expediente SUP-RAP-009/2004, la Sala Superior del Tribunal Electoral, establece que para que se puedan definir con claridad los parámetros que debe requisitar una propaganda electoral a fin de que se encuadre debidamente en el debate de las ideas y propuestas, en el marco de la sana crítica y de los principios del Estado democrático y social de derecho y que infunda a sus militantes y simpatizantes, así como a la comunidad en general, una auténtica cultura democrática, deben atenderse los siguientes criterios:

a) *En cuanto a la naturaleza del contenido del mensaje, la propaganda electoral debe privilegiar los mensajes cuyo contenido abarque situaciones o hechos de carácter objetivo, donde la verificación empírica sea posible, para de ahí derivar ideas y opiniones sobre la plausibilidad de alternativas, por encima de la emisión de apreciaciones abstractas o juicios de valor, con pretensiones de verosimilitud, en los que no es posible demostración alguna.*

b) *A través de la propaganda electoral, los partidos políticos deben promover el desarrollo de la opinión pública, del pluralismo político y de la*

participación democrática de la ciudadanía, por lo que la tarea particular de estos entes, debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público.

Sobre estas bases, ha sostenido el Tribunal y el Consejo General del propio Instituto que, se entiende fácilmente que aquellos mensajes cuyo contenido guarde congruencia con las finalidades anotadas, es decir, propenda a la sana consolidación de una opinión pública libre, al perfeccionamiento del pluralismo político y el desarrollo de una cultura democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del ordenamiento y, por ello, se encuentran legitimadas las eventuales críticas negativas, que en tales mensajes se contenga, aun aquellas que resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos los partidos políticos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se trate no contengan, conforme los usos sociales, expresiones intrínsecamente injuriosas o difamantes, o bien, resulten gratuitas, desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en cuyos casos carecen de total cobertura legal, por resultar inconducentes a innecesarias, según sea el caso, con el interés general que pretende consolidar la Carta Magna.

c) El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercado lógicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad del público al que se dirige a la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.

En el caso, del análisis del promocional en controversia, para efecto del presente procedimiento sancionatorio, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a) *En cuanto a la naturaleza del contenido del mensaje, la propaganda electoral privilegia un mensaje cuyo contenido abarca situaciones o hechos de carácter objetivo, pues versa sobre un tema de alta relevancia e interés nacional como lo es la crisis económica del año 1995 y las derivaciones de la misma, entre las cuales se encuentra la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, así como las consecuencias que trajo la crisis.*

Es decir que, el tema de la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, de la que fue partícipe el entonces candidato presidencial, y la crisis que esto provocó, así como las consecuencias que dicha aprobación trajo, es un tema de relevancia nacional, toda vez que los ciudadanos tienen derecho a encontrarse debidamente informados de hechos como los que se exponen en el promocional.

b) *Con el promocional en cuestión, la otrora coalición Por el Bien de Todos promovió el desarrollo de la opinión pública, pues expuso un tema de alta relevancia e interés nacional como lo es la crisis económica del año 1995 y las derivaciones de la misma, entre las cuales se encuentra la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, y las consecuencias que ésta trajo.*

Para tal efecto, solicito respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral que solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un informe del proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionado con el rescate bancario, a efecto de que sea agregado a los autos del presente expediente.

Por lo tanto, el promocional busca la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público, y que los receptores del mensaje conozcan la participación y posición asumida por el candidato del Partido Acción Nacional en relación al tema expuesto en dicho promocional.

c) *En cuanto al contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral, debe atenderse al hecho que se hicieron en el curso del proceso electoral y que, de acuerdo a lo sostenido por el propio Consejo General, se realizan en el marco de una crítica negativa que, aun cuando pudieran parecer dura e intensa, y generar incomodidad, molestia o disgusto del o de los*

destinatarios, no es desproporcionada, pues como ha quedado destacado, tiene vinculación con el Programa de Gobierno que por obligación legal debía difundir la coalición en su propaganda y busca la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público, y que los receptores del mensaje contrasten y conozcan un hecho real, pues expuso un tema de alta relevancia e interés nacional como lo es la crisis económica del año 1995 y las derivaciones de la misma, entre las cuales se encuentra la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, y de las consecuencias que dicha aprobación trajo.

Debe decirse además que el Partido Acción Nacional no presentó prueba alguna que fuera útil para acreditar no sólo que hubiera sido difundido el promocional, sino su duración, periodicidad en su difusión, canales o frecuencias en que podrían haber sido difundidos, lo cual resultaba indispensable para acreditar la supuesta afectación de que se duele; y en el presente caso resulta fundamental para que la autoridad pueda valorar las circunstancias del caso y, en su caso, la gravedad de la falta.

En el mismo sentido, y para los mismos efectos, debe tenerse en cuenta que la coalición electoral Por el Bien de Todos difundió dicha campaña en respuesta a una campaña negra iniciada por el Partido Acción Nacional en la que, de manera totalmente desproporcionada, se acató reiterada y sistemáticamente a su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador...”

XII. En fecha treinta de mayo de dos mil siete, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el oficio número DEPPP/DAIAC/1299/07 signado por el Maestro Fernando Agiss Bitar, entonces Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo público autónomo, a través del cual remitió la información solicitada mediante los diversos SJGE/016/2007 y SJGE/225/2007.

XIII. En virtud de que las empresas TV Azteca S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V., omitieron atender en tiempo y forma el requerimiento formulado por esta autoridad, en fecha veintidós de mayo de dos mil siete, se giraron los oficios recordatorios números SGJE/401/2007 y SGJE/402/2007 dirigidos a las mismas, notificados con fecha cinco de junio del mismo año, con la finalidad de requerirles de nueva cuenta la información solicitada mediante acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil siete.

XIV. El día trece de junio de dos mil siete, se giraron los segundos oficios recordatorios números SGJE/487/2007 y SGJE/488/2007 dirigidos a las empresas

televisivas Televisa, S.A. de C.V. y TV Azteca, S.A. de C.V., respectivamente, notificados en fechas dieciocho y diecinueve de ese mismo mes y año, a efecto de que proporcionaran la información solicitada mediante acuerdo de fecha doce de marzo de dos mil siete.

XV. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, el Secretario de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral tuvo por recibida la información referida en el resultando XII, y con fundamento en el artículo 42, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordenó dar vista a la otrora coalición “Por el Bien de Todos” a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniese.

XVI. A través del oficio número SJGE/604/2007 de fecha veintisiete de junio de dos mil siete, se notificó al representante común de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, el contenido del acuerdo citado en el resultando precedente.

XVII. Por acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil siete, se solicitó al representante común de la coalición denunciada, proporcionara los documentos que soportaran el presunto retiro de los promocionales identificados como “Fobaproa 1” y “Fobaproa 2”.

XVIII. A través del oficio número SJGE/628/2007, de fecha cinco de julio de dos mil siete, se notificó a la otrora Coalición “Por el Bien de Todos” el acuerdo referido en el resultando anterior.

XIX. Mediante escrito de fecha doce de julio de dos mil siete, el representante común de los partidos que integraron la coalición denunciada atendió el requerimiento ordenado por auto de fecha cinco de julio del mismo año.

XX. Mediante escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete, el representante legal de TV Azteca S.A de C.V., presentó diversa información relacionada con los hechos materia del actual procedimiento.

XXI. Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por recibidos los escritos referidos en los resultandos **XIX** y **XX**, y ordenó requerir a la empresa Televisa, S.A. de C. V., a efecto de que proporcionara diversa información relacionada con

los promocionales identificados como “Fobaproa 1”, “Fobaproa 2”, “Informativa 9” y “Salinas Fobaproa”.

XXII. Mediante el oficio número SCG/404/2008, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, notificado el siete de abril de dos mil ocho, se requirió a la empresa Televisa, S.A. de C.V., a efecto de que remitiera la información referida en el resultando que antecede.

XXIII. Por acuerdo de fecha veintidós de abril de dos mil ocho, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por fenecido el término concedido a la empresa Televisa, S.A. de C.V. a efecto de que proporcionara diversa información relacionada con los promocionales identificados como “Fobaproa 1”, “Fobaproa 2” “Informativa 9” y “Salinas Fobaproa” y ordenó poner a la vista de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, la información que presentó el representante legal de Tv Azteca S. A. de C.V. referida en el resultando XX.

XXIV. Mediante escrito de fecha seis de mayo de dos mil ocho, presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en esa misma fecha, el Lic. Horacio Duarte Olivares, entonces representante común de los partidos políticos integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, dio contestación a la vista que se le mandó dar mediante proveído de fecha veintidós de abril de dos mil ocho y alegó lo que a su derecho convino.

XXV. Mediante proveído de fecha trece de mayo de dos mil ocho, el Encargado del Despacho de la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuvo por recibido el escrito presentado por el representante propietario de los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de todos”, declarando cerrada la instrucción, atento a lo que dispone el artículo 366, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

XXVI. En virtud de que se desahogó en sus términos el procedimiento administrativo previsto en los artículos 361, párrafo 1, 364, 365 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de fecha quince de mayo de dos mil ocho.

XXVII. En sesión ordinaria de fecha veintitrés de mayo de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG263/2008, en la que resolvió en el punto **PRIMERO** declarar **fundado** el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, y en el punto **SEGUNDO** ordenó imponer a los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos” una reducción de ministraciones equivalente a **\$20,965,000.00 (Veinte millones novecientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**.

XXVIII. Inconforme con la resolución precisada en el resultando anterior, el veintinueve de mayo de dos mil ocho, los Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, interpusieron sendos recursos de apelación, que fueron tramitados por el entonces Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de esta Institución, remitiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las constancias atinentes y el informe de ley respectivo, para su sustanciación y resolución.

XXIX. Los recursos de apelación fueron radicados bajo el número de expediente **SUP-RAP-79/2008 Y SUS ACUMULADOS SUP-RAP-105/2008 Y SUP-RAP-110/2008**, mismo que fue turnado a la ponencia del C. Magistrado Flavio Galván Rivera, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

XXX. Mediante oficio número SGA-JA-1700/2008, se notificó la sentencia del día veinticinco de junio de dos mil ocho, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del recurso de apelación referido en el resultando que antecede, en la que se determinó medularmente lo siguiente:

“...Por tanto, a juicio de esta Sala Superior, la actuación del Consejo General responsable sí es violatoria de los derechos de los partidos políticos actores, al concluir que la infracción que sustenta la sanción impuesta ya había sido determinada en el procedimiento especial, en el caso de los promocionales identificados como ‘Fobaproa 1’, ‘Fobaproa 2’ e ‘Informativa 9’; por cuanto hace al distinto promocional identificado como ‘Salinas Fobaproa’, es claro que, para tenerlo por acreditado, la autoridad demandada únicamente tomó en consideración un informe acerca del resultado de monitoreo de medios, porque rechazó los medios de convicción que fueron ofrecidos por los propios partidos

políticos, para su defensa o, en un momento dado, para atenuar su responsabilidad, en la etapa de individualización de la sanción, para el caso de que se les encontrara responsables, como se advierte de lo siguiente...El veintiséis de julio de dos mil seis, los partidos políticos ahora recurrentes, mediante escrito de contestación al emplazamiento, pidieron que se requiriera: 1) El Semanario de Información y Análisis, Proceso, número 1544, de fecha cuatro de junio de dos mil seis, reportaje intitulado: 'La impunidad' firmado por Álvaro Delgado; 2) El libro intitulado 'Los suspirantes, los precandidatos de carne y hueso' de la autoría de Jorge Zepeda Patterson; 3) Declaraciones de Gabriel Reyes Orona, publicadas en el periódico La Jornada, de fecha seis de junio de dos mil seis, y 4) A las empresas Televisa y Televisión Azteca, a efecto de que informaran de las transmisiones que realizaron en los noticieros **Notivisa y Hechos Baja California, relativas a los hechos en cuestión....**Por tanto, si está acreditado que el Consejo General rechazó los medios de convicción ofrecidos por los partidos políticos actores y esto lo hizo en apego a la lógica incorrecta de que ya había declarado la ilegalidad del comportamiento de la Coalición denunciada, sin tomar en cuenta que los mismos podían haber sido empleados para un fin distinto, como es el de la individualización de la sanción, es claro que la actuación de la autoridad fue indebida y, por tanto, que lo procedente, conforme a Derecho, es revocar la resolución impugnada, así como el procedimiento en cuestión, desde el auto de trece de mayo del año en curso, en el cual se declaró cerrada la instrucción, para que resuelva conforme a Derecho sobre la petición de los partidos políticos ahora incoantes, en el escrito de desahogo de la vista ordenada...El Consejo General responsable debe cumplir lo dispuesto en esta sentencia dentro del plazo de quince días hábiles, posteriores a la fecha de notificación de la ejecutoria, para lo cual debe admitir las pruebas ofrecidas por los partidos políticos demandantes, a menos que advierta alguna razón jurídica por la cual resulten inadmisibles...Del cumplimiento puntual de esta ejecutoria, la autoridad demandada debe informar, a esta Sala Superior, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. Lo anterior, en el entendido que todas las autoridades y los particulares relacionados con la preparación y desahogo de las probanzas, ofrecidas por los ahora actores, dentro del procedimiento administrativo sancionador de origen, están constreñidos al cumplimiento de esta sentencia, en términos del requerimiento que les formule la autoridad administrativa electoral, a fin de que ésta concluya adecuadamente el procedimiento instaurado en cada caso, a fin de estar en aptitud de cumplimentarla dentro del plazo concedido al efecto, por lo cual, los requerimientos que se formulen deberán incluir los puntos resolutivos de esta sentencia...**RESUELVE:...SEGUNDO.** Se revoca la resolución

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

CG263/2008, de veintitrés de mayo del año en curso, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y se ordena reponer el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la Coalición 'Por el Bien de Todos', en términos del considerando quinto de esta ejecutoria, dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia. **TERCERO.** Las autoridades y los particulares relacionados con los elementos de prueba ofrecidos por los apelantes en el procedimiento administrativo sancionador de origen, quedan vinculados al cumplimiento de esta ejecutoria, conforme a los requerimientos que haga la autoridad administrativa electoral, que deberá citar, en cada caso, los puntos resolutivos de esta sentencia."

XXXI. Por acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, se tuvo por recibido en la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el oficio señalado en el resultando que antecede; asimismo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la Sentencia en cuestión, se ordenó lo siguiente: **1.-** Agregar copia certificada de la sentencia de cuenta a los autos del expediente **JGE/QCG/347/2006**; **2.-** Dejar sin efectos el acuerdo de fecha trece de mayo del año en curso dictado dentro del expediente en que se actúa, mediante el cual se declaró cerrada la instrucción; **3.-** Girar oficio al C. Director de lo Contencioso de este Instituto, a efecto de que se sirviera informar si en los archivos del Registro Federal de Electores, aparece antecedente alguno relativo al C. Gabriel Reyes Orona; en caso de que la persona mencionada apareciera dentro del padrón electoral, precisara el último domicilio que se tuviera registrado de la misma, para su eventual localización; **4.-** Requerir al C. Gabriel Reyes Orona, a efecto de que se sirviera proporcionar, en relación con la nota intitulada "*Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona*", publicada en la página 3 del periódico "La Jornada", de fecha seis de junio de dos mil seis, diversa información respecto de los hechos materia del presente procedimiento; **5.-** Requerir al Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que se sirviera proporcionar un ejemplar del libro intitulado "Los Suspirantes, los Precandidatos de Carne y Hueso", del autor Jorge Zepeda Patterson, Editorial Planeta, Julio de 2005, al que hace alusión en su escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil seis; **6.-** Requerir al Director y/o Presidente del diario "La Jornada", a efecto de que se sirviera proporcionar en relación con la nota referida en el numeral **4** del proveído en cuestión, diversa información respecto de los hechos materia del presente procedimiento; **7.-** Requerir al Director y/o Presidente del "Semanario de Información y Análisis, Proceso", a efecto de que se sirviera proporcionar, en relación con la nota periodística intitulada: "*La impunidad*", publicada con fecha

cuatro de junio de dos mil seis, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se arribó al conocimiento de los hechos que se describen en la publicación de referencia; **8.-** En relación con la petición de la otrora coalición denunciada, a efecto de que se requiriera a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión *“un informe relacionado con el proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública, relacionado con el rescate bancario”*, girar oficio al órgano legislativo en cuestión, a efecto de que se sirviera proporcionar el informe de cuenta; **9.-** Requerir al Presidente y/o Director del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., a efecto de que se sirviera informar a este Instituto si el C. Felipe Calderón Hinojosa prestó sus servicios a dicha institución y cuál fue el periodo durante el cual lo hizo, y **10.-** En relación con la consideración sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a que mediante escrito de fecha veintiséis de julio de dos mil seis, la otrora coalición denunciada solicitó se requiriera a las empresas Televisa S.A. de C.V. y Televisión Azteca S.A. de C.V., a efecto de que proporcionaran información relacionada con las transmisiones que realizaron en los noticieros Notivisa y Hechos Baja California, relativas a los hechos en cuestión, no dio lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de que del análisis al escrito de referencia no se advierte que la entidad política en cuestión haya realizado dicha petición.

XXXII. Mediante oficio número DQ/072/2008 signado por el Lic. Gerardo Carlos Jiménez Espinosa, Director de Quejas de este Instituto, se requirió al Director de lo Contencioso de este órgano autónomo la información referida en el numeral **3** del resultando anterior.

XXXIII. A través del oficio número DC/SC/JM/366/08, julio 9, 2008 el Lic. Fernando Xicoténcatl Camacho Álvarez, Director de lo Contencioso de este Instituto, dio respuesta al requerimiento citado en el resultando anterior.

XXXIV. Mediante los oficios números SCG/1674/2008, SCG/1676/2008, SCG/1677/2008, SCG/1678/2008, y SCG/1679/2008 de fecha veintiséis de junio de dos mil ocho, signados por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, se requirió al Partido de la Revolución Democrática, al Director y/o Presidente del diario “La Jornada”, al Director y/o Presidente del “Semanario de Información y Análisis, Proceso”, a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como al Presidente y/o Director del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., respectivamente, la información referida en el resultando número **XXXI**.

XXXV. A través del escrito de fecha diez de julio del presente año, el Lic. Juan Alberto Galván Trejo, Director General de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio respuesta al requerimiento citado en el resultando anterior, solicitando a esta autoridad electoral una prórroga a fin de que estuviera en posibilidad de dar cumplimiento al pedimento de mérito.

XXXVI. Mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil ocho, el Lic. Edmundo Mejía Romero, Representante de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., editora del periódico “La Jornada”, dio respuesta al requerimiento formulado por este Instituto.

XXXVII. Mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil ocho, el C. Rafael Rodríguez Castañeda, Director del “Semanario de Información y Análisis, Proceso”, dio respuesta al requerimiento formulado por este Instituto.

XXXVIII. Mediante escrito de fecha catorce de julio de dos mil ocho, la C. Julieta Morales Toledano, Representante Jurídico del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., dio respuesta al requerimiento formulado por este Instituto.

XXXIX. Mediante escritos de fechas catorce de julio y primero de agosto de dos mil ocho, el Lic. Rafael Hernández Estrada, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, dio respuesta al requerimiento formulado por este Instituto.

XL. Por acuerdo de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho se tuvo por recibido en la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el oficio y los escritos señalados en los resultandos números **XXXIII** al **XXXIX** y se ordenó lo siguiente: **1)** Agregar al expediente en que se actúa el oficio y los escritos antes referidos para los efectos legales procedentes; **2)** En virtud de la imposibilidad de notificar al C. Gabriel Reyes Orona el acuerdo de fecha veintiséis de junio del presente año, notificar por estrados el acuerdo en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357, párrafo 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de enero de dos mil ocho, mismo que entró en vigor a partir del quince de enero del mismo año, en relación con el artículo 27, párrafos 4 y 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y **3)** En atención a la respuesta formulada por el Lic. Juan Alberto Galván Trejo, Director General de la H. Cámara de Diputados, dar vista al representante común de los partidos que integraron la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”, para que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

XLI. Mediante oficio número SCG/1944/2008 de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho, signado por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, se dio la vista referida en el punto **3)** del resultando anterior.

XLII. A través del oficio número SCG/1939/2008, el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, informó a la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo **SEGUNDO** de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-79/2008 y sus acumulados SUP-RAP-105/2008 y SUP-RAP-110/2008**, por el que se revocó la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto CG/263/2008 y se ordenó reponer el procedimiento administrativo sancionador seguido en contra de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”.

XLIII. Mediante escrito de fecha uno de agosto de dos mil ocho, el Lic. Rafael Hernández Estrada, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este órgano autónomo, dio respuesta a la vista formulada mediante proveído de fecha veintinueve de julio del mismo año.

XLIV. Por acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho se tuvo por recibido en la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el escrito citado en el párrafo precedente, y se ordenó: **PRIMERO.-** Agregar al expediente en que se actúa el escrito de referencia, para los efectos legales a que haya lugar; **SEGUNDO.-** En relación con la petición de la otrora coalición denunciada, a efecto de que se requiriera a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión “...cuál fue el proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionado con el rescate bancario, así como cuál fue la participación de Felipe Calderón Hinojosa y el Partido Acción Nacional en la misma...”, girar atento oficio al órgano legislativo en cuestión, a efecto de que se sirviera proporcionar dentro del término de **diez días hábiles** contados a partir de la notificación del presente, la información de cuenta, así como copia certificada de la siguiente documentación: **1)** Las actas de las sesiones donde se discutió y votó la aprobación de la conversión de deuda privada en pública con relación al rescate bancario; **2)** La votación nominal por diputado y la votación por fracción parlamentaria; **3)** La publicación de la votación en el diario de debates; **4)** La publicación en el Diario Oficial de la aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionada con el rescate bancario.

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

XLV. Por escrito de fecha veintidós de septiembre del presente año, el Lic. Juan Alberto Galván Trejo, Director General de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad.

XLVI. Por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil ocho se tuvo por recibido en la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el escrito citado en el resultando anterior ordenándose lo siguiente: **1)** Agregar el escrito de cuenta y anexos que se acompañaron al expediente en que se actúa, para los efectos legales a que hubiera lugar; y **2)** Poner las presentes actuaciones a disposición de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, para que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera.

XLVII. Mediante oficio número SCG/2675/2008, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil ocho, signado por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, se comunicó a la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, el proveído de la misma fecha, para que dentro del plazo de cinco días manifestara por escrito lo que a su derecho conviniese.

XLVIII.- Mediante proveído de fecha tres de noviembre de dos mil ocho, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó lo siguiente: **1)** Se tuvo por fenecido el término concedido a la otrora coalición denunciada referido en el resultado que antecede, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las actuaciones que obran en el presente expediente, y **2)** En cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo SEGUNDO de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-79/2008 y sus acumulados SUP-RAP-105/2008 y SUP-RAP-110/2008**, y al no existir diligencias de investigación por practicar, cerrar el periodo de instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, atento a lo que dispone el artículo 366, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho.

XLIX.- En virtud de que se ha desahogado en sus términos el procedimiento administrativo previsto en los artículos 361, párrafo 1, 364, 365 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se procedió a formular el proyecto de resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Quejas y

Denuncias del Instituto Federal Electoral en sesión de fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho, por lo que:

CONSIDERANDO

1.- Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral es competente para resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 118, párrafo 1, incisos h) y w); 355 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, los cuales prevén que dicho órgano cuenta con facultades para vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas, así como los sujetos a que se refiere el artículo 341 del mismo ordenamiento, se desarrollen con apego a la normatividad electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos; asimismo, conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento que sustancia el Secretario del Consejo General y el proyecto de resolución que analiza y valora la Comisión de Quejas y Denuncias.

2.- Que en términos de lo previsto en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se aprueba el ordenamiento legal antes citado, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”** y el principio *tempus regit actum* (que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con leyes vigentes en la época de su realización), el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las disposiciones aplicables al momento en que se concretaron los hechos denunciados.

Así, esta autoridad tomó en consideración las disposiciones constitucionales y legales que se encontraban vigentes al momento de la realización de los hechos, es decir, las normas que rigieron el desarrollo del proceso electoral federal 2005-2006, así como los criterios sostenidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Acción de Inconstitucionalidad identificada bajo el número de expediente 26/2003, la cual dio lugar a la Tesis Jurisprudencial P./J.2/2004, como por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con los números SUP-RAP-009/2004, SUP-RAP-31/2006, SUP-RAP-034/2006 y su acumulado SUP-RAP/036/2006, en los que se estableció lo siguiente:

**CRITERIO SOSTENIDO POR LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

“Novena Época

Instancia: Pleno

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIX,
febrero de 2004*

Tesis: P./J. 2/2004

Página 451

GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—*Cuando el ejercicio de las garantías individuales se hace con el fin de obtener un cargo de elección popular, esas garantías deben interpretarse conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, en los que se regulan todos aquellos aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Lo anterior, toda vez que el ciudadano que aspira a obtener un cargo de esta índole se sujeta voluntariamente a las obligaciones que la propia Constitución establece tratándose de la materia electoral.*

Acción de inconstitucionalidad 26/2003. Partido del Trabajo. 10 de febrero de 2004. mayoría de ocho votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.

Principio del formulario

**CRITERIO SOSTENIDO POR LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN**

SUP-RAP-009/2004

“(…)”

En efecto, de la circunstancia de que el ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos se encuentre modulada o condicionada por su propia naturaleza y por las funciones que tienen encomendadas, así como por las garantías constitucional y legalmente establecidas para su consecución, no se deriva la reducción de este ámbito de libertad a extremos que podrían considerarse incongruentes con el papel que está llamada a cumplir en el sistema democrático, vaciada de todo contenido real, pues con ello no sólo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios partidos estuvieren siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus fines constitucionales, ya que al ser coparticipes en la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, su función no se limita a fungir como intermediarios entre los ciudadanos y el acceso al poder público; por el contrario, si bien es cierto que su trascendencia en el desenvolvimiento democrático se proyecta en particular intensidad en los procesos electivos, también lo es que son expresiones del pluralismo político de la sociedad, receptores y canalizadores, por ende, de las demandas, inquietudes y necesidades existentes en la población, lo que implica que también ocupan un lugar preponderante en el escrutinio ciudadano del ejercicio de las funciones públicas, respecto del cual los institutos políticos y, especialmente, los ciudadanos, cuentan con un interés legítimo –garantizado constitucionalmente por el derecho a la información igualmente reconocido en el artículo 6 in fine–, a saber cómo se ejerce el poder público, pues éste, según prevé el artículo 39 de la propia Ley Fundamental, dimana del pueblo soberano mismo y sólo su ejercicio se traslada a los Poderes de la Unión o a los de los Estados, en términos del artículo 41, primer párrafo del ordenamiento en cita.

Ciertamente, la exteriorización de toda crítica negativa conlleva un cierto grado de descrédito o mancha social en la persona objeto de la misma, repercutiendo por ende en su estima o imagen ante los demás. Teniendo esto en cuenta, cualquier crítica de este tipo podría potencialmente traducirse en una conculcación del deber impuesto por el multireferido artículo 38, párrafo 1, inciso p), posición que evidentemente no puede acogerse porque se corre el riesgo de inhibir en demasía el debate político, necesario para la formación de una opinión pública libre y connatural del pluralismo de los modernos regímenes democráticos.

La cuestión a dilucidar es, entonces, en qué casos se encuentran justificados dichos juicios de valor y en cuáles no, esto es, cuándo los comentarios críticos encuentran un sustento racional y jurídico que los ampare de toda consecuencia perjudicial para quien los emite y cuándo no.

La solución ofrecida por el artículo recientemente citado es la de excluir de protección normativa aquellas críticas, expresiones, frases o juicios de valor que sólo tienen por objeto o como resultado la denostación, la ofensa o la denigración de otro partido, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos, ya sea que ello sea consecuencia de una intención deliberada (elemento subjetivo) o como mero resultado de los términos lingüísticos utilizados (elemento objetivo), sin que para ello sea requisito ineludible el empleo de expresiones que en sí mismas constituyan una diatriba, calumnia, injuria o una difamación, ya que la lectura del dispositivo en análisis permite advertir que esa enunciación tiene un mero carácter instrumental, en tanto que el elemento decisivo o causal de la hipótesis normativa es que el mensaje produzca el demérito, la denostación o, en palabras del legislador, la denigración del ofendido.

Consecuentemente, habrá transgresión a la obligación contenida en el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del código electoral federal cuando el contenido del mensaje implique la disminución o el demérito de la estima o imagen de algún otro partido o coalición, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos en general, como consecuencia de la utilización de diatribas, injurias o difamaciones, esto es, por la utilización de calificativos o de expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonrosas u oprobiosas, que, apreciados en su significado usual y en su contexto, nada aportan a la formación de una opinión pública libre, a la consolidación del sistema de partidos y al fomento de una auténtica cultura democrática entre las bases partidistas y la ciudadanía en general, siendo, por tanto, la simple exteriorización de sentimientos o posturas personales y subjetivas de menosprecio y animosidad que no se encuentran al amparo ni de la libertad de expresión ni contribuyen al correcto funcionamiento armónico de la vida democrática; o bien, en el mismo supuesto se encontrarán aquellas expresiones o alusiones (escritas, habladas o representadas o gráficamente) que, no ubicándose formal y necesariamente en el supuesto anterior, resulten impertinentes, innecesarias o

desproporcionadas ya sea para explicitar la crítica que se formula, ya para resaltar o enfatizar el mensaje, la oferta política o incluso la propuesta electoral que se pretende hacer llegar a un público determinado, esto es, cuando el propósito manifiesto del mensaje o su resultado objetivo no sea difundir preponderantemente dicha oferta o propuesta, sino descalificar a otro instituto político, cuestión que debe sopesarse por el operador jurídico bajo un escrutinio estricto, especialmente en aquellos casos, en los que el legislador ha delineado las características a que deben ceñirse ciertos mensajes que lleven a cabo los partidos políticos, dado que con semejantes exigencias se propende a la realización de sus fines, conforme lo previene el artículo 23, apartado 1 de la propia codificación.

Ahora bien, como ocurre en la jurisprudencia elaborada por órganos judiciales o jurisdiccionales de otros países, para determinar si efectivamente determinadas expresiones formuladas por un partido político exceden la cobertura ofrecida por los artículos 6 y 7 constitucionales (interpretados en correlación con el diverso artículo 41 de la propia Carta Magna), incumpliendo con el deber impuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta Sala Superior estima que es menester realizar, de manera previa, el examen cuidadoso de las circunstancias concurrentes en el caso concreto a efecto de dilucidar los límites de los preceptos constitucionales citados con otros derechos, principios o valores igualmente relevantes a la luz de la Ley Fundamental y, por ende, merecedores de protección, es decir, si la o las conductas asumidas por un partido, a través de sus órganos de decisión, dirigentes, candidatos, militantes, simpatizantes, o mediante propaganda institucional, se encuentran justificadas por hallarse dentro de los ámbitos de la libertad de expresión o del derecho a la información, en correlación con las bases constitucionales a que deben sujetarse estos entes, o bien, resultan manifiestamente sin soporte jurídico alguno.

Varios son los criterios a que ha de acudirse para llevar a cabo esa ponderación, de entre los que destacan:

a) *La naturaleza del contenido del mensaje, en tanto que no son susceptibles del mismo tratamiento las opiniones, ideas, creencias y, en general, las apreciaciones o juicios de valor, que la difusión de hechos socialmente relevantes y que son presentados por el emisor con*

pretensiones de verosimilitud, pues los primeros, dada su particular naturaleza abstracta e íntima vinculación con la libertad ideológica, así como por no actualizarse una intención de afirmar sucesos o asentar datos de carácter objetivo, no se prestan a una demostración de exactitud o veracidad, lo cual sí es posible respecto de los segundos.

b) El juicio sobre la relevancia pública del asunto sobre el que versa el mensaje.

Este criterio encuentra sustento en razón de que, en un Estado democrático y social de Derecho como el mexicano, tanto la libertad de expresión, el derecho a la información y las funciones institucionales que tienen asignados los partidos políticos no responden únicamente a tutelar bienes particulares, ya sea de los ciudadanos o de los partidos, sino que, como se dijo, las garantías reconocidas en el artículo 6 de la Constitución Federal alcanzan mayor preponderancia –y consecuentemente un mayor nivel de protección– cuando se ejercen con relación a asuntos de interés público, pues es esencial en un sistema democrático que la sociedad esté informada o pueda opinar sobre cuestiones de interés general, contribuyendo así no sólo a la satisfacción de los intereses individuales, sino también a la formación de la opinión pública libre, presupuesto del pluralismo político al seno de la colectividad y fuente de legitimación, junto con otros factores no menos importantes, del sistema democrático mismo.

En congruencia con esto, los partidos políticos, conforme al artículo 41 de la Ley Fundamental, juegan un rol primordial en la promoción y conservación de esa opinión pública, en la del pluralismo político y en la de la participación democrática de la ciudadanía, según se ha expuesto con anterioridad, por lo que la tarea particular de estos entes, en el aspecto que se examina, debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público.

Sobre estas bases, se entiende fácilmente que aquellos mensajes cuyo contenido guarde congruencia con las finalidades anotadas, es decir, propenda a la sana consolidación de una opinión pública libre, al perfeccionamiento del pluralismo político y al desarrollo de una cultura democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del ordenamiento jurídico y, por ello, se encuentran legitimadas las eventuales críticas negativas que en tales mensajes se contenga, aun

aquellas que resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos los partidos políticos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se trate no contenga, conforme los usos sociales, expresiones intrínsecamente injuriosas o difamantes, o bien, resulten gratuitas, desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en cuyos casos carecen de toda cobertura legal, por resultar inconducentes o innecesarias, según sea el caso, con el interés general que pretende consolidar la Carta Magna.

c) *En íntima relación con el criterio anterior, se ubica el relativo al carácter público o privado del individuo, agrupación o colectividad sobre el que se emite la crítica u opinión, así como su posición institucional en el aparato estatal, en concreto, si se trata o no del titular de un cargo público o de una entidad que, fácticamente o por las encomiendas que le atribuya la ley, desarrolla tareas socialmente relevantes y con impacto en la vida social, económica o política, como serían, por ejemplo, los sindicatos, las instituciones de asistencia privada, los colectivos gremiales de profesionales o empresariales, los medios de comunicación, etcétera.*

Estas circunstancias resultan relevantes en el juicio de ponderación que debe realizarse, así como elemento de modulación del criterio precedente, dado que la condición pública reiterada u ordinaria o la posición institucional relevante del implicado en el mensaje, los hace partícipes del interés general con mayor intensidad que aquellos sujetos que son ajenos a estos ámbitos o que, incluso, circunstancialmente se ven involucrados en asuntos de trascendencia pública, respecto de los cuales, se reducen los límites permisibles de la crítica, pues, a diferencia de aquéllos, no existe justificación para que sus manifestaciones y actividades estén expuestas a un riguroso control por parte de la opinión pública, pues en poco o nada se contribuye a su existencia, guardando preponderancia, en estos casos y por regla general, el ámbito de protección correspondiente a la esfera individual, también tutelado en sede constitucional y en diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México.

d) *El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones*

espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.

En todo caso, ya se esté en uno u otro supuesto, en el análisis correspondiente se debe tener particular atención si las expresiones en cuestión tienen lugar o no con motivo de aquellos actos o actividades que, por mandato legal, requieren de los partidos políticos la realización de conductas en un sentido determinado, y no en otro, como podrían ser las consignadas en los artículos 38, párrafo 1, inciso j), 42, párrafo 1, 182, apartado 4, 183, párrafo 1, 185, párrafo 2, 186, apartados 1 y 2, y 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tales supuestos, el examen debe encaminarse, en primer lugar, a verificar si el contenido de los mensajes se ajusta a la conducta ordenada por el legislador. De arribarse a una conclusión negativa, entonces lo conducente es someter el estudio de las expresiones enjuiciables bajo un escrutinio estricto, ya que bien podría ocurrir que el partido autor de la comunicación, opinión o juicio de valor no sólo hubiera incumplido con el deber de asumir la conducta deseada por el legislador, sino que, en mayor o menor medida producto de este primer incumplimiento, con las manifestaciones vertidas se hubieren conducido a provocar, por ejemplo, una ofensa, demérito o efecto negativo en la imagen o estima de algún otro partido y sus candidatos; manifestaciones que, quizás, bajo otras características o condicionamientos normativos no conllevarían la conculcación de la obligación a que se refiere el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del código citado.

A esta conclusión se arriba porque, por un lado, la imposición por parte del legislador de que los partidos asuman determinadas conductas en

tiempos, actos y eventos específicamente precisados, obedece a que ha considerado que las mismas resultan ser las más adecuadas para la consecución de los fines que tienen establecidos por la propia Constitución Federal y, por el otro, se trata de obligaciones que son conocidas amplia y perfectamente por los institutos políticos, cuyo incumplimiento deliberado hace derivar un indicio en el sentido de que, ese alejamiento deliberado de la literalidad de la ley, tiene como propósito la persecución de un objetivo distinto al que deben procurar con el desarrollo de las actividades de que se trate, lo cual puede corroborarse del análisis de las expresiones empleadas, interpretadas en su contexto.

(...)

SUP-RAP-31/2006

(...)

Sin embargo, a juicio de los Magistrados suscritos, como se adelantó, se considera que, tal como lo ha sostenido la Sala Superior (en las ejecutorias recaídas en los expedientes SUP-RAP-009/2004 y SUP-JDC-393-2005), en lo tocante a los juicios valorativos o apreciaciones no es exigible un canon de veracidad. En el ámbito de la libertad de expresión se emiten juicios de valor, apreciaciones, opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, en tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces, en la realidad, será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.

*En conformidad con lo dispuesto en el artículo 182, párrafos 3 y 4, del código electoral federal, por 'propaganda electoral' debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el **propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas**. Además, tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña deberán '**propiciar**' la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos*

políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que, para la elección en cuestión, hubieren registrado.

Aunado a ello, los mensajes electorales, en general, no pretenden informar sino, preponderantemente, atraer votos y, por ende, los partidos políticos o las coaliciones intentan que las imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones y demás elementos que integran la propaganda electoral, en los términos legales indicados, persuadan a los electores de su oferta política y ello se traduzca en votos, en el entendido de que no debe rebasarse el ámbito constitucional y legalmente protegido de las expresiones permitidas.

Debe tenerse presente, además, que los partidos políticos y las coaliciones son corresponsables de garantizar las condiciones que permitan que los electores formen su decisión en libertad, en conformidad con el principio fundamental de rango constitucional de que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres y auténticas, su status de entidades de interés público, las finalidades que tienen encomendadas (en los términos del artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución federal), así como el deber de ajustar su conducta a las disposiciones del código electoral federal (de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo 2, del mismo ordenamiento).

(...)

En todo caso, cabe señalar, como se anticipó, que la expresiones protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión y la libertad de imprenta (establecidas en los artículos 6º y 7º de la Constitución federal), en lo que respecta a su dimensión puramente valorativa, no están sujetas, en sí mismas, a la exigencia de veracidad, canon que sí es exigible en relación con el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información (artículo 6º in fine), a condición de que tales juicios de valor no constituyan insultos u ofendan la dignidad de las personas.

(...)”

SUP-RAP-34/2006 y su acumulado SUP-RAP-036/2006,

'(...) las informaciones que con pretensiones de verosimilitud se difunden en la población, en específico a la ciudadanía en el campo de las cuestiones político- electorales, deben resultar veraces, esto es, estar sustentadas en hechos objetivos y reales, no manipulados, además susceptibles de ser comprobados razonablemente, y no apoyados en simples rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, sin que ello implique una exactitud inusitada no controvertida del hecho.

(...)

La disposición legal invocada [artículo 38, párrafo 1, inciso p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales] tiene por objeto excluir del ámbito de protección normativa aquellas críticas, expresiones, frases o juicios de valor que sólo tienen por objeto o como resultado la denostación, la ofensa o la denigración de otro partido, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos, ya sea que ello sea consecuencia de una intención deliberada (elemento subjetivo) o como mero resultado de los términos lingüísticos utilizados (elemento objetivo), sin que para ello sea requisito ineludible el empleo de expresiones que, en sí mismas, constituyan una diatriba, calumnia, injuria o una difamación, ya que la lectura del dispositivo en análisis permite advertir que esa enunciación tiene un mero carácter instrumental, en tanto que hecho operativo de la hipótesis normativa es que el mensaje produzca el demérito, la denostación o, en palabras del legislador, la denigración del ofendido.

(...)'

Cabe señalar, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tomó como referencia los criterios antes mencionados, dentro de las resoluciones emitidas con motivo de los procedimientos especializados que dieron origen, entre otros, al procedimiento que nos ocupa, lo que si bien constituye un precedente legal de consulta necesaria, no implica que esta autoridad se encuentre constreñida a pronunciar sus determinaciones futuras en idénticas condiciones, toda vez que las modificaciones y adiciones formuladas por el poder legislativo a la normatividad electoral federal conllevan un nuevo orden jurídico que deberá observarse por esta autoridad de acuerdo a las situaciones que se le presenten.

3.- Que en virtud de que la coalición denunciada no invocó causal de desechamiento o improcedencia alguna al momento de comparecer al presente

procedimiento, ni advertirse alguna que deba estudiarse en forma oficiosa por parte de esta autoridad electoral, corresponde realizar el análisis de fondo del asunto, para lo cual conviene formular algunas consideraciones de orden general, relacionadas con la propaganda que emiten los partidos políticos o coaliciones.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los partidos políticos constituyen una de las formas de organización política más importantes en el desarrollo electoral de nuestro país, siendo el medio a través del cual los ciudadanos participan en la vida política del mismo. Así, el artículo 41, base I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece:

“Artículo 41

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.”

Al efecto, debe recordarse que esta autoridad electoral administrativa, siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en múltiples sentencias, ha señalado que los partidos políticos

deben desarrollar **actividades políticas permanentes**, que obedecen a su propia naturaleza y a la finalidad constante de buscar incrementar el número de sus afiliados, así como **actividades específicas de carácter político-electoral**, que desarrollan durante los procesos electorales y tienen como objetivo básico la presentación de su plataforma electoral y la obtención del voto de la ciudadanía, buscando con ello que sus **candidatos registrados** obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección popular.

Vista esta dualidad de actividades que desarrollan los partidos políticos, se evidencia la necesidad de establecer una clara diferenciación entre las mismas.

Por **actividades políticas permanentes**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que deben entenderse como aquellas tendientes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país y contribuir a la integración de la representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política. Estas actividades no se pueden limitar exclusivamente a los periodos de elecciones, por la finalidad misma que persiguen, siendo evidente que de ser así, le restaría materia a la contienda electoral, en tanto que los ciudadanos no tendrían conocimiento de los objetivos y programas de acción de los partidos políticos intervinientes, que como ya se razonó, deben ser difundidos de manera permanente.

Por cuanto a las **actividades político-electorales** que se desarrollan durante los procesos comiciales, cabe precisar que éstas tienen como marco referencial, el que los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen. Para el logro de ello, los partidos políticos tienen que realizar una serie de actos que van desde la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, hasta la realización de actos tendientes a obtener el triunfo en la elección respectiva, los que pueden identificarse como inherentes a los procesos electorales.

Por su parte, **la campaña electoral**, en la legislación federal, se define como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto, entendiendo por actos de campaña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182, párrafo 2, del código electoral federal, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general

todos aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

En relación con lo anterior, también es pertinente señalar que de conformidad con el párrafo 3, del artículo en cita, por **propaganda electoral** debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Ahora bien, el párrafo 4 del artículo 182 del ordenamiento en cuestión, prevé que tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado, de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección hubieren registrado.

En ese orden de ideas, el código electoral federal establece que la propaganda que utilicen los partidos políticos durante la campaña electoral, deberá contener elementos que permitan a la sociedad en general, identificar al partido político, coalición o candidato en ella difundida, misma que debe sujetarse también a los límites establecidos en los artículos 6° y 7° constitucionales, evitando cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros.

En ese sentido, resulta procedente hacer referencia a los artículos 6o. y 7o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigentes al momento en que se realizaron los hechos denunciados, mismos que en lo conducente eran al tenor siguiente:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.”

De lo antes transcrito, se advierte que en el artículo 6o. se establecen dos derechos fundamentales distintos: 1) El derecho a la libertad de expresión (primera parte del artículo), y 2) El derecho a la libertad de información (segunda parte), teniendo como rasgo distintivo entre tales derechos que en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales; en tanto que la libertad de información otorga el derecho de obtener la información existente sobre determinados hechos y actos jurídicos.

Al respecto, se ha considerado que los derechos fundamentales de libre expresión de ideas, de imprenta, comunicación y acceso a la información, son indispensables para la formación de la opinión pública, componente necesario para el funcionamiento de un Estado de Derecho con democracia representativa.

En ese sentido, el derecho a la libre expresión, por destacado o indispensable que resulte para el Estado democrático de Derecho, no es ni puede ser un derecho de carácter absoluto o ilimitado.

La prohibición de la censura previa, por ejemplo, no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté legitimado para emitir *ex ante*, normas en consideración a los límites del derecho de libre expresión. Lo que significa e implica es que estos límites no se pueden hacer valer en forma previa, mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más un determinado mensaje destinado al conocimiento público; los límites se deben hacer valer a través de la determinación de responsabilidades jurídicas posteriores, tanto de naturaleza civil como penal y administrativa. No se trata, pues, de que no se pueda regular limitativamente el ejercicio del derecho a la libre expresión, tampoco que no se puedan imponer reglas, incluso respecto del contenido, características y modalidades de los mensajes. Sin embargo, la determinación y aplicación de estos límites no puede consistir en excluir, en forma previa, el mensaje del conocimiento y probable debate público.

En cuanto a los límites distintos a la censura previa que se pueden traducir en disposiciones reguladoras de la correspondiente responsabilidad jurídica, entran en juego el resto de condiciones constitucionalmente establecidas, conforme al texto de los respectivos preceptos de la Constitución federal.

Del análisis de las disposiciones constitucionales que anteriormente han sido transcritas, se arriba a la conclusión de que, en principio, la manifestación de las

ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en cuatro casos específicos, a saber:

- a) Que se ataque a la moral;
- b) Se afecten los derechos de terceros;
- c) Se provoque algún delito, o
- d) Se perturbe el orden público.

De lo anterior, se advierte que fue voluntad del Legislador Constituyente determinar como inviolable la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia, sin que sea dable establecer la censura previa, ni exigir fianza a los autores o impresores; tampoco es permitido coartar la libertad de imprenta, siempre y cuando se respete la vida privada de los demás, la moral y la paz pública.

En este orden, resulta claro que las restricciones, deberes o limitaciones al ejercicio del derecho a la libre expresión, con su correlativa afectación al derecho de información, están ya previstas expresamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, esas disposiciones deben ser la base a partir de la cual las autoridades resuelvan las controversias que se les planteen en esta materia.

Ahora bien, no se debe soslayar que las expresiones usadas en los invocados artículos 6°, párrafo primero, y 7°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer las restricciones, deberes o limitaciones al derecho a la libertad de expresión, constituyen preceptos y conceptos jurídicos que requieren ser interpretados, tanto para su reglamentación, como para resolver los litigios que con motivo de su ejercicio surjan en la realidad social; ante ello, resulta necesario que, en su caso, la autoridad competente realice un examen sumamente cuidadoso de los derechos fundamentales en ejercicio, los bienes constitucionalmente protegidos y los valores que confluyen en un determinado caso concreto, a fin de impedir tanto la limitación injustificada y arbitraria del derecho a la libertad de expresión, como el ejercicio abusivo e incluso ilícito de tal derecho.

Para ello, las restricciones, deberes o limitaciones se deben interpretar en forma estricta, al tiempo que los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se

deben interpretar en forma amplia o extensiva, a fin de potenciar el derecho y su ejercicio, sin exceder las restricciones constitucional y legalmente previstas.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales reglamenta lo relativo a las campañas electorales (dentro de las cuales, como ya se ha mencionado, se produce, utiliza y difunde la propaganda electoral), destacando las siguientes disposiciones:

“Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Artículo 23

1. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el presente Código.

2. El Instituto Federal Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley.

Artículo 25

1. La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:

a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

(...)

Artículo 27

1. Los estatutos establecerán: [...]

f) *La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y [...]*

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: [...]

j) *Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que el partido y sus candidatos sostendrán en la elección de que se trate. En este caso, el tiempo que le dediquen a la plataforma no podrá ser menor del 50% del que les corresponda; [...]*

p) ***Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas; [...]***

Artículo 42

1. *Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.*

Artículo 48

9. *En uso de los tiempos contratados por los partidos políticos en los términos de este Código en los medios de cobertura local, los mensajes alusivos a sus candidatos a Presidente, diputados y senadores, sólo podrán transmitirse durante los períodos de campaña a que se refiere el artículo 190, párrafo 1, de este Código. [...]*

Artículo 182

1. *La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos*

nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Artículo 183

1. Las reuniones públicas realizadas por los partidos políticos y los candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9o. de la Constitución y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros, en particular los de otros partidos y candidatos, así como las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.

2. En aquellos casos en los que las autoridades concedan gratuitamente a los partidos políticos o candidatos el uso de locales cerrados de propiedad pública, deberán estarse a lo siguiente:

a) Las autoridades federales, estatales y municipales deberán dar un trato equitativo en el uso de los locales públicos a todos los partidos políticos que participan en la elección; y

b) Los partidos políticos deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas necesarias para la preparación y realización del evento, los

requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y sus instalaciones.

3. El Presidente del Consejo General podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, así como a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter.

Artículo 184

1. Los partidos políticos o candidatos que decidan dentro de la campaña electoral realizar marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacer conocer a la autoridad competente su itinerario a fin de que ésta provea lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo de la marcha o reunión.

Artículo 185

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 7o. de la Constitución, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

Artículo 186

1. La propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos políticos a través de la radio y la televisión, comprendida la que emitan en el ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere el presente Código, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución.

2. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que realicen propaganda electoral a través de la radio y la televisión deberán

evitar en ella cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros.

3. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atributos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

Artículo 187

1. La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la contaminación por ruido.

Artículo 188

1. Al interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo.

Artículo 189

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos o se impida la circulación de peatones;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los lugares de uso común que determinen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico; y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en el exterior de edificios públicos.

2. Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad de los ayuntamientos, gobiernos locales y del Distrito Federal, susceptibles de ser utilizados para la colocación y fijación de la propaganda electoral. Estos lugares serán repartidos por sorteo entre los partidos políticos registrados, conforme al procedimiento acordado en la sesión del Consejo respectivo, que celebren en el mes de enero del año de la elección.

3. Los Consejos Locales y Distritales, dentro del ámbito de su competencia velarán por la observancia de estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere lugar con el fin de asegurar a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia.

Artículo 190

1. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral.

2. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

(...)

Artículo 191

1. Cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el presente capítulo será sancionada en los términos de este Código.”

De los dispositivos transcritos, se obtiene el marco legal que regula las actividades que despliegan los partidos políticos con el objeto de promover y difundir entre la ciudadanía sus propuestas y candidaturas registradas, a fin de verse beneficiados con la expresión del voto en su favor durante los procesos electorales federales.

Así, destacan entre otras, las disposiciones que establecen los principios que rigen el derecho al sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, lo mismo que la prohibición general de realizar actos que generen presión en el electorado.

De igual manera, la normatividad de referencia establece el ámbito de los derechos y obligaciones que corresponden a los partidos políticos durante el proceso electoral, las campañas y su propaganda.

En este sentido, resulta relevante para el presente estudio precisar que la difusión de promocionales en radio, televisión y otros medios electrónicos que realizan los partidos políticos, deben presentar ciertas características, establecidas por los artículos 4, párrafo 3; 38, párrafo 1, inciso p); 182, párrafos 3 y 4, y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que puedan considerarse como parte de una campaña y propaganda electorales, a saber:

- Presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
- Propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en sus documentos básicos y de la plataforma electoral que para la elección en cuestión, los partidos hubieren registrado.
- Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.
- No generar presión o coacción a los electores.

No obstante lo anterior, respecto de los aspectos enunciados en líneas anteriores, debe puntualizarse que el cumplimiento a tales imperativos, no debe entenderse de modo irrestricto, de tal suerte que se pueda llegar al extremo de considerar que toda la propaganda que generen y difundan los partidos políticos dentro de una campaña electoral deba cumplir necesariamente con los extremos legales de referencia, toda vez que en ejercicio de la garantía de libre manifestación de las ideas o de libertad de expresión de que gozan los institutos políticos, también es válida la crítica que contribuya a la formación de una opinión pública libre, plural y tolerante, características de un sistema democrático.

En efecto, por regla general la propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 182, párrafos 3 y 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, ello no implica que necesariamente toda la publicidad emitida por los institutos políticos o coaliciones durante las campañas electorales deba ser propositiva.

Esto es así, en virtud de que la finalidad de la propaganda electoral no está dirigida exclusivamente a exponer y promocionar ante la ciudadanía, a los candidatos, programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones, sino que también constituye un elemento para contrastar ideas y plataformas, resaltar las fortalezas propias y las debilidades de los demás participantes en el proceso electoral, además de buscar reducir el número de sufragios a favor de los demás abanderados y partidos contendientes en la justa electoral.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-009/2004, emitida el diecinueve de agosto de dos mil cuatro, estableció que los partidos políticos son titulares de la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones, en tanto la misma resulta acorde con su naturaleza e incluso necesaria para el cabal cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha libertad debe ejercitarse en el contexto de las tareas institucionales que llevan a cabo y con apego a las directrices fundamentalmente contenidas en el artículo 41 de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que significa que el ejercicio de dicha libertad se debe enfocar en el debate de las ideas y propuestas que propugnan, así como dentro de los márgenes de la sana crítica constructiva, en un contexto que se ajuste a los principios del Estado democrático y social de derecho, que infunda a sus militantes y simpatizantes, así como a la comunidad en general, una auténtica cultura democrática, evitando, por ende, cualquier acto que altere el orden público o afecte los derechos de terceros, particularmente los de otros partidos políticos, los cuales, se insiste, dada su naturaleza, quedan al amparo de las limitaciones que regulan la libre manifestación de las ideas, particularmente, las consignadas en el código electoral federal.

Tocante a los alcances de la libertad de expresión, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció en la ejecutoria recaída al

expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado SUP-RAP-036/2006, de fecha veintitrés de mayo del dos mil seis, lo siguiente:

“El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales (artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13, párrafo 1), aplicables en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución federal.

De acuerdo con el artículo 6º de la Constitución federal:

‘La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.’

En el artículo trasunto se establecen dos derechos fundamentales distintos: El derecho a la libertad de expresión (primera parte del artículo) y el derecho a la libertad de información (segunda parte). Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, en tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces en la realidad será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.

Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como ‘Pacto de San José de Costa Rica’, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. De ahí que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social: La libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea

arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno [Caso 'La última tentación de Cristo' (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)].

*Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos- **la libertad de expresión implica, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.** En este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.*

*Acerca de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte Interamericana ha señalado **que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias.** Ambas dimensiones -ha considerado la Corte- tienen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos en el artículo 13 de la invocada Convención.*

Lo anterior es así, toda vez que la libertad de expresión no puede circunscribirse a proteger la posición de quien participa en el foro público sino también debe extender su cobertura a quienes participan escuchando lo que los demás tengan que decir.

La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a expresar convicciones políticas, morales, religiosas, filosóficas o de otro tipo y se ve aún más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia política [protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución federal, así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano].

La libertad de expresión goza de un ámbito de acción delimitado sólo por los límites constitucionalmente permitidos y no abarca la emisión, por ejemplo, de expresiones que constituyan indudablemente ofensas o insultos (en tanto afectarían los derechos de terceros).

Una sólida doctrina judicial de la libertad de expresión debe tener en cuenta los aspectos institucionales, esto es, no debe circunscribirse a considerar la naturaleza del discurso expresado o el carácter de las expresiones proferidas, sino, también, por ejemplo, la identidad de quien se expresa, el entorno institucional en que se producen las expresiones proferidas (empresas, sindicatos, universidades y demás) o el medio a través del cual se difunden, un medio impreso, o bien, en medios electrónicos de comunicación. Esta Sala Superior ha avanzado en esta dirección, toda vez que, por ejemplo, ha considerado los límites del derecho a la libertad de expresión en atención al sujeto (SUP-JDC-221/2003) o el entorno partidario en que se profieren las expresiones protegidas constitucionalmente (SUP-JDC-393/2005). En consecuencia, es necesario tomar en cuenta el o los medios a través de los cuales se difunden las expresiones sujetas a escrutinio.”

En ese orden de ideas, se puede señalar que la postura armonizadora de las disposiciones contenidas en los artículos 6º, 7º y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se corrobora, además, con la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, febrero de 2004, página 451, que a continuación se transcribe:

“GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Cuando el ejercicio de las garantías individuales se hace con el fin de obtener un cargo de elección popular, esas garantías deben interpretarse conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, en los que se regulan todos aquellos aspectos relativos a la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Lo anterior, toda vez que el ciudadano que aspira a obtener un cargo de esta índole se sujeta

voluntariamente a las obligaciones que la propia Constitución establece tratándose de la materia electoral.

P./J. 2/2004

Acción de inconstitucionalidad 26/2003.- Partido del Trabajo.- 10 de febrero de 2004.- Mayoría de ocho votos.- Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: Humberto Román Palacios.- Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Víctor Miguel Bravo Melgoza.”

En efecto, de la circunstancia de que el ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos se encuentre modulada o condicionada por su propia naturaleza y por las funciones que tienen encomendadas, así como por las garantías constitucional y legalmente establecidas para su consecución, no se deriva la reducción de este ámbito de libertad a extremos que podrían considerarse incongruentes con el papel que está llamada a cumplir en el sistema democrático, carente de todo contenido real, pues con ello no sólo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios institutos políticos estuvieran siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus fines constitucionales, ya que al ser copartícipes en la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, su función no se limita a fungir como intermediarios entre los ciudadanos y el acceso al poder público; por el contrario, si bien es cierto que su trascendencia en el desenvolvimiento democrático se proyecta con particular intensidad en los procesos electivos, también lo es que son expresiones del pluralismo político de la sociedad, receptores y canalizadores, por ende, de las demandas, inquietudes y necesidades existentes en la población, lo que implica que también ocupan un lugar preponderante en el escrutinio ciudadano del ejercicio de las funciones públicas, respecto del cual los entes políticos y, especialmente, los ciudadanos, cuentan con un interés legítimo -garantizado constitucionalmente por el derecho a la información igualmente reconocido en el artículo 6 in fine-, a saber cómo se ejerce el poder público, pues éste, según prevé el artículo 39 de la propia Ley Fundamental, dimana del pueblo soberano mismo y sólo su ejercicio se traslada a los Poderes de la Unión o a los de los Estados, en términos del artículo 41, primer párrafo del ordenamiento en cita.

En adición a lo anterior, conviene precisar que si bien la libertad de expresión garantiza a los partidos políticos, la difusión de sus ideas, juicios, opiniones y posiciones, su ejercicio se encuentra limitado constitucionalmente frente al derecho que tienen los ciudadanos de recibir información veraz y no manipulada, esto es,

no sólo se pondera la protección al emisor de una idea, sino que también se defiende en forma simultánea el derecho del receptor a contar con una información que sea clara y verídica.

Sobre este particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-34/2006 y Acumulado, estableció el siguiente criterio:

“(...) las informaciones que con pretensiones de verosimilitud se difunden en la población, en específico a la ciudadanía en el campo de las cuestiones político- electorales, deben resultar veraces, esto es, estar sustentadas en hechos objetivos y reales, no manipulados, además susceptibles de ser comprobados razonablemente, y no apoyados en simples rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, sin que ello implique una exactitud inusitada no controvertida del hecho.”

Así las cosas, el contenido de la información que difundan los actores políticos frente al electorado debe ser veraz, fundado en hechos reales y objetivos, respetando el derecho a una información cierta, garantizando con ello que la ciudadanía emita un voto razonado y ampliamente informado, no manipulado por hechos falaces o no acontecidos.

En esta tesitura, conviene recordar los diversos criterios que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció dentro de la sentencia precitada (SUP-RAP-009/2004), conforme a los que se pueden definir con claridad los parámetros que debe satisfacer la propaganda electoral a fin de que encuadre debidamente en el debate de ideas y propuestas, en el marco de la sana crítica y de los principios del Estado democrático y social de derecho y que infunda a sus militantes y simpatizantes, así como a la comunidad en general, una auténtica cultura democrática, entre los cuales destacan los siguientes:

a) En cuanto a la naturaleza del contenido del mensaje, la propaganda electoral debe privilegiar aquellos cuyo contenido abarque situaciones o hechos de carácter objetivo, donde la verificación empírica sea posible, para de ahí derivar ideas y opiniones sobre la plausibilidad de alternativas, por encima de la emisión de apreciaciones abstractas o juicios de valor, con pretensiones de verosimilitud, en los que no es posible demostración alguna.

b) A través de la propaganda electoral, los partidos políticos deben promover el desarrollo de la opinión pública, del pluralismo político y la participación democrática de la ciudadanía, por lo que la tarea particular de estos entes, debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público.

Sobre estas bases, se entiende fácilmente que aquellos mensajes cuyo contenido guarde congruencia con las finalidades anotadas, es decir, propendan a la sana consolidación de una opinión pública libre, al perfeccionamiento del pluralismo político y al desarrollo de una cultura democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del ordenamiento jurídico y, por ello, se encuentran legitimadas las eventuales críticas negativas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos los partidos políticos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se trate no contengan, conforme los usos sociales, expresiones intrínsecamente injuriosas o difamantes, o bien, resulten gratuitas, desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en cuyos casos carecen de toda cobertura legal, por resultar inconducentes o innecesarias, según sea el caso, con el interés general que pretende consolidar la Carta Magna.

Siguiendo este orden de ideas, debe decirse que, como ha quedado expresado en líneas precedentes, por regla general, la propaganda electoral tiene como finalidad principal presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, en términos de lo dispuesto por el artículo 182, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; sin embargo, ello no implica que necesariamente toda la publicidad emitida por los partidos políticos o coaliciones durante las campañas electorales deba difundir ante el electorado, a los candidatos registrados a los diversos cargos de elección popular, y los programas y acciones fijados en la plataforma electoral que para la elección en cuestión se hubiere registrado.

Esto es así, en virtud de que, como ya se mencionó, la finalidad de la propaganda electoral no está dirigida exclusivamente a exponer ante la ciudadanía, a los candidatos registrados, sino que también constituye un elemento para criticar o contrastar las ofertas de los demás contendientes y, eventualmente, reducir el número de sufragios a favor de los demás abanderados y partidos participantes en la justa electoral.

Lo anterior, se corrobora con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la tesis relevante que se transcribe a continuación:

“PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (Legislación del Estado de Chihuahua y similares).-En términos de lo dispuesto en los artículos 85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda electoral no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001.- Partido Acción Nacional.-8 de octubre de 2001.-Unanimidad en el criterio.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario: Hugo Domínguez Balboa.

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, página 181, Sala Superior, tesis S3EL 120/2002.”

Como se aprecia, el máximo órgano jurisdiccional en la materia ha reconocido que sobre la base de la promoción y formación de la opinión pública, el pluralismo político y la participación democrática de la ciudadanía, la propaganda electoral, debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de aspectos relevantes para el acontecer público, por ello, se encuentran legitimadas incluso las eventuales críticas negativas que en tales mensajes se contengan, aún aquellas que resultaren particularmente negativas, duras e intensas.

En este sentido, conviene reflexionar que dentro de la totalidad de la propaganda electoral que despliegan los partidos políticos y coaliciones, debe existir, como parte del equilibrio entre las distintas opciones políticas y como contribución a la formación de una opinión pública mejor informada, un porcentaje destinado a contrastar las ideas de los competidores políticos, lo cual puede hacerse mediante la expresión crítica de los aspectos que se estimen relevantes para la sociedad, sin

exceder, en todo caso, los límites que constitucional y legalmente se encuentran previstos para el ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas.

c) El contexto en el que se producen las manifestaciones que estén sujetas al escrutinio de la autoridad administrativa electoral o del órgano jurisdiccional, pues no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como las contenidas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población.

Como puede observarse, a través de la interpretación de los lineamientos o criterios que se encuentran inmersos en los preceptos constitucionales y legales de referencia, es clara la intención de la norma de tutelar y salvaguardar una equitativa y sana contienda electoral entre los partidos políticos, basada en la expresión de las ideas y principios que postulen, presentándose como una mejor opción frente al electorado, y no en el descrédito de la imagen de los demás candidatos o partidos políticos, todo en el marco de un Estado democrático de derecho.

En mérito de lo anterior, debe decirse que para la constitución de un Estado democrático de derecho, no es suficiente la existencia formal de un proceso electivo para la renovación periódica de los poderes de la Unión, sino que dicho proceso electoral debe cubrir determinadas condiciones, como el respeto de los derechos políticos de todas las fórmulas electorales involucradas en la contienda, entre los cuales destaca el derecho a la igualdad, lo que significa que todas las alternativas electorales se encuentren en iguales condiciones de competencia y que la posibilidad de obtener el triunfo dependa únicamente de sus capacidades de convencimiento y convocatoria hacia el electorado; así como el derecho a la equidad, lo que a su vez significa, que en las campañas electorales prevalezca la legalidad de los actos de todos los contendientes, de manera que no se produzcan ventajas injustas para alguno o algunos de ellos, destacando que para tal fin, la

propaganda electoral debe presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas, propiciando la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los documentos básicos de los partidos políticos y de la plataforma electoral que para la elección en cuestión se hubieren registrado, absteniéndose de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros institutos políticos y sus candidatos, evitando en todo momento generar presión a los electores; y en caso de que mediante la propaganda electoral se efectúe una crítica a las otras alternativas político-electorales, en ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, dicha crítica debe realizarse con apego a las directrices fundamentalmente contenidas en el artículo 41 de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo expuesto en párrafos precedentes resulta relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que el estudio y análisis que a continuación realizará esta autoridad electoral, respecto a los promocionales denunciados por el Partido Acción Nacional, y presuntamente emitidos por la extinta coalición “Por el Bien de Todos”, tendrá como finalidad determinar si dichos mensajes se ajustan o no a las normas y principios que han sido expresados con anterioridad en este apartado.

4.- Que una vez que se han expuesto las consideraciones generales que resultan aplicables, en cumplimiento a lo ordenado por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el recurso de apelación identificado con la clave **SUP-RAP-79/2008 Y SUS ACUMULADOS, SUP-RAP-105/2008 Y SUP-RAP-110/2008**, procede entrar al estudio de fondo del presente asunto. Por cuestión de método, esta autoridad estima pertinente dividir las conductas sujetas a valoración en tres apartados, a saber:

A) Hechos materia del procedimiento especializado (**procedimiento principal**) identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, a efecto de determinar si los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1) y “Fobaproa 2” (Informativa 2), difundidos en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, incumplieron con lo ordenado por la Constitución Federal, y en específico con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como determinar las circunstancias particulares en las que fueron transmitidos.

B) Hechos materia del **Primer Incidente** de Inejecución de la Resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal, identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, consistentes en determinar si el promocional identificado como “Informativa 9”, difundido en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” incumplió con lo ordenado por la Constitución Federal, y en específico con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como determinar si el mismo contiene elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro de la resolución recaída al procedimiento principal.

C) Hechos materia del **Segundo Incidente** de Inejecución de la Resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal, identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, consistentes en determinar si el promocional identificado como “Salinas Fobaproa”, difundidos en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” incumplió con lo ordenado por la Constitución Federal, y en específico con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como determinar si el mismo contiene elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro de la resolución recaída al procedimiento principal.

Bajo estas premisas, corresponde a esta autoridad entrar al análisis de los hechos sintetizados en el inciso **A)** que antecede, con el objeto de determinar si los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1) y “Fobaproa 2” (Informativa 2), difundidos en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, se ajustan o no a la normatividad federal electoral.

CONTENIDO DE LOS PROMOCIONALES

Al respecto, conviene tener presente el contenido de los promocionales en cuestión, mismos que presentan las siguientes imágenes y expresiones:

PROMOCIONAL FOBAPROA # 1(Informativa 1)

En primer término, en pantalla aparece sobre un fondo de color blanco la leyenda “Informativa # 1”, en letras rojas, seguido de la imagen del rostro del C. Felipe

Calderón Hinojosa, misma que en la parte inferior dice en letras negras “FOBAPROA” y a un costado la leyenda también en color negro con la palabra cómplice subrayada en color rojo: *“Informativa uno. Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos”*, acompañando esta imagen se escucha una voz que repite el contenido de la leyenda antes transcrita.

Posteriormente, aparece en un fondo color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: ‘FOBAPROA’, la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: *“Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: el fobaproa.”*

Seguido de las imágenes antes descritas, se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: *“encubriste a los que nos robaron”*.

Acto continuo, aparece el rostro del C. Felipe Calderón Hinojosa que de manera inmediata se convierte en el número cero en color rojo, apreciándose en la parte superior del mismo la leyenda “Manos”, y en la inferior “Sucias”, seguido de imágenes de varias personas que aparentemente muestran una condición socio-económica, acompañado de la voz que continúa diciendo: *“y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad, y nos traes el cuento del empleo cuando tienes cero en empleos creados”*.

Por último, sobre fondo color negro se aprecia la leyenda: “Diputados y Senadores del PRD”.

PROMOCIONAL FOBAPROA # 2 (Informativa 2)

En un primer plano, aparece en la pantalla un fondo de color blanco con la leyenda en letras de color rojo: “Informativa # 2”, seguida de una voz en off, que dice *“Informativa dos”*, mostrándose a continuación un fondo en color blanco, dando la apariencia de una hoja que contiene con letras en color negro la leyenda: “FOBAPROA”, la cual se ubica en forma transversal y en la que se aprecian unas manos firmando el citado documento, acompañado de una voz que afirma: *“Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el fobaproa”*.

Seguida a las anteriores imágenes aparece el C. Felipe Calderón Hinojosa, sosteniendo una hoja o documento acompañado de una voz que señala lo siguiente: *“Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia”*.

Acto continuo, se inserta la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, apreciándose que se encuentra sentado detrás de un escritorio y al lado de la bandera nacional, diciendo con voz enérgica: *“Seguiremos con las auditorias para que no sólo se castigue a los responsables, sino que devuelvan el dinero”*.

Posteriormente se aprecia a tres sujetos que se encuentran abrazados y con un semblante sonriente; en conjunto con esta iconografía la voz antes señalada continúa diciendo: *“Y sigues encubriendo a los culpables”*.

Enseguida de la imagen antes descrita, se aprecian imágenes de varias personas que aparentemente denotan una condición socio-económica baja y con expresión adusta, acompañado de la voz antes referida que continúa diciendo: *“y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso”*.

En la parte final, aparece en un fondo de color negro la frase: ‘Candidatos a Diputados del PRD’.

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

Al respecto, conviene precisar que la existencia y contenido de los promocionales en estudio, no se encuentra sujeto a controversia ni es objeto de prueba, en virtud de que la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, al contestar el presente procedimiento, reconoce su difusión, por lo que en términos del artículo 25, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tratarse de un hecho reconocido, no es objeto de prueba, y en consecuencia se debe tener por cierto en cuanto a su existencia.

Sobre este particular, conviene reproducir la contestación que formuló la coalición denunciada al presente procedimiento, misma que en la parte conducente dice lo siguiente:

“ ...

Durante el proceso electoral, la coalición electoral que represento, Por el Bien de Todos, difundió en medios electrónicos, los siguientes promocionales:

‘Fobaproa 1’:

Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘informativa # 1’, La voz afirma: ‘Informativa uno. Confirmado: Calderón cómplice del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos, Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: El Fobaproa. Encubriste a los que nos robaron y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Y nos traes el cuento del empleo cuando tienes 0 en empleos creados.’

‘Fobaproa 2’:

Se advierte en fondo blanco la leyenda ‘Informativa # 2’. La voz afirma: ‘Informativa dos. Calderón: con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el Fobaproa. Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia’. Se inserta un video en el que aparece Felipe Calderón diciendo: ‘Seguiremos con las auditorías para que no solo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero’. Aparece una imagen con tres personas abrazadas y riendo. La voz afirma: ‘Y sigues encubriendo a los culpables y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso’.

Para mayor claridad, conviene tener presente, en la parte que interesa, el contenido del dispositivo reglamentario antes invocado:

“Artículo 25

1. Son objetos de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

(...)

Asimismo, es necesario precisar que el contenido de los promocionales de referencia fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo General de este Instituto, al momento de resolver el procedimiento especializado identificado con la clave de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, mismo que quedó firme, toda vez

que dicha resolución fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP- RAP-049/2006**, por lo que su existencia y autoría no se encuentran sujetas a controversia.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Una vez expresado lo anterior, esta autoridad realizará el análisis del contenido de los promocionales denunciados a la luz de los argumentos vertidos en las consideraciones generales de la presente resolución, es decir, en el caso se verificará si las afirmaciones realizadas se encuentran amparadas en lo previsto en los artículos 6º y 7º constitucional, o si por el contrario actualizan lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del código electoral federal, vigentes al momento en que se realizaron los hechos denunciados.

PRONUNCIAMIENTO FOBAPROA # 1 (Informativa 1)

De análisis al promocional identificado como “Fobaproa 1”, esta autoridad colige que el contenido de las frases expuestas en el mismo, soportadas en la serie de imágenes que acompañan a cada una de ellas, tienen la finalidad de transmitir a los receptores de esos mensajes, que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó en un acontecimiento (suscripción o aprobación del FOBAPROA) que la coalición ‘Por el bien de Todos’ considera un fraude, lo cual, de acuerdo a la percepción de dicha coalición, tuvo como consecuencia la pérdida de empleos.

Del mismo modo, se observa que el promocional en cuestión pretende transmitir el mensaje de que el C. Felipe Calderón Hinojosa encubrió a algunas personas, que desde la óptica de la coalición referida, cometieron un robo a través del FOBAPROA.

En efecto, la forma en que se presenta el mensaje en cuestión, se encuentra destinada a formar una opinión en el auditorio, en específico, tener por ciertos o con apariencia de verdaderos, hechos consistentes en la comisión de un fraude y de encubrimiento de un robo por parte del candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional, a través de su participación en la suscripción del FOBAPROA, transmitiendo el mensaje de que dicho personaje realiza acciones contrarias a la ley o la verdad en perjuicio de la población.

Al respecto, conviene tener presente la definición de fraude contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, misma que a continuación se reproduce:

“fraude.

(Del lat. fraus, fraudis).

1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.

2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros.

3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos.”

Asimismo, conviene reproducir, a manera de criterio orientador, el concepto jurídico del delito de fraude contenido en el artículo 386 del Código Penal Federal, mismo que a la letra establece lo siguiente:

“Artículo 386

Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

Como podemos observar, el concepto de fraude se traduce en una acción contraria a la verdad que perjudica a la persona en contra de la cual se comete. Por su parte, en materia penal, la comisión del delito de fraude se configura cuando se realiza un engaño en perjuicio de una persona o se saca algún provecho de la falsa apreciación de la realidad que éste tiene y se obtiene alguna cosa o se alcanza un beneficio indebido.

Al respecto, conviene precisar que los conceptos antes enunciados no implican que esta autoridad prejuzgue, respecto de la existencia o no de conductas delictivas,

previstas y sancionadas por el ordenamiento penal, cuya aplicación se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Instituto Federal Electoral.

Una vez establecidos los anteriores criterios, la afirmación hecha por la coalición denunciada en el sentido de que el C. Felipe Calderón Hinojosa fue autor de un fraude al suscribir o aprobar el FOBAPROA, pone en evidencia que al comunicar a los receptores del promocional la imputación de un delito o de una acción contraria a la verdad en perjuicio de dicha persona, tal aserción se realiza con la única finalidad de denigrar su imagen, toda vez que no existe algún pronunciamiento por parte de una autoridad competente a través del cual se pueda considerar que dicho fideicomiso constituya un delito y, en segundo lugar, que derivado de su creación u operación, el entonces candidato a la Presidencia de la República realice acciones en contra de la población, trastocando los límites de la garantía de la libertad de expresión, plasmada en el artículo 6° constitucional, y excediendo así mismo, los límites establecidos a través de los diversos criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-009/2004, toda vez que el empleo de expresiones calumniosas con el único fin de denigrar la imagen pública del candidato del partido denunciante, contradice los parámetros de referencia, conforme a los cuales, el sujeto emisor debe transmitir mensajes cuyo contenido abarque situaciones o hechos de carácter objetivo, que sean susceptibles de verificación empírica, demostrándose en el presente caso que las afirmaciones en cuestión no encuentran sustento en hechos demostrados.

Ahora bien, por lo que hace a la expresión “encubriste a los que nos robaron”, la autoridad de conocimiento, estima que la misma trasmite a los receptores de ese mensaje la idea de que el C. Felipe Calderón Hinojosa llevó a cabo una conducta contraria a la ley, realizando acciones tendentes a ocultar a los responsables de un robo.

Al respecto, conviene tener presente la definición de robo contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, misma que a continuación se reproduce:

robo

1. m. Acción y efecto de robar.

2. m. Cosa robada.

3. m. *En algunos juegos de naipes y en el dominó, número de cartas o de fichas que se toman del monte.*

4. m. Der. ***Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.***

Por su parte, robar se define en el diccionario antes referido de la siguiente forma:

robar

*(Del lat. vulg. *raubare, y este del germ. *raubôn, saquear, arrebatarse; cf. a. al. ant. roubôn, al. rauben, ingl. reave).*

1. tr. ***Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno.***

2. tr. ***Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea.***

De las definiciones antes transcritas se obtiene válidamente que el significado lexicológico de robo consiste en una acción encaminada al apoderamiento de una cosa ajena.

De la misma forma, conviene reproducir, a manera de criterio orientador, los conceptos jurídicos de los delitos de robo y encubrimiento contenidos en los artículos 367 y 400 del Código Penal Federal, mismos que a la letra establecen lo siguiente:

“Artículo 367.

Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Artículo 400

Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiriera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;

Para los efectos del párrafo anterior, los adquirentes de vehículos de motor deberán tramitar la transferencia o regularización de vehículo, cerciorándose de su legítima procedencia;

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe;

IV.- Requerido por las autoridades, no de auxilio para la investigación de los delitos o para la persecución de los delincuentes; y

V.- No procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto en este artículo o en otras normas aplicables.

(...)'

De los dispositivos legales antes transcritos, podemos obtener la definición del delito de robo, mismo que se traduce en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, sin tener el derecho a disponer legalmente de la misma.

Tratándose del delito de encubrimiento, se exige como presupuesto para su configuración la realización anterior de un delito, en cuya ejecución no participe el sujeto que con posterioridad al mismo oculte el producto del delito, favorezca el

ocultamiento del responsable del primer delito, o bien, le preste cualquier tipo de auxilio o ayuda.

En esta tesitura, es conveniente precisar que esta autoridad al enunciar los tipos penales en cita, no prejuzga respecto de la existencia o no de conductas delictivas, previstas y sancionadas por el ordenamiento penal, lo cual se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Instituto Federal Electoral.

Por su parte, en cuanto al uso de la expresión en la que se asevera: “daño: más de un millón de empleos perdidos”, la autoridad de conocimiento considera que se trata de una afirmación a través de la cual la coalición denunciada transmite en los destinatarios del mensaje, que las conductas supuestamente desplegadas por el C. Felipe Calderón Hinojosa tuvieron un resultado que se tradujo en la pérdida de empleos, sin embargo, dicha tesis carece de sustento en un hecho objetivo, pues como ya quedó asentado en líneas precedentes, no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que la operación del referido fideicomiso hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, ello no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa.

Esto es así, toda vez que el nexo causal por el que la coalición denunciante pretende responsabilizar al multicitado candidato con el detrimento o menoscabo en los empleos, no se encuentra apoyado en un hecho sujeto a un canon de veracidad y, por tanto, no cumple con los requisitos que debe revestir toda crítica contenida dentro de la propaganda de los partidos políticos.

Una vez establecidas las anteriores consideraciones, podemos arribar a la conclusión de que las aseveraciones difundidas en los promocionales en estudio que vinculan al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude y del encubrimiento de un robo, se trata de expresiones que tienen como finalidad denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, presentándolo frente a los receptores de los mensajes como una persona responsable de la ejecución de conductas deshonestas o contrarias a la ley, rebasando los límites a la libertad de expresión, pues se le atribuyen conductas no veraces, o al menos no demostradas.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis, contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al

ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRONUNCIAMIENTO FOBAPROA 2

Al respecto, conviene considerar que dentro del promocional en estudio, existen elementos que guardan identidad con algunos que ya han sido objeto de valoración por parte de esta autoridad, al realizar el análisis del promocional identificado como FOBAPROA #1, particularmente con las expresiones "...con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: el fobaproa", "Y sigues encubriendo a los culpables".

En esta tesitura, esta autoridad considera que respecto de las frases "con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia", "encubriste a los que nos robaron" "y sigues encubriendo a los culpables", deben prevalecer las mismas consideraciones expuestas dentro del análisis realizado al promocional identificado como "Fobaproa # 1", en virtud de que dichas expresiones pretenden transmitir a los receptores del mensaje, que el C. Felipe Calderón Hinojosa ha cometido conductas deshonestas o contrarias a la ley, lo que no encuentra sustento en hechos veraces o al menos no demostrados.

En efecto, debe hacerse hincapié que las frases "con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia", "encubriste a los que nos robaron" "y sigues encubriendo a los culpables" expuestas dentro de los promocionales motivo del presente procedimiento, de conformidad con el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-034/2006 y su acumulado, constituyen aseveraciones calumniosas, en virtud de que carecen de sustento para hacer explícita la crítica de la coalición 'Por el Bien de Todos' a las características personales del aludido candidato, al imputarle la comisión de conductas ilícitas apoyadas en acontecimientos inexactos.

En tal virtud, el contenido de la información que difundió la coalición denunciada a los receptores del mensaje, no se encuentra fundado en hechos reales y objetivos, en consecuencia, no respetó el derecho a una información veraz que garantice a la ciudadanía la emisión de un voto razonado y ampliamente informado, ajeno a cualquier aseveración calumniosa.

De esta forma, el uso de imputaciones que no encuentran sustento en un hecho real y objetivo, por lo que hace a las afirmaciones antes mencionadas, **denigrar** a la persona del candidato presidencial por el partido denunciante, perjudicando la fama pública u opinión colectiva que se tiene de dicho personaje.

Por otra parte, no pasa inadvertido para esta autoridad que si bien dentro del promocional bajo análisis, se observa la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa manifestando: “*Seguiremos con las auditorías para que no sólo se castigue a los responsables sino que devuelvan el dinero*”, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta suficiente para arribar a las conclusiones que pretende transmitir la coalición denunciada, pues de la misma no es dable colegir, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBABROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje haya encubierto conductas delictivas o contrarias a la ley, y finalmente que las afirmaciones antes referidas, permitan calificarlo como mentiroso, toda vez que el elemento en estudio, sólo permite desprender que el candidato aludido se pronunció sobre un hecho de interés nacional, sin que ello demuestre su participación en los hechos que se le pretenden atribuir en el promocional de referencia.

Asimismo, respecto de la expresión contenida en el promocional en estudio relativa a que: “Y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad”, esta autoridad advierte que no existen elementos que permitan acreditar que dicho ciudadano participó en la aprobación del FOBAPROA, por lo que aun en el supuesto de que se determinara que el referido rescate bancario hubiese tenido algún impacto en el número de empleos, ello no puede ser atribuido al C. Felipe Calderón Hinojosa.

Por último, tratándose de la expresión “eres muy mentiroso”, esta autoridad estima que dicho calificativo es un juicio de valor por el que se le atribuye una determinada característica personal al multicitado candidato, resultado de las premisas por las que se le vincula con la comisión de conductas delictivas o contrarias a la verdad derivadas de su participación en el FOBAPROA y que produjo consecuencias económicas negativas en la sociedad, transmitiendo a los receptores el mensaje de que dicho candidato se vale de un doble discurso, en virtud de que por una parte el citado candidato se manifiesta a favor de castigar a los responsables de obtener un beneficio en forma ilícita, y por otra, él fue artífice de conductas contrarias a la ley que devinieron en un daño económico y social.

Al respecto, esta autoridad considera que el calificativo con el que se presenta al C. Felipe Calderón Hinojosa se hace con la finalidad de denigrar su imagen, en virtud de que el juicio que se emite en su persona no encuentra sustento en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración; en consecuencia rebasa los límites de la libertad de expresión al ser una crítica desproporcionada y excesiva que no encuentra sustento en un hecho real.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Lo anterior guarda consistencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP- RAP- 049/2006**, misma que en la parte conducente determinó lo siguiente:

“...

Sentadas las anteriores premisas normativas y fácticas, esta Sala Superior procede a analizar el caso concreto:

*1. En lo concerniente a los motivos de impugnación relativos a que la responsable viola el principio de exhaustividad y, con él, el de legalidad electoral, toda vez que la misma, según la coalición recurrente, parte de la premisa falsa de que la coalición denunciada imputa a Felipe Calderón Hinojosa la comisión de los delitos de fraude y robo, los mismos son **infundados**, como se muestra a continuación.*

Con independencia de que los términos ‘fraude’, ‘robo’, ‘cómplice’ y ‘encubrir’ que figuran en los promocionales bajo consideración, identificados como 1 y 2, puedan tener otros significados, como el etimológico o lexicográfico que no están vinculados con el significado que tienen en el derecho, particularmente en el derecho penal, lo decisivo es que, tal como lo sostuvo la responsable, el núcleo de los mensajes de

ambos spots, soportado en la serie de imágenes que los acompañan, tomados tales spots individualmente o en conjunto, está constituido por expresiones que los hablantes del español entienden, en la actualidad, en general, que significan o denotan la imputación dirigida al candidato del Partido Acción Nacional de que realizó determinadas conductas que constituyen delitos, a saber: Fraude, como autor y cómplice, así como el encubrimiento de diversas conductas delictuosas, como robo, lo que, en sí mismo, es suficiente para actualizar una violación a lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p), y 186, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En efecto, tal como se estableció por esta Sala Superior, por unanimidad en tal aspecto, en sesión pública de veintitrés de mayo del presente año, al resolver la ejecutoria recaída en el expediente SUP-RAP/34-2006 y acumulado, los enunciados fácticos en los que se hace la afirmación de hechos concretos, imputados a un individuo, relacionados con la realización de acciones ilícitas, como las que tienen el carácter de delitos, y, por ende, comprobables, por ejemplo, mediante las indagaciones efectuadas por el ministerio público y confrontadas en un proceso jurisdiccional bajo el principio contradictorio, no están protegidas constitucional ni legalmente si las afirmaciones resultan ser falsas o erróneas.

En la misma ejecutoria se estableció que, en lo relativo a las expresiones con el carácter de informaciones que, específicamente, se difunden al electorado en el campo de las cuestiones político-electorales, deben resultar veraces, esto es, estar sustentadas en hechos objetivos y reales, no manipulados, susceptibles de ser comprobados razonablemente y no apoyados en simples rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas, sin que ello implique una exactitud inusitada ni incontrovertible del hecho.

*En el spot 1 figuran las siguientes expresiones dirigidas al candidato presidencial postulado por el Partido Acción Nacional: **'Informativa uno.** Confirmado: Calderón **cómplice** del PRI, Daño: más de un millón de empleos perdidos, Calderón: con tus manos*

sucias firmaste junto al PRI el **fraude** más grande de la historia: el Fobaproa. **Encubriste a los que nos robaron** y dañaste a más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad' (énfasis añadido).

En el spot 2 figuran las siguientes expresiones también dirigidas al mismo candidato presidencial: '**Informativa dos**. Calderón: con tus manos sucias **firmaste** junto al PRI el **fraude** de la historia: el Fobaproa. Ciento veinte mil millones de dólares de deuda. Nos prometiste justicia...**Y sigues encubriendo a los culpables** y no te importaron los más de un millón de trabajadores despedidos sin piedad. Calderón: eres muy mentiroso' (énfasis añadido).

En primer lugar, cabe señalar que ambos promocionales se califican como de carácter informativo, según se desprende de las respectivas entradas ('Informativa uno' e 'informativa dos'), apoyadas con imágenes en las que aparecen las respectivas leyendas: 'Informativa # 1' e 'Informativa # 2'. Existe, además, no sólo una secuencia de ambos promocionales sino también una vinculación temática.

El mensaje principal del spot 1 puede reconstruirse informalmente de la siguiente manera:

Premisa 1: Calderón: Cómplice del PRI.

Premisa 2: El daño de la complicidad de Calderón con el PRI es: Más de un millón de empleos perdidos.

Premisa 3: Calderón: Con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia: El Fobaproa.

Conclusión explícita: Calderón: Encubriste a los que nos robaron.

Conclusión implícita [se provee]: Calderón es un encubridor del delito de robo y partícipe en el delito de fraude.

El mensaje principal del spot 2 puede reconstruirse informalmente así:

Premisa 1: Calderón: Con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude de la historia: El Fobaproa.

Premisa 2: El Fobaproa involucró veinte mil millones de dólares de deuda.

Premisa 3: Calderón nos prometió justicia.

Conclusión explícita: *Y sigues encubriendo a los culpables.*

Conclusión implícita [se provee]: *Calderón es partícipe en el delito de fraude y sigue encubriendo a los culpables [de fraude].*

Independientemente de que en los promocionales bajo consideración, tomados individualmente o en su conjunto, contengan ciertas expresiones que puede estimarse constituyen una crítica intensa o negativa, de carácter político, realizada mediante la formulación de juicios valorativos acerca de las acciones pasadas del ahora candidato presidencial del Partido Acción Nacional, es el caso que tienen, preponderante o predominantemente, un carácter pretendidamente informativo (como se advierte de sus respectivas entradas, de las conclusiones del núcleo de los mensajes y del tono general de los promocionales) y, por ende, están sujetos a un cierto canon o criterio de veracidad.

Asimismo, todas las expresiones críticas contenidas en los promocionales bajo consideración no sólo tienen connotaciones negativas sino que, incluso, algunas de ellas tienen significados lexicográficos (no pertenecientes a la terminología técnica del derecho) que denotan acciones reprochables socialmente y, por ende, son sancionables por el derecho. Así, de acuerdo con el Diccionario del español usual en México (México, El Colegio de México, 1996), ‘fraude’, en su primera acepción, significa: Engaño premeditado por medio del cual una persona se beneficia a costa de otra o de otras; ‘robo’ significa acto de robar y ‘robar’ quiere decir: Quitar a alguien algo que tiene o le pertenece, sin su permiso, con violencia o con engaño; ‘cómplice’ significa: Respecto de una persona, otra que junto con ella comete un delito o falta, o colabora para que se lleve a cabo, y ‘encubrir’ significa disminuir, tapar u ocultar una falta, un delito o algo que se considera negativo.

Tanto en el artículo 38, párrafo 1, inciso p), como en el 186, párrafo 2, del código electoral federal se utilizan los términos ‘calumnia’ y ‘denigrar’. De acuerdo con la obra citada en el párrafo precedente, ‘calumnia’ significa, en su primera acepción, acusación falsa hecha maliciosamente en contra de alguien con el fin de dañarlo o desprestigiarlo y ‘denigrar’ quiere decir criticar o

hablar mal de alguien o algo; hacerle mala fama o desacreditarlo, así como ultrajar, agraviar o insultar gravemente a una persona.

Así, para que una expresión califique como calumniosa, la imputación o atribución delictiva que se hace a otra persona ha de ser falsa, porque lo fuere el hecho en que descansa la imputación, o bien, porque el imputado fuere inocente.

Para efectos político-electorales, resulta falso el hecho imputado y falsa es la individualizada acusación cuando no existan datos judiciales que acrediten o comprueben la veracidad de la imputación o individualización, ya que, como se adelantó, el derecho sólo considera delictivo un hecho determinado y acreditada la responsabilidad de su autor cuando existe sentencia irrevocable que así lo establezca, como resultado de un proceso jurisdiccional regido por el principio contradictorio.

Como se anticipó, la imputación con falsedad de responsabilidades penales por la comisión de actos concretos o determinados no está protegida constitucional ni legalmente, toda vez que no sólo las expresiones bajo consideración no tienen cobertura legal sino que, además, encuadran dentro de las limitaciones expresamente establecidas en los artículos 6º y 7º de la Constitución federal consistentes en no atacar los derechos de tercero, en este caso, del candidato presidencial postulado por el Partido Acción Nacional y, como se aprecia en ambos spots, de un partido político nacional, como lo es el Partido Revolucionario Institucional.

Acorde con lo anterior, como lo sostuvo la responsable, el contenido de los promocionales bajo consideración viola lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p), y 186, párrafo 2, del código electoral federal, toda vez que el núcleo del mensaje que se pretende transmitir al auditorio es que Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial postulado por el Partido Acción Nacional, realizó (y aún realiza, pues, según la falsa atribución delictiva, en el spot 2 se afirma: ‘Y sigues encubriendo a los culpables’) hechos determinados y calificados como delitos por la legislación penal, siendo que tales hechos no están probados o la persona a quien se imputan no ha sido declarada jurídicamente

responsable, lo que implica una imputación falsa al candidato en la participación de diversos delitos y, por lo tanto, una expresión calumniosa que, además, denigra al referido candidato, pues tales expresiones intentan desacreditarlo o descalificarlo frente al electorado al imputarle, sin sustento, ciertos delitos.

Ahora bien, atendiendo a los elementos auditivos y visuales que componen los spots puede llegarse a la conclusión de que la resolución de la responsable, por la cual se ordena la suspensión de los mismos, es conforme con la normativa constitucional y legal en materia de derechos fundamentales, particularmente a las libertades de expresión y de imprenta, así como sus limitaciones, en razón de lo siguiente:

a) Ambos promocionales destacan por su objetivo de dar a conocer datos sobre acontecimientos que se reputan como veraces, puesto que llevan por título la expresión 'Informativa' y tienen una secuencia progresiva ('1' y '2'), de manera tal que se anuncian como continentes de noticias sobre acontecimientos históricos;

b) Los enunciados que los conforman son categóricos y no retóricos, con lo cual está excluida la posibilidad de reputarlos como opiniones o evaluaciones relacionadas con acontecimientos públicamente sobresalientes por corresponder a quien fuera un servidor público o figura destacada por su relevancia en el ámbito político, social o cultural, o bien de las posiciones institucionales de una fuerza política;

c) Tienen como temática común: i) La autoría del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), ya que se subraya en los promocionales que, de manera conjunta, lo firmaron el candidato Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional; ii) Sus graves efectos nacionales consistieron en una deuda de ciento veinte mil millones de dólares y el despido de más de un millón de trabajadores, y iii) Su relevancia por la comisión de conductas delictivas, ya que Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional estuvieron involucrados en una conducta fraudulenta, al suscribir dicho fondo, y con ello, a su vez, se encubrió a quienes robaron a la población en general. Esto es, tal ciudadano es

cómplice de un delito y encubridor de otros individuos que, a su vez, cometieron uno distinto, mientras que el partido político mencionado es copartícipe de un delito;

d) Los mensajes están reforzados con elementos auditivos que exageran las afirmaciones, como lo son ‘con tus manos sucias’; ‘fraude más grande de la historia’; ‘trabajadores despedidos sin piedad’; ‘nos traes el cuento del empleo, cuando tienes cero en empleos creados’, y ‘Calderón eres muy mentiroso’, así como con componentes gráficos simbólicos que refuerzan las expresiones orales, por ejemplo, un cuadro en el que aparece la suscripción de un documento con la imagen sobrepuesta del candidato Felipe Calderón; otro cuadro, en la que el candidato esboza una sonrisa y muestra un documento, de manera simultánea a la reproducción de la deuda contraída con la creación de dicho fondo; un diverso cuadro en que el propio candidato ofrece castigar a los culpables y obtener la devolución del dinero, como preludio a otro en el que aparecen tres hombres vestidos de traje en actitud festiva y que representarían a los beneficiados con el supuesto fraude y que habrían robado a la población, y una secuencia de individuos de edad avanzada y de extracción humilde que, en oposición a los anteriores, representarían a las personas despedidas y cuya condición no importó a los responsables del fraude, así como un cuadro final en la que el rostro del candidato se convierte en un cero que equivale a los empleos generados.

*Como consecuencia de lo anterior, deviene en **inoperante** el diverso agravio hecho valer por la coalición apelante, según el cual la responsable violó el principio de exhaustividad, al soslayar que los términos que figuran en los promocionales bajo consideración tienen otros significados que no están relacionados con el que tienen en el ámbito del derecho penal, ya que, finalmente, dicho motivo de impugnación está enderezado a mostrar que las expresiones en cuestión están protegidas constitucional y legal, lo cual no es el caso, como se ha establecido.*

(...)

*En lo concerniente a los motivos de impugnación de carácter formal hechos valer por la coalición apelante según los cuales la responsable viola la garantía de defensa establecida en el artículo 14 de la Constitución federal, ya que, por un lado, no analizó diversos argumentos de defensa vertidos por la coalición apelante en la respectiva audiencia de contestación, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, así como de alegatos, en el procedimiento administrativo especializado abreviado, los mismos devienen en **inoperantes**, ya que si bien, por un lado, la palabra ‘firma’ que aparece en los promocionales puede tener otros significados lexicográficos que no están relacionados con la comisión de actividades delictivas y, por otro, si bien la responsable, en la resolución impugnada, no se refirió expresamente a la solicitud planteada por la coalición impugnante, por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, para que se pidiera información a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre el proceso de aprobación de la conversión de deuda privada en pública relacionada con el denominado rescate bancario a efecto de que fuera agregado a los autos del expediente respectivo, lo cierto es que, dadas las imputaciones o atribuciones de carácter delictivo hechas al candidato presidencial del Partido Acción Nacional en los promocionales bajo examen, la información que pudiese proporcionar la Cámara de Diputados no sería, por sí misma, apta para declarar que el candidato referido ha sido declarado responsable de los delitos que se le atribuyen en los promocionales, ya que el órgano competente para hacerlo sería la autoridad jurisdiccional a través de una sentencia irrevocable.*

Por otra parte, en diverso agravio la coalición apelante sostiene que la responsable omite realizar la valoración de todas y cada una de las probanzas que ofreció y aportó al procedimiento tendientes a acreditar que el candidato presidencial postulado por el Partido Acción Nacional participó en la aprobación del ‘tema conocido como FOBAPROA’, así como en la justificación que realizó de la operaciones involucradas.

*El agravio bajo estudio deviene en **inoperante**, porque si bien de las documentales aportadas por la coalición apelante puede derivarse, a lo sumo, la postura fijada por el actual candidato*

presidencial postulado por el Partido Acción Nacional cuando fungió como dirigente de ese partido político y en otros puestos, así como la posición institucional del partido político sobre el asunto denominado FOBAPROA, lo cierto es que tales probanzas, tomadas en forma individual o en conjunto, no constituyen datos judiciales acreditativos de la veracidad de las imputaciones o atribuciones delictivas hechas al candidato en los promocionales bajo consideración.

*En lo tocante al agravio según el cual la autoridad responsable viola tanto el principio de legalidad electoral como el principio de exhaustividad, al sostener que la aseveración hecha en los promocionales bajo consideración relativa a ‘daño: Más de un millón de empleos perdidos’, carece de sustento, resulta **inoperante**, toda vez que, como ha quedado establecido, aun en el supuesto de que se tratara de un hecho verdadero y se comprobara que existió un nexo causal entre las acciones pasadas del ahora candidato del Partido Acción Nacional, nexo que no quedó acreditado, según sostuvo la responsable, lo cierto es que, a la postre, la calificación de que el contenido de los promocionales bajo consideración no están protegidos constitucional ni legalmente no dependen de la veracidad de ese supuesto hecho de carácter económico.*

El agravio bajo estudio también debe desestimarse, toda vez que, como se ha mostrado, las razones centrales por las cuales esta Sala Superior estima que el contenido de los promocionales no está protegido constitucional ni legalmente radican, en esencia, en que figuran expresiones que implican una imputación falsa de determinados hechos delictivos concretos al citado candidato presidencial y si bien, según los promocionales, derivan de supuestos actos realizados por el candidato relacionados con el tema del FOBAPROA, la coalición apelante no aporta u ofrece datos acreditativos de la veracidad de las imputaciones o atribuciones delictivas hechas al referido candidato.

(...)

Bajo estas premisas, los argumentos hechos valer por la coalición denunciada en el sentido de que, en primer término, el contenido de los mensajes materia del

presente procedimiento se basan en hechos objetivos, pues buscan evidenciar la participación del C. Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación del FOBAPROA, avalando la impunidad de funcionarios y ex funcionarios en dicha operación a la que considera fraudulenta y, en segundo lugar, que dicha acción tuvo repercusiones económicas en detrimento de la población, resultan infundados, pues como se ha expuesto, los promocionales de mérito contienen expresiones que vinculan al citado candidato con la comisión de delitos o acciones negativas sin que exista algún elemento real que las sustente o algún pronunciamiento por parte de alguna autoridad competente que así lo demuestre, por lo que no están protegidas constitucional ni legalmente al ser falsas o erróneas.

INFORME CÁMARA DE DIPUTADOS

No pasa inadvertido para esta autoridad, que con el objeto de acreditar sus afirmaciones, la coalición denunciada ofreció como prueba un **informe de la Cámara de Diputados relativo al proceso de discusión de la deuda privada en pública, relacionado con el rescate bancario**, así como cuál fue la participación de Felipe Calderón Hinojosa y el Partido Acción Nacional en dicho proceso.

Así, en uso de sus facultades investigadoras, mediante los oficios números SCG/16678/2008 y SCG/2475/2008, ambos signados por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General de este Instituto, se solicitó al órgano legislativo la información referida en el párrafo que antecede.

En respuesta al pedimento anterior, el Lic. Juan Alberto Galván Trejo, Director General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados presentó la siguiente información:

“ ...

Al respecto, y estando dentro del plazo concedido, me permito acompañar los siguientes ejemplares debidamente certificados del Diario de los Debates de este órgano legislativo, los cuales, de conformidad con el artículo 133, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son el órgano oficial de la Cámara de Diputados:

1.- 26 de marzo de 1998, páginas 221 a 271.

- 2.- 31 de marzo de 1998, páginas 388 a 420.*
- 3.- 19 de noviembre de 1998, páginas 2952 a 2983.*
- 4.- 12 de diciembre de 1988, páginas 3922 a 4004.*
- 5.- 23 de diciembre de 1988, páginas 4188 a 4191.*

En este tenor, del análisis a las documentales públicas que presentó el órgano legislativo en cuestión, no se desprende algún elemento a través del cual se pueda colegir que el C. Felipe Calderón haya sido el responsable de la suscripción o aprobación del FOBAPROA y que dicho fideicomiso constituya una acción fraudulenta como se presenta en el mensaje objeto del presente procedimiento.

En efecto, las constancias del Diario de Debates de la Cámara de Diputados, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, hacen constar la presentación de diversos proyectos en materia bancaria por parte del C. Ernesto Zedillo Ponce de León, en aquel tiempo Titular del Ejecutivo Federal, sin que sea posible advertir la participación del C. Felipe Calderón Hinojosa en la discusión de los mismos, pues sólo se presentaron las iniciativas de ley propuestas por el Presidente de la República en uso de su facultad reglamentaria, sin que de dicho acto sea posible desprender que el citado ex candidato haya intervenido en las mismas.

De igual forma, las constancias del Diario de Debates de la Cámara de Diputados, de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y ocho, hacen constar la presentación de la iniciativa de un decreto para la expedición de la Ley Federal del Fondo de Garantías de Depósitos, así como para la reforma y adición a diversas leyes bancarias por parte del Ejecutivo Federal, dándose cuenta de la intervención de algunos legisladores en la discusión; sin embargo, de su análisis no es posible advertir alguna intervención del C. Felipe Calderón Hinojosa.

En relación con las constancias del Diario de Debates de la Cámara de Diputados, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se hace constar la presentación de la iniciativa de la Ley Para la Protección del Ahorro Bancario por parte del Diputado Fauzi Handam Amad, en aquel tiempo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin embargo, del texto de dicha iniciativa no es posible advertir la participación del C. Felipe Calderón Hinojosa en la suscripción de la misma.

Por lo que respecta al Diario de Debates de la Cámara de Diputados de fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se da cuenta de la participación de diversos legisladores integrantes de distintos grupos

parlamentario en la discusión y aprobación de la Ley Para la Protección del Ahorro Bancario, así como de otras disposiciones en materia bancaria, sin embargo, la autoridad de conocimiento no advierte la participación del C. Felipe Calderón Hinojosa en dicha discusión y votación.

Por último, en la sesión celebrada el día trece de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que se hizo constar en el Diario de Debates del Congreso de la Unión se desprende la participación de diversos congresistas en la discusión y aprobación de algunas leyes vinculadas a distintas materias, sin embargo, no existe algún elemento que permita desprender la intervención del C. Felipe Calderón Hinojosa en dicha asamblea, y en consecuencia, que haya participado en la suscripción o aprobación del Fobaproa en los términos que difunde la coalición denunciada en el promocional de mérito.

REVISTA PROCESO

Asimismo, ofreció como prueba el *“Semanario de Información y análisis, Proceso”*, número 1544, de fecha cuatro de junio de dos mil seis”, publicación en la que presuntamente apareció un reportaje intitulado: *“La impunidad”*, artículo en el cual se cuestionaba la posición asumida por el Partido Acción Nacional en relación con el tema del Fobaproa, y en el que además, a manera de ejemplo, se le atribuía una declaración al C. Fauzi Hamdam, militante de dicho instituto político, a través de la cual hacía alusión al Fobaproa como un fraude.

En esta tesitura, en uso de sus facultades investigadoras, este órgano resolutor requirió a la publicación referida en el párrafo que antecede con el objeto de que precisara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se arribó al conocimiento de los hechos que se describen en el reportaje de referencia.

En respuesta al pedimento anterior, el C. Rafael Rodríguez Castañeda, Director del *“Semanario de Información y análisis, Proceso”*, informó lo siguiente:

“...

Al revisar en la hemeroteca de este semanario, se localizó un reportaje titulado ‘La impunidad’, publicado en la edición de proceso 1544, la cual circuló a partir del 4 de junio de 2006 y firmada por el reportero Álvaro Delgado.

Atendiendo a su requerimiento sobre las circunstancias de modo tiempo y lugar que dieron sustento a dicho trabajo periodístico, me permito informarle que Proceso no cuenta con mayor información que la ya plasmada en el texto del reportaje.”

Como se observa, la publicación en cuestión no aportó mayores datos en relación con las circunstancias en que arribó al conocimiento de los hechos presentados en el reportaje de mérito; no obstante, la autoridad de conocimiento estima que con independencia de que el C. Fauzi Hamdam haya emitido algún pronunciamiento relacionado con el Fobaproa en los términos a que hace referencia la coalición denunciada, dicha circunstancia no acredita que el C. Felipe Calderón Hinojosa haya participado en la comisión de una acción fraudulenta o contraria a la verdad, pues como hemos expuesto en párrafos anteriores, no existe algún elemento a través del cual se pueda considerar que el citado fideicomiso sea producto de una acción fraudulenta o haya tenido como consecuencias de la misma naturaleza, máxime que no existe algún pronunciamiento de alguna autoridad competente que haya realizado la calificación de dicho acontecimiento.

Lo anterior guarda consistencia con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP- RAP- 049/2006**, misma que en la parte conducente determinó lo siguiente:

(...)

*También, es **inoperante** el motivo de disenso conforme con el cual un amplio sector de la población, según la coalición recurrente, ha calificado a las operaciones relacionadas con el asunto denominado ‘FOBAPROA’ como un ‘fraude’ y, al respecto, aporta como prueba un reportaje aparecido en el semanario Proceso, número 1544, de cuatro de junio de dos mil seis, **ya que, como se anticipó, la calificación jurídica de un determinado hecho como delito de fraude es el resultado de una sentencia irrevocable dictada por un órgano jurisdiccional competente.***

(...)

PUBLICACIÓN DENOMINADA “LOS SUSPIRANTES; LOS PRECANDIATIOS DE CARNE Y HUESO”

De la misma forma, la coalición denunciada ofreció como prueba el libro intitulado: “Los Suspirantes; los Precandidatos de Carne y Hueso”, del autor Jorge Zepeda Patersson, publicado por Editorial Planeta, en julio de dos mil cinco, en el que aparece un reportaje en que el que se atribuye al C. Felipe Calderón Hinojosa una declaración relacionada con el tema del Fobaproa.

Al respecto, conviene reproducir el texto de la publicación de mérito, mismo que en la parte conducente dice lo siguiente:

**“FELIPE CALDERÓN
EL PRECOZ**

En los 10 años que trabajó con él, Jordi Herrera no recuerda discusión más acalorada de Felipe Calderón Hinojosa, a la sazón su jefe y presidente del Comité ejecutivo nacional del PAN. De un lado de la línea telefónica estaba él, del otro Guillermo Ortiz, desde entonces gobernador del Banco de México. El tema: Fobapropa, Felipe, como le llama casi todo el mundo, tenía 36 años y sabía que si no ayudaba al PRI a dar salida legal a los pasivos por 70 mil millones de dólares que había costado el rescate financiero y bancario, una enorme crisis azotaría a México. Los priistas no eran mayoría en la Cámara de diputados desde el año anterior, 1997, y los legisladores panistas darían el voto aq cambio, entre otras condiciones, de la cabeza de un ‘responsable’, cuya identidad no surgió del CEN blanquiazul, sino de la bancada de San Lázaro: querían que cayera Ortiz, quien desde la Secretaría de hacienda había implementado el Fobaproa. Por eso discutían ese día.

‘Yo llegué a un acuerdo con Ernesto Zedillo. Él le pediría la renuncia a Guillermo Ortiz, incluso me preguntó si aceptaba que lo nombrara secretario de Comercio. Empecé a operar ese acuerdo, hablé con Fox y con otros gobernadores que entonces estaban en ejercicio, así como con los coordinadores (legislativos). A la semana, Zedillo me citó otra vez, me dijo que estaba muy apenado, que no iba a poder cumplir lo que habíamos dicho, que había hablado con Guillermo Ortiz, que él no quería renunciar’, relata el hoy precandidato a Los Pinos.

-Pues es su problema, presidente, no el mío- comentó Calderón en la conversación con el entonces jefe del Ejecutivo.

-Compréndame- pidió Zedillo.

-A mí no me venga con ese cuento- repuso el panista, según su propio relato.

-Pero, ¿qué opina?- exploró el presidente.

-Opino lo siguiente: como mexicano, me avergüenza tener un presidente sin palabra, con permiso -espetó Calderón, quien nunca más hablaría con Zedillo mientras éste fue presidente.

Felipe dejó de dialogar con Zedillo pero no de negociar: 'cuiden el país y cuiden al partido' fue la instrucción que dio a quienes le representaban en las discusiones con la Presidencia. Además de las ríspidas llamadas Ortiz, el presidente blanquiazul recibía presiones de empresarios y banqueros. Tras 'momentos profundamente duros' –recuerda Jordi Herrera, entonces secretario particular de Calderón- y sin la caída de ningún 'responsable', Felipe finalmente operó el apoyo de su partido para la creación del Instituto de protección al ahorro bancario, sustituto del Fobaproa aprobado en enero de 1999.

(...)

En este sentido, del análisis al artículo de mérito, la autoridad de conocimiento advierte que si bien el autor del reportaje hace referencia a una presunta llamada telefónica entre el C. Felipe Calderón Hinojosa y el C. Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces Titular del Ejecutivo Federal, lo cierto es que del texto de la misma no es posible desprender algún elemento que permita desprender que el citado ex candidato presidencial haya participado en la aprobación del Fobaproa, y menos aun, que dicha conducta constituya un fraude.

Efectivamente, las afirmaciones contenidas en el artículo de mérito dan cuenta de una presunta llamada telefónica entre los personajes referidos en el párrafo que antecede, a partir de la cual, el autor del texto infiere que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó en el rescate financiero con el objeto de evitar una crisis económica al país.

En tales circunstancias, la documental privada aportada por el quejoso resulta inconducente para acreditar que el multicitado ex candidato participó en una conducta fraudulenta, pues en todo caso, las aseveraciones que en ella se contienen devienen de la opinión personal del autor del artículo.

PUBLICACIÓN EN “LA JORNADA”

Asimismo, la coalición denunciada ofreció como prueba la nota periodística intitulada: “Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona” publicada en el periódico “La Jornada, el día seis de junio de dos mil seis”.

Así, con el objeto de conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se arribó al conocimiento de los hechos que se dan cuenta en la nota periodística antes referida, se requirió al Presidente y/o Director General de la publicación de mérito, a efecto de que proporcionara la información en cuestión.

En respuesta al pedimento anterior, el Lic. Edmundo Mejía Romero, representante de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., Editorial del periódico “La Jornada” informó lo siguiente:

“Vista su solicitud contenida en el oficio SCG/1676/2008, en el cual solicita cierta información que fue publicada en el periódico que represento y en virtud de que la misma se encuentra amparado por nuestra Constitución, Tratados internacionales y legislación federal, consideramos necesario realizar las siguientes observaciones.

La labor periodística no puede estar sujeta a la determinación de una Autoridad, ya que la misma no sólo se circunscribe a lo escrito o publicado, sino son todos los datos, documentos y actos que hacen posible la publicación. Es así, que cuando una autoridad pretende determinar, sin criterio y fundamentos legales, si una información es parte de una labor periodística o no, se considera una censura; lo que está proscrito en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dada la nesciencia de su parte en el tema, me permito recordarle que México en cumplimiento al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y al artículo 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108° periodo de sesiones; ajustó su legislación a efecto de salvaguardar las fuentes de los periodistas, así como todos los apuntes, notas o documentos que hubieses obtenido con la

finalidad de informar. Tanto es así, que los legisladores en una minuta, que ulteriormente fue votada, aprobada y sancionada, crearon el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

La ratio legis del decreto que adiciona el artículo 243 Bis se desprende del trabajo legislativo que para mayor abundamiento y comprensión considero necesario transcribir.-

‘Primera.- *La Minuta en estudio propone la adición de un artículo 243 Bis, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como reformas y adiciones a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, con el objeto de:*

Establecer la reserva de información y el secreto profesional, de periodistas abogados, consultores médicos o ministros de culto, toda vez que por la actividad que desempeña, pueden tener acceso a información, datos o conocimiento que, en ocasiones, puede afectar a otras personas. Para que, en caso de ser citados por alguna autoridad, no puedan ser obligados a declarar sobre la información que posean.

Tipificar la conducta del servidor público que obligue a declarar a alguno de los profesionistas citados, respecto a la información obtenida con el desempeño de su actividad, en contra de su voluntad o empleando cualquier medio ilícito.

Segunda.- *Para sustentar las reformas propuestas, se exponen en la Minuta las siguientes consideraciones:*

El derecho a la información, constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades que permite, también, garantizar el ejercicio de los demás derechos inherentes a las personas.

La Colegisladora expresa, que es su preocupación que el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, periodismo, el ministerio de cultos, el desempeño de algunos empleos o cargos públicos, cuenten con bases legales suficientes para que se lleven a cabo de una manera adecuada y se

desarrollen, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Se considera en la Minuta, que el secreto profesional y la reserva de información, son dos instituciones que garantizan el derecho de las personas que desempeñen cualquiera de las actividades descritas, a no revelar información que con motivo de éstas, les sea proporcionada.

Por lo anterior, las Comisiones Dictaminadoras del senado, consideran que el derecho a no revelar información, se encuentra íntimamente relacionado con la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el supuesto que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Además, de acuerdo con la Colegisladora, éste derecho está vinculado con la libertad de imprenta, consignada en el artículo 7° de nuestra Carta Magna, libertad que no tendrá más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Asimismo, en la Minuta se recuerda que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales, en los cuales se compromete a garantizar la libertad de expresión, de imprenta e, implícitamente, el derecho de aquellas personas que obtienen alguna información con motivo del desempeño de su actividad, a no ser obligadas a declarar,

En este sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por al Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108° periodo de sesiones, en su artículo 8, expresa:

‘Todo comunicador social tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.’

En el mismo sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, adoptada por la Organización de Estados Americanos, el 22 de noviembre de 1969, establece:

'Artículo 13. (Se transcribe)

Asimismo, el secreto profesional de los periodistas fue identificado en 1974, por el Consejo de Europa, como 'el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales'.

Por estos motivos, la Colegisladora reconoce que los compromisos establecidos en la Declaración de Principios y Convención citados, deben ser incorporados en los ordenamientos penales, tanto subjetivo como adjetivo, para dar lugar a un marco eficaz de protección. Es por ello, que la Minuta aprobada en el Senado otorga la facultad a los profesionales, periodista o ministros de algún culto, de abstenerse a declarar si lo desean como un beneficio procesal y tipificar como la conducta que implique la inobservancia de su voluntad de declarar o no.

A partir de lo anterior, la Minuta aprobada por la Colegisladora contempla la adicción del artículo 243 Bis, al Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de establecer el secreto profesional y la reserva de información, en los siguientes términos:

'Artículo 243 Bis. (Se transcribe)'

En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o confesión, se harán constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio.

La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben guardar los servidores públicos, se harán del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.

Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicará las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se la aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento.'

Asimismo, para dar congruencia a la misma se plantean reformas y adiciones a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, en los siguientes términos:

'Artículo 215.- (Se transcribe)'

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracciones VI a IX, XIII y XIV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destituciones e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

'Artículo 225.- (Se transcribe)'

Es así, que el trabajo legislativo mexicano culminó con la creación del artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que:

'No están obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder:

I. Los abogados, consultores técnicos y los notorios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión;

II. Los ministros de cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio que presten;

III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como

información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado;

IV. Las personas o servidores públicos que desempeñen cualquier otro empleo, cargo oficio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de guardar reservar o secreto profesional, y

V. Los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos, respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes, que conozcan con motivo de su ejercicio profesional.

En caso de que alguna o algunas de las personas comprendidas en las fracciones anteriores manifiesten su deseo de declarar y cuenten con el consentimiento expreso de quien les confió el secreto, información o confesión, se hará constar dicha circunstancia y se recibirá su declaración o testimonio.

La reserva de información que, por disposición de la propia ley, deben guardar los servidores públicos, se harán del conocimiento de la autoridad que requiera la declaración o testimonio y, en todo caso, se estará a lo supuesto en la ley que rija las facultades del servidor público correspondiente.

Al servidor público que viole lo dispuesto en este artículo, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 215 del Código Penal Federal, pero si el delito es cometido contra la administración de justicia, se le aplicarán las penas a que se refiere el artículo 225 del mismo ordenamiento'

Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. (CIDH, OC-5/85, párrafo 39). Asimismo, sobre la censura previa, la Corte Interamericana ha sostenido que produce:

'una suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones, o noticias. Esto

constituye una violación radical tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien formados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática’.

En este sentido, su apercibimiento consistente en la aplicación de una sanción por la omisión de una infracción, conculca directamente el principio 7° de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ya que esa actividad puede generar autocensura.

La posibilidad de sanciones por informar sobre el tema que, con posterioridad y gracias al debate libre, podría estar sujeto a una investigación, conduce a la posible autocensura de los informantes para evitar sanciones, y al consecuente perjuicio de todos los ciudadanos que no podrán beneficiarse del intercambio de ideas.

La Corte Interamericana sostuvo (CIDH, OC-5-85, párrafo 33) al respecto que las dos dimensiones de la libertad de expresión, individual y colectiva, deben ser garantizadas simultáneamente. El condicionamiento a la información que puede recibir la sociedad a través de los medios de comunicación impide el flujo de información oportuna, disminuyendo la capacidad de la sociedad de participación informada.

Por consiguiente, no se podría considerar que en México se respetan y garantizan simultáneamente las dos dimensiones de la libertad de expresión, individual y colectiva, si por un lado aquél genera autocensura al investigar la información y hecho que por la labor periodística se haya obtenido.

A su vez, su petición es contraria al 8° principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ya que pretende que revele información que se encuentra protegida por la libertad de expresión.

Según la interpretación que se le debe dar a los principios sobre la libertad de expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todo comunicador social tiene derecho

a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.

Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a revelar las fuentes de información como así también el producto de sus investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como parte de su labor de investigación.

Una de las bases primarias del derecho a la reserva se constituye sobre el sustento de que el periodista, en su labor de brindar información a las personas y satisfacer el derecho de la mismas a recibir información, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse.

Es así que su actuar es violatorio de los artículos 6 y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de los principios de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por consiguiente, desde este momento le manifestamos la intención de esta Casa Editorial de negarnos a proporcionar cualquier información solicitada, pues la misma se encuentra protegida por nuestro orden jurídico.

Como se aprecia, el periódico "La Jornada" hizo del conocimiento de esta autoridad su negativa a proporcionar información relacionada con las circunstancias particulares en que arribó al conocimiento de los hechos de los que se da cuenta en las citadas notas periodísticas, en virtud del resguardo del que es objeto el secreto profesional de los periodistas, lo que imposibilitó a esta autoridad conocer la certeza de las aseveraciones que en dichas notas se consigna.

No obstante, en complemento a la diligencia antes citada, la autoridad de conocimiento determinó requerir al C. Gabriel Reyes Orona con el objeto de que ratificara las declaraciones que se le atribuyen en la nota periodística referida en el

presente apartado, sin embargo, el ciudadano en cuestión omitió dar respuesta al pedimento en cuestión.

En tales circunstancias, toda vez que de las diligencias de investigación implementadas por esta autoridad, relacionadas con la consabida nota periodística no se obtuvo algún elemento que permitiera colegir que los hechos de que se da cuenta en la misma son ciertos, resulta imposible desprender elemento alguno tendente a acreditar las aseveraciones de la coalición denunciada.

Por último, la coalición denunciada ofreció las pruebas que obran en el procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, mismo que se encuentra en los archivos de esta Institución, por lo que esta autoridad procede a realizar la valoración de las mismas al tenor de las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la impresión de la página de Internet <http://www.pan.org.mx/?P=131&ArtOrder=ReadArticle=37938>, documental privada que contiene la versión estenográfica de la presunta conferencia de prensa ofrecida por el C. Felipe Calderón Hinojosa, entonces Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, celebrada el día veintitrés de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que el referido ciudadano realizó declaraciones alusivas a diversos temas, entre otras, al asunto del Fobaproa, mismas que en la parte conducente a continuación se transcriben:

“...Aquí hay que abundar en este punto, y lo voy a hacer. El gobierno de esta administración al que pertenece Gurría, Ortiz, Zedillo, es responsable del enorme boquete económico que se le está dejando al país con el tema del rescate bancario. Es cierto, no es el único responsable porque este problema deriva ya de administraciones anteriores pero han sido los errores, ineficiencias y las torpezas en el manejo de la problemática bancaria que ha enfrentado este sexenio, los que han causado el mayor daño económico en esta materia.

...

RESPUESTA: Se los legisladores están trabajando en este punto, sin embargo podemos adelantar que, a partir de que numerosas empresas y empresarios que poseen además los créditos más voluminosos cubiertos o rescatados por

FOBAPROA, al mismo tiempo fueron donadores de las campañas del PRI, de las campañas locales, como el caso de Madrazo o de la de Colosio o de la de Zedillo o la de muchas campañas del partido oficial, se hace obligatorio por el bien de la nación, que se transparenten los ingresos recibidos por esas campañas y se evite que el pueblo de México, para colmo, no solo tenga que soportar al PRI gobernando, sino que tenga que pagar a través de FOBAPROA, el financiamiento de tales campañas. A mí sí me parece imprescindible que, bueno, en el caso de Cabal, desde luego, que es un importante donador del PRI en Tabasco y tal vez a nivel nacional, seguramente de Isidoro Rodríguez, seguramente de muchos de quienes están en capilla por sus operaciones irregulares; De Prevosin, por ejemplo, que son donadores del PRI, tengan que transparentar esta relación económica entre su patrimonio, rescatado ahora por FOBAPROA y el patrimonio con el cual el PRI ha financiado sus campañas electorales.

...Muchos de estos temas, específicamente el caso de FOBAPROA, requieren una cantidad de información, de análisis, que difícilmente puede procesarse de manera suficiente y bastante para que el propio, para que se tenga una información crucial, decisiva para quien vaya a darle una decisión final a este asunto, me parece que son temas que requiere que se aborde fundamentalmente desde la perspectiva del órgano legítimo constituido que es la Cámara...-RESPUESTA: A mí me parece que lo que está prevaleciendo es una pugna entre el PRI y el PRD de soluciones extremas y que pueden ser igualmente dañinas. Nosotros seguimos trabajando sobre un tema que es complejo y me parece que la primera falsedad es suponer que esto tiene soluciones sencillas. Se requieren soluciones complejas y diferenciadas, distintos a un sí o a un no mecánico absoluto y en general respecto del FOBAPROA.

...Yo no coincido con el Secretario de Hacienda, por ejemplo, en que si no se aprueba FOBAPROA vendrá la crisis..."

Como se observa, si bien el C. Felipe Calderón Hinojosa realiza diversos pronunciamientos en relación al tema del Fobaproa, lo cierto es que la finalidad de

los mismos se encamina a dar a conocer a los entrevistadores la posición del Partido Acción Nacional en relación con la operación de dicho fideicomiso, manifestando expresamente que el órgano competente para su resolución es la Cámara de Diputados.

Por su parte, la documental privada consistente en copia simple de la nota periodística intitulada: *“Ríspido debate entre Calderón y López Obrador por el Fobaproa”*, difundida en la página de Internet <http://www.jornada.unam.mx/1998/10/29/rispido.html8>, da cuenta de un presunto debate realizado en un espacio radiofónico entre los CC. Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, relacionado con el tema del Fobaproa, sin embargo, del análisis al texto de la nota se desprende que las afirmaciones en ella contenida son responsabilidad del autor de la nota, por lo que no es posible desprender algún dato, a través del cual se demuestre que el ex citado candidato del Partido Acción Nacional participó en las conductas que la coalición denunciada le atribuye en los promocionales de mérito.

De la misma forma, la coalición denunciada ofreció como prueba la versión estenográfica de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión contenida en la página de Internet http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&tipo=P&a=2006&m=05&d=24, en la que da cuenta de la intervención del C. Gerardo Buganza Salmerón, Senador de la República haciendo diversos pronunciamientos relacionados con el tema del rescate bancario.

Al respecto, conviene reproducir la parte conducente de las intervenciones del legislador en cuestión, mismas que son del siguiente tenor:

-El C. SENADOR GERARDO BUGANZA SALMERÓN: Vengo aquí, simplemente, a aclarar dos cosas.

Cuando se habla de la resolución o de la sentencia que se ha recibido por parte de la autoridad competente, para retirar un anuncio televisivo de Acción Nacional, con relación al candidato del PRD.

...

Y la segunda es con relación al Fobaproa. Felipe Calderón, era, efectivamente el presidente del partido en ese momento. Su servidor era diputado, y aquí y allá, hay un sistema

parlamentario, donde toso discutimos los problemas del país. Nosostros no obedecemos, ni nos manda nadie.

Y quiero especificarle, que independientemente de esa observación, diputado, el Fobaproa, estuvo de acuerdo con logra el rescate financiero del país.

Felipe Calderón, los legisladores del PAN, los legisladores del PRI, de manera responsable vimos la manera de rescatar al país de la mayor crisis financiera a que habíamos estado sometidos en toda nuestra historia.

Pero nunca le pueda aceptar que Felipe Calderón aprobó el Fobaproa.

Para empezar fuimos los legisladores, repito del PAN y del PRI, quien responsablemente construyó una alternativa para tener el rescate financiero del país, para rescatar a todos los que menos tenían, darle oportunidad de trabajo a millones de mexicanos, y darle una oportunidad de trabajo y crecimiento económico y desarrollo, que nos permitiera tener nuevos horizontes...

Como se observa, el legislador del Partido Acción Nacional refiere expresamente que el C. Felipe Calderón Hinojosa no aprobó el FOBAPROA, sino que dicha acción fue responsabilidad de los miembros del Poder Legislativo con el objeto de lograr el rescate financiero del país.

A su vez, la documental privada consistente en copia simple de la nota periodística intitulada: **“Ocho años después Felipe sigue sin cumplir lo que prometió”**, publicada en la página de Internet <http://www.jornada.unam.mx/imprimir.php?fecha=20060418¬a=036o1eco.php&seccion=nota> el día dieciocho de abril de dos mil seis, da cuenta de diversos acontecimientos que se presentaron en torno a la “aprobación” del Fobaproa, en los que si bien se hace referencia a las acciones que presuntamente asumió el C. Felipe Calderón Hinojosa en torno a dicho tema, lo cierto es que no existe algún elemento del cual se pueda desprender que el citado personaje haya sido el responsable de participar en conductas contrarias a la ley o la verdad, como lo pretende la coalición denunciada, toda vez que dicho artículo se basa en la opinión del redactor de la nota.

Por su parte, la documental privada consistente en copia simple de las notas periodísticas intituladas: *“Acción Nacional gastó ya \$4 millones para limpiar su imagen sobre el Fobaproa”*, *“El nuevo instituto saneará Atlántico, Promex y Bancrecer con recursos públicos”* y *“Se cerró la herida con el acuerdo: Acción Nacional”*, difundidas en las páginas de Internet <http://www.jornada.unam.mx/1998/12/15/accion.html>, <http://www.jornada.unam.mx/1998/12/13/se.html> y <http://www.jornada.unam.mx/1998/12/14/se.html>, si bien dan cuenta de acontecimientos relacionados con el tema del FOBAPROA, así como de presuntas declaraciones de distintos personajes en alusión a dicho tema, e inclusive algunas que se atribuyen al C. Felipe Calderón Hinojosa, lo cierto es que de las mismas no es posible desprender que el citado ex candidato haya sido el responsable de la aprobación de dicho fondo bancario, y que además haya participado en diversas conductas deshonestas o contrarias a la ley como lo aseveran los consabidos promocionales.

Asimismo, la coalición denunciada ofreció un disco compacto que presuntamente contiene el audio del programa radiofónico “Radio Red” en el que participaron los CC. Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador abordando el tema del Fobaproa, transmitido el día veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, mismo que en la parte conducente presenta el siguiente contenido:

“Voz en off 1.- ‘Mesa política de Monitor.’

Voz en off 2.- ‘Para conversar acerca de que pasa entre el PRD y el PAN hoy por hoy, se encuentra con ustedes el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del PRD y el Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, dirigente nacional del PAN.’

Voz en off 3.- ‘Ocho con veintiún minutos, son las ocho con veintiún minutos, saludamos al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, licenciado buenos días.’

FCH.- ‘Muy buenos días Don José.’

Voz en off 3.- ‘Bienvenido a nuestro estudio, también saludamos al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, licenciado buenos días.’

AMLO.- *‘Muy buenos días Don José.’*

Voz en off 3.- *‘Bueno primero gracias por haber aceptado estar nuevamente en esta mesa ambos...’*

FCH.- *‘Bueno lo primero es, es cierto nosotros estamos trabajando muy fuertemente por encontrar una solución que sea justa y que sea transparente a un problema muy grave que esta afectando al país, nosotros percibimos que está en riesgo el futuro de México y que debido a la crisis causada por el gobierno este problema del sistema financiero y bancario puede poner, puede llevar al fracaso totalmente el futuro y hemos venido trabajando sobre una propuesta nuestra que hemos preparado con mucho cuidado...nosotros no estamos aceptando ni vamos a aceptar la propuesta de Zedillo, no vamos a aceptar ni estamos aceptando el FOBAPROA y la conversión a deuda pública...’*

Voz en off 3.- *‘Ahora licenciado López Obrador de lo que nos acaba de comentar Felipe Calderón, estos seis puntos muy concretos, hay diferencias importantes con la posición de su partido, del PRD.’*

AMLO.- *‘Mire si porque consideramos en que hay que proteger al ahorro, que hay que apoyar a los pequeños deudores, las diferencias están básicamente en que nosotros estamos demandando el castigo a los responsables del quebranto financiero...’*

FCH.- *‘Bueno la verdad es que no hay ninguna diferencia Don José y nunca la ha habido, digo esto es totalmente absurdo que queremos resolver un problema sin exigir responsables... en total tú propuesta, quejándote de esto que dizque van a subir las medicinas y algo, el hambre de la población y todo, algo muy dramático, pero tú propuesta vale cien mil millones de pesos más que la de Zedillo Andrés Manuel, entonces...’*

AMLO.- *No, no te refugies en los argumentos técnicos financieros...ustedes acordaron con el gobierno resolver el*

asunto del FOBAPROA sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías.'

Voz en off 3.- '¿es cierto eso?'

AMLO.- 'ustedes van a votar'

FCH.- 'yo te exijo aquí y ahora Andrés Manuel'

AMLO.- 'permíteme, ustedes van a votar en'

FCH.- 'que des a conocer ese acuerdo y digas que pruebas tienes para ello.'

AMLO.- 'no, ahí esta en el documento, es público'

FCH.- 'no señor, esto no es un acuerdo en secreto y es, son elementos comunes que están sujetos a la ratificación de los grupos y esto es público.'

AMLO.- 'ah, vamos a ver si sus diputados van a votar eso el traslado de los costos al pueblo.'

FCH.- 'sí lo vamos a ver, vamos a ver también, vamos a ver eh, el punto este en concreto de lo que estas diciendo.'

AMLO.- 'si en concreto'

FCH.- 'porque me parece que estas diciendo.'

AMLO.- 'no en concreto, ya estas hablando de liberar recursos fiscales para pagar intereses por el quebranto del FOBAPROA.'

FCH.- 'el que esta hablando de librar cien mil millones de pesos más que la propuesta de Zedillo eres tú y aquí en la misma propuesta hablas.'

AMLO.- 'esa propuesta no fue aceptada por el gobierno porque parte de un principio, parte de dos principios...en lo que no hay coincidencia y es lo central, es que se apruebe la legalización'

de las operaciones del FOBAPROA en un dictamen que va a enviar el gobierno y que este, ojala y me equivoque, van a votar los diputados del PAN, alo mejor no todos, y del PRI.

...

FCH.-‘ mira José, nosotros vamos a votar nuestra propuesta...yo creo que aquí lo que hay en el fondo es una actitud de intransigencia y de no disponibilidad de diálogo...yo he demostrado a lo largo de este programa que las imputaciones que se hacen al PAN son falsas, que los acuerdos que hemos tenido son a la luz pública, que nosotros no estamos consintiendo ni la ilegalidad ni las irregularidades, que estamos exigiendo el castigo a los responsables...lo que si no puedo aceptar son afirmaciones, calumnias sobre el PAN.

Voz en off 3.- ‘pues gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Nacional del PRD y al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Nacional del PAN, que les vaya bien, buenos días.”

Como se aprecia, la prueba técnica ofrecida por la coalición denunciada contiene las expresiones que presuntamente fueron emitidas por los personajes referidos en los párrafos precedentes, sin embargo, aun cuando algunas de las frases en cuestión hayan sido emitidas por el C. Felipe Calderón Hinojosa, lo cierto es que no existe algún elemento a través del cual se pueda colegir que el ciudadano en cuestión fue el responsable de la “*firma del fobaproa*”, ni que haya participado en diversas conductas delictivas, pues sólo se trata de puntos de vista en relación con uno de los temas de interés nacional.

Bajo estas premisas, las pruebas aportadas por la coalición denunciada tendentes a acreditar que los consabidos promocionales se basan en hechos objetivos, resultan inoperantes, pues de ninguna forma demuestran, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBABROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje haya encubierto conductas delictivas o contrarias a la ley, y finalmente, que con las conductas antes referidas, el C. Felipe Calderón Hinojosa haya causado un perjuicio a la población.

Ahora bien, esta autoridad estima que los argumentos sostenidos por la coalición denunciada en el sentido de que los promocionales materia del actual procedimiento guardaban relación con las propuestas de gobierno que se encontraba obligada a difundir dentro del pasado proceso electoral, particularmente en su capítulo relativo a *"POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUITATIVO"*, apartado *"Financiamiento del desarrollo"*, en el que, según la coalición denunciada, se señala: *"Terminar con el compromiso presupuestal que proviene de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorbe una parte sustantiva del PIB"*, resultan infundados en razón de lo siguiente:

En principio conviene recordar que, por regla general, la propaganda electoral debe propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos o coaliciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 182, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin embargo, ello no implica que necesariamente toda la publicidad emitida por los partidos políticos o coaliciones durante las campañas electorales deba ser propositiva, toda vez que en el ejercicio de la garantía de libre manifestación de las ideas o de libertad de expresión que gozan los partidos políticos, también es válida la crítica que contribuya a la formación de una opinión pública libre, plural y tolerante, características de un sistema democrático.

En el caso que nos ocupa, si bien la coalición denunciada vislumbra que el contenido de los mensajes se encontraba vinculado a su propuestas económicas, lo cierto es que las imágenes y frases que ellos expusieron tenían por objeto causar un daño a la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al basarse en hechos no veraces, por lo que rebasaron los márgenes de la sana crítica constructiva en perjuicio de un contrincante electoral rebasando las directrices fundamentalmente contenidas en el artículo 41 de la Constitución Federal y reglamentadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la otrora coalición denunciada, respecto a que el procedimiento administrativo sancionador debe ser más exhaustivo porque podría implicar la imposición de una sanción, cabe señalar que de las constancias que obran en autos, así como de lo precisado en los resultandos que fueron detallados en el presente fallo, se advierte que esta autoridad realizó todas aquellas diligencias necesarias para allegarse de las probanzas adecuadas que permitan efectuar una correcta calificación de la infracción, así como la debida individualización de la sanción que conforme a derecho resulte procedente.

Sobre este particular, cabe decir que con fecha quince de octubre de dos mil ocho, la autoridad de conocimiento notificó a los integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, el acuerdo a través del cual se pusieron a su disposición las actuaciones del presente expediente con el objeto de que manifestaran lo que a su derecho conviniese en relación con las mismas, sin embargo, fueron omisos en la atención al mismo.

Por lo que hace al alegato relativo a que la otrora coalición responsable difundió el promocional denunciado por el Partido Acción Nacional en respuesta a una campaña negra iniciada por el citado partido en contra de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, el mismo es de desestimarse, toda vez que los partidos políticos al ser entidades de interés público se encuentran obligados a conducirse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Federal, así como en la normativa electoral; es por ello, que la circunstancia aludida en modo alguno puede servir de base para eximir a la entonces coalición “Por el Bien de Todos” de la responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en el orden jurídico electoral.

Se estima que la calidad de instituciones de orden público que confiere a los partidos políticos la Constitución General de la República y su coadyuvancia con las funciones político-electorales del Estado, como intermediarios entre éste y la ciudadanía, los obliga a conducirse conforme lo dispuesto en tal cuerpo normativo, así como con lo previsto en las demás leyes electorales, es por esto, que no es dable admitir que una conducta contraventora del orden jurídico electoral sea permitida si el partido político argumenta que la misma se realizó como resultado del quebrantamiento de dicha obligación por parte de otro instituto político.

En ese sentido, cabe recordar que entre las razones que plasmó el legislador federal ordinario en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de 1996 en materia electoral se encontró el argumento de que no sería posible avanzar en la consolidación de un sistema de partidos plural y competitivo si no se garantizaba que los institutos políticos se abstuvieran de proferir expresiones que únicamente atacaran su imagen pública y/o la de sus candidatos, pues de lo contrario el debate de las ideas que postulara cada actor político se convertiría únicamente en ataques que no coadyuvarían a que la ciudadanía pudiera realizar un análisis acerca de las propuestas que en teoría tendrían que ser expuestas por los entes políticos.

En consecuencia, esta autoridad considera que la actuación de los institutos políticos debe dirigirse a cumplir con la función pública que les fue encomendada; el hecho de que según el dicho de la otrora coalición denunciada el Partido Acción Nacional hubiese iniciado una campaña negra en contra de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, no es justificación para que la otrora coalición hubiera ordenado la difusión de un promocional que contenía afirmaciones contraventoras de lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, apartado 2 del código electoral federal, pues en tales preceptos se prohíbe a los partidos políticos el uso de expresiones que impliquen calumnias, diatribas, injurias, difamaciones o que denigren a otros institutos políticos, sus candidatos, ciudadanos o instituciones, sobre todo durante el desarrollo de un proceso electoral, toda vez que como ya se manifestó en líneas precedentes, de conformidad con lo sostenido en la exposición de motivos de la citada reforma de 1996, dicha prohibición se incluyó en la normativa electoral con el fin de que el debate político no se reduzca a simples ataques entre las fuerzas políticas.

En ese sentido, la restricción de referencia también debe ser acogida respecto al contenido de la propaganda política, situación que se justifica en el hecho que durante el tiempo de campañas electorales la participación de los diversos actores políticos y el debate público son mucho más intensos, pero tal situación no justifica que se utilicen expresiones contraventoras de la normativa electoral, como tampoco el hecho de que un partido político supuestamente hubiese infringido primero la norma como en el caso lo señala la entonces coalición denunciada, pues se insiste, el argumento de que la transmisión del anuncio denunciado se hizo en respuesta a la campaña negra iniciada por el Partido Acción Nacional no encuentra justificación, pues invariablemente todos los partidos se encuentran obligados a cumplir con lo dispuesto en el código electoral federal.

Una vez sentado lo anterior, conviene reseñar de forma sucinta, los elementos probatorios antes valorados, mismos que a continuación se detallan:

ELEMENTOS DE PRUEBA

Corren agregados en autos los siguientes elementos probatorios:

- I. El **reconocimiento en la autoría y difusión del promocional que realizó** la coalición denunciada.

- II. **Informe rendido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión**, documental pública con pleno valor probatorio, de cuyo análisis no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.
- III. Respuesta del **“Semanario de Información y análisis, Proceso”**, relacionada con el artículo denominado “La Impunidad” publicado en dicha revista, documental privada de cuyo análisis no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.
- IV. Publicación denominada **“Los Suspirantes; Los Precandidatos de Carne y Hueso”**, documental privada de cuyo estudio no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.
- V. Investigación relacionada con la **nota periodística intitulada: Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona**”, publicada en el periódico “la Jornada”, de la que no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.
- VI. El informe relativo al resultado del **monitoreo de medios que fue remitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto**, documental pública de la cual se desprende, lo siguiente:
- Que el promocional identificado como “Fobaproa 1” (Informativa 1) tuvo en televisión 37 impactos, los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de dos mil seis en el Distrito Federal, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California.
 - Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundido por los canales con las siglas XEW-TV,

XHGC-TV, XHDF-TV, XEQ, XHCCU-TV, XHY-TV, HXQ-TV y XHEX.

- Que el periodo de transmisión del promocional en cuestión en televisión fue del día 16 al 19 de mayo de 2006.
- Que el promocional identificado como “Fobaproa 1” (Informativa 1) tuvo en radio 436 impactos, los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 27 de mayo de dos mil seis en el Distrito Federal, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León.
- Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundido por las frecuencias 102.7, 670 103.5, 107. 5, 1270, 105.1, 94.7, 99.7, 93.3, 97.7, 91.3, 1030, 107.3, 93.7, 1110, 88.1, 92.1, 690, 1150 y 92.1.
- Que el periodo de transmisión del promocional en cuestión en radio fue del día 17 al 27 de mayo de 2006.
- Que el promocional identificado como “Fobaproa 2” (Informativa 1) tuvo en televisión 231 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de mayo de dos mil seis y los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de junio del mismo año, en el Distrito Federal, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo y Baja California.
- Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundido por los canales con las siglas XEW-TV, MPRE2- MCMVS, ZAZ, MCIN2, FSPOTM, XHQ-TV, XEQ, XHY-TV, XHCCU-TV, XHGC-TV, MPREMV, XHDF-TV, HXST-TV, XHEX, XHIJ-TV, TVC, XHILA-TV.
- Que el periodo de transmisión del promocional en cuestión en televisión fue del día 18 al 25 de mayo y de 2 al 12 de junio de 2006.
- Que el promocional identificado como “Fobaproa 2” (Informativa 2) tuvo en radio 2691 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de mayo de dos mil seis; 1, 16, y 23 de junio del mismo año, en el Distrito Federal,

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

Baja California, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán.

- Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundido por las frecuencias XHPF-FM (101.9), XHV6-FM (103.3), XHTIM-FM (97.7), XHJC-FM (91.5), XHTY-FM (99.7), XHMMF-FM (92.3), XHMD-FM (104.1), SX50-FM (99.9), (HOO-FM (102.3) XERPL-AM (1270), XHRPL-FM (93.9), XHPQ-FM (97.5), XELEO-AM (1110), XHRED-FM (88.1), XHFAJ-FM (91.3), XERL-FM (97.7), XEJP-FM (93.7) XEQR-AM (1030), XERED-AM (1110), XEQR-FM (107.3), XHFO-FM (92.1), XEJP-AM (1150) XEN-AM (690), XHEXA-FM (104.9), XHMVS-FM (102.5), XEDF-AM (1500), XEDF-FM (104.1), XHBH-FM (98.5), XHMOV-FM (93.9), XEYF-AM (1200), XHUSS-FM (92.3), XEWN-AM (1270), XETOR-AM (670), XHRCA-FM (102.7), XHLTO-FM (93.1) XEGZ-AM (790), XHVOZ-FM (107.5), XHDK-FM (94.7), XHBLO-FM (92.3), XEBA-FM (97.1), XHIM-FM (105.1), XHEM-FM (103.5), XHNZ-FM (107.5), XHNQ-FM (99.3), XHNS-FM (69.9), XHPA-FM (93.7), XHPO-FM (103.9), XHPBA-FM (98.7), XHRP-FM (103.3), XHZM-FM (92.5), XEQT-AM (800), XEFM-AM (1010), XHVE-FM (100.5), XHPS-FM (93.3), XHPB-FM (99.7) XEENO-FM (90.1), XHRJ-FM (92.5), XHZA-FM (101.3), XHEDT-FM (93.3), XHTOM-FM (102.1), XHRQ-FM (97.1), XHMQ-FM (98.7) XEMON-AM (1370), XET-FM (94.1), XHJD-FM (98.9), XHPA6-FM (105.3), XHSP-FM (99.7) XHMRA-FM (99.3), XHMRI-FM (93.7), XHGL-FM (97.7), XEMH-AM (970), XHMH-FM (95.3), XHMYL-FM (92.1), XHTR-FM (92.5), XHLI-FM (98.3), XHKV-FM (88.5), XHJAP-FM (90.9), XHOB-FM (96.1), XHSNP-FM (97.7), XHBM-FM (105.7), XHPM-FM (100.1) XEEX-AM (1230), XHCLI-FM (98.5), XHNW-FM (103.3).
- Que el periodo de transmisión del promocional en cuestión fue del día 18 de mayo al 23 de junio de 2006.

Del análisis a las pruebas que obran en el presente expediente, es válido arribar a la conclusión de que la otrora coalición “Por el Bien de Todos” es la entidad política responsable de la emisión de los promocionales objeto del presente procedimiento, precisando que las pruebas aportadas por la coalición denunciada, de ninguna forma demuestran, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBABROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje haya encubierto conductas delictivas o contrarias a la ley, y finalmente, que con las conductas antes referidas, el C. Felipe Calderón Hinojosa haya causado un perjuicio a la población.

La anterior conclusión, se encuentra fundamentada en una valoración conjunta de los elementos de convicción de los que se allegó esta autoridad, en específico, de las constancias remitidas por la Cámara de Diputados, documentales públicas cuyo valor probatorio es pleno, así como de las pruebas aportadas por el quejoso, atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y la experiencia, tal como lo disponen los artículos 28, párrafo 1, inciso a) y 35, párrafos 1 y 2 del reglamento de la materia, mismos que señalan lo siguiente:

“Artículo 28

1. Serán documentales públicas:

a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

(...)

Artículo 35

1. Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

2. Las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran...”

Así tenemos que, la valoración de las pruebas por este órgano resolutor, se realizó con base en un raciocinio correcto de las circunstancias que operaron al momento en que acontecieron los hechos, valorando en su conjunto los medios probatorios que obran en autos, pues se trata de elementos aislados, de cuya correcta concatenación se posibilita el conocimiento de las condiciones en que tuvieron verificativo los hechos en cuestión.

En este punto es importante destacar, que la información aportada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, respecto de la transmisión de dichos promocionales tiene como sustento el monitoreo de medios que efectuó la empresa IBOPE AGB México S.A. de C.V. por instrucción del Consejo General, en el que se hizo constar el número de repeticiones que fueron detectadas, las fechas, horas, siglas, frecuencia, grupo, entidad, plaza, código del spot-versión, tipo de promocional, duración, partido político o coalición, tipo de elección, candidato y programa.

En este orden de ideas, esta autoridad considera que la difusión de los promocionales de mérito, se tiene por acreditada con base en los resultados del monitoreo televisivo y radiofónico practicado por la empresa IBOPE AGB, México S.A. de C.V., durante el período comprendido del dieciséis de enero al dos de julio de dos mil seis.

En adición a lo anterior, cabe mencionar que la realización del monitoreo en cita, fue adjudicada directamente a IBOPE AGB México, S.A. de C.V., atento a lo señalado en el artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el oficio número DEPPP/3560/2005, signed por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mismo que tuvo por objeto satisfacer la necesidad institucional de monitorear los promocionales alusivos a los candidatos al cargo de Diputados Federales, Senadores y a la Presidencia de la República, transmitidos a través de medios electrónicos durante la etapa del dieciséis de enero al dos de julio de dos mil seis, es decir en el marco del proceso electoral federal 2005-2006, y se formalizó a través del contrato celebrado el treinta y uno de octubre de dos mil cinco.

La característica general de este monitoreo es que fue de carácter muestral, y compiló diariamente las transmisiones de los canales de televisión a nivel nacional (tanto los de sistema abierto como los de índole restringido o por suscripción), revisándose los que fueron difundidos en aquellas ciudades con mayor peso o representatividad en la república mexicana.

En este sentido, cabe señalar que no asiste la razón a la otrora coalición “Por el Bien de Todos” cuando argumenta que el monitoreo al haberse elaborado por un particular, debe valorarse como una documental privada, toda vez que es de recordarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado que los monitoreos constituyen una herramienta técnica que auxilia a las autoridades electorales, para verificar si los partidos políticos han actuado respetando los principios de igualdad y equidad, rectores del sistema comicial mexicano.

El monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, etcétera, objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones al control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales.

En el caso concreto, el monitoreo reportado por IBOPE AGB México, S.A. de C.V., correspondiente al período del dieciséis de enero al dos de julio de dos mil seis, cuenta con un respaldo documental asentando para cada promocional, su fecha y hora de transmisión, las siglas del canal en donde fue difundido, el grupo televisivo al que pertenece, la entidad o plaza donde se transmitió, la versión del promocional, tipo de programa en el que se liberó al espectro radioeléctrico y su duración, entre otros datos.

Dicha metodología permite a esta autoridad contar con elementos suficientes y adecuados para determinar clara y contundentemente, las frecuencias de difusión de tales promocionales y los lugares en los cuales fueron vistos en territorio nacional, documento al que se otorga valor probatorio pleno para tener por acreditada la transmisión de los spots aludidos.

Lo anterior encuentra apoyo en lo sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-179/2005 y su acumulado SUP-JRC-180/2005, a saber:

“El monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, etcétera, objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones al control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales.

En conformidad con el artículo 11, undécimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México tiene a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la fiscalización del financiamiento público y gastos de los partidos políticos.

En el ejercicio de esta actividad el Consejo General del citado instituto se apoya de las comisiones de Fiscalización y de Radiodifusión y Propaganda.

En términos de lo establecido en los artículos 61 y 62 del código electoral local, la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México es el órgano técnico electoral encargado de la revisión de los informes sobre el origen y aplicación de los recursos, que rindan los partidos políticos; para lo cual, cuenta con las atribuciones siguientes: 1) Elaborar lineamientos técnicos (que serán aprobados por el Consejo General) sobre cómo presentar los informes y cómo llevar el registro de los ingresos y egresos, así como la documentación comprobatoria; 2) Previo acuerdo del Consejo General, realizar auditorías (entre ellas de los fondos, fideicomisos y sus rendimientos financieros que tengan los partidos políticos); 3) Revisar y emitir dictámenes respecto de las auditorías practicadas por los partidos políticos, y 4) Las demás que establezca el propio código electoral o las que establezca el Consejo General.

Por su parte, la Comisión de Radiodifusión y Propaganda del multicitado instituto tiene a su cargo, entre otras funciones, acorde con lo dispuesto por los artículos 66 y 162 del código referido, la realización de: 1) monitoreos cuantitativos y cualitativos de medios de comunicación electrónicos e impresos durante el periodo de campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido políticos y 2) monitoreos de la propaganda de partidos políticos colocados en bardas, anuncios espectaculares, postes, unidades de servicio público, y todo

tipo de equipamiento utilizado para difundir mensajes, los cuales en la práctica son conocidos comúnmente como medios alternos.

Estos monitoreos, acorde con lo establecido en el numeral 162 citado tienen como finalidades: a) garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; b) medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y c) apoyar la fiscalización de los partidos para prevenir que se rebasen los topes de campaña. [...]

Acorde con lo dispuesto en los artículos 335, 336, y 337, párrafo primero, fracción II del Código Electoral del Estado de México, los monitoreos referidos sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.”

En consecuencia, se estima que no le asiste la razón a la coalición responsable cuando señala que el monitoreo debe ser valorado como una documental privada, toda vez que, como se explicó en las líneas que anteceden, es una herramienta técnica que permite a esta autoridad contar con los elementos necesarios, para verificar si los partidos políticos se ajustaron a la normatividad electoral. Además, cabe señalar que la manifestación de que cuenta con múltiples inconsistencias es una mera apreciación subjetiva de la coalición, pues de ninguna forma aporta los elementos de prueba que acrediten su dicho.

En ese tenor, esta autoridad tomará en cuenta la información contenida en el reporte de monitoreo de medios en el que se señala que el promocional identificado como “**Fobaproa 1**” tuvo en televisión 37 impactos, los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de dos mil seis, y en radio 436 impactos, los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 27 del mismo mes y año, y que el promocional identificado como “**Fobaproa 2**” tuvo en televisión 231 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo de dos mil seis y los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de junio del mismo año; y en radio 2691 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 de mayo; 1, 16, y 23 de junio de ese mismo año.

Es de destacarse que el procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, base del presente procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, fue resuelto el cuatro de junio de dos mil seis y en dicha fecha se ordenó a la entonces coalición que cesara de inmediato la difusión de los promocionales denunciados; sin embargo, se puede advertir que dicha instrucción no fue cumplida de forma inmediata, toda vez que del informe remitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos

se desprende que los citados promocionales se transmitieron nueve días más, después de la determinación del Consejo General.

No es óbice a lo anterior, que el Partido de la Revolución Democrática haya alegado mediante escrito de fecha treinta de mayo de dos mil seis, que el día veintisiete del mismo mes y año solicitó a las televisoras que los promocionales identificados como “Fobaproa 1” y “Fobaproa 2” se dejaran de transmitir.

Al respecto, cabe precisar que si bien la coalición denunciada aportó en el procedimiento especializado identificado con el número de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, el escrito en el que manifestó que a partir del veintisiete de mayo de dos mil seis, y por instrucciones de la otrora coalición responsable, se ordenó que cesara la transmisión del anuncio denunciado, esta autoridad concluye que no es de acogerse su afirmación porque a dicho instrumento no se acompañaron los escritos mediante los cuales se solicitó a las empresas televisivas o radiales que omitieran su difusión, es decir, no se aportó el acuse de recibo respectivo u otro elemento que genere convicción en esta autoridad, respecto de que efectivamente se hubiera emitido esa instrucción a dichas empresas.

Aunado a lo anterior, con el fin de contar con los elementos necesarios para resolver adecuadamente el presente procedimiento esta autoridad giró oficio al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática con el fin de que remitiera los acuses de los escritos que presentó a las televisoras en donde les giraba la instrucción de que fuera suspendida la transmisión de los promocionales de mérito; sin embargo, dicho instituto político al momento de atender el requerimiento únicamente manifestó que la instrucción se había dado de forma verbal, porque según su dicho esa es la práctica en ese tipo de solicitudes, motivo por el que no podía remitir los acuses que le fueron requeridos.

En esa tesitura, esta autoridad cuenta únicamente con la afirmación del partido en cita, pero la misma no se encuentra robustecida con ningún otro elemento; por el contrario, de la información que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos remitió a la Secretaría y que fue reseñada en párrafos que anteceden, se advierte que el promocional identificado como “Fobaproa 2” fue transmitido en días posteriores a la fecha señalada por el instituto político, toda vez que del resultado del monitoreo de medios efectuado por instrucciones del Consejo General se transmitió en televisión los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo de dos mil seis y los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de junio del mismo año; y en radio 2691

impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 de mayo; 1, 16, y 23 de junio de ese mismo año.

En consecuencia, el anuncio en cita fue difundido nueve días más después de la fecha en que se emitió la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral número CG129/2006, relativa al procedimiento principal, identificado con el número JGE/PE/PAN/CG/006/2006, y dieciséis días más después de la fecha en que según el dicho de la coalición quejosa solicitó a los medios de comunicación el cese de su transmisión.

Una vez sentado lo anterior, esta autoridad considera que cuenta con los elementos necesarios que deben ser valorados al momento de individualizar la sanción correspondiente, toda vez que han quedado acreditadas las fechas y horarios de difusión de los promocionales identificados como “Fobaproa 1” y “Fobaproa 2”.

En mérito de lo expuesto, se propone declarar **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador, por lo que respecta a los hechos del procedimiento principal sintetizados en el inciso **A)** del presente apartado, relativos a los promocionales identificados como Fobaproa 1 (Informativa 1) y Fobaproa 2 (informativa 2).

PRIMER INCIDENTE DE INEJECUCIÓN

5.- Ahora bien, corresponde a esta autoridad entrar al estudio de fondo de los hechos materia del **primer incidente** de inejecución de la resolución recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, reseñados en el apartado **B)** del considerando 4 del presente fallo, consistentes en determinar si el promocional identificado como **“Informativa 9”**, difundido en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” incumplió con lo ordenado por la Constitución Federal, y en específico con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como determinar si el mismo contiene elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro de la resolución recaída al procedimiento principal.

CONTENIDO DEL PROMOCIONAL INFORMATIVA 9

Al respecto, conviene tener presente el contenido del promocional en cuestión, mismo que presenta las siguientes imágenes y expresiones:

En principio, se aprecia sobre un fondo de color blanco la leyenda: *"Informativa # 9"*, en letras rojas, acompañado de una voz en off que dice: *"Informativa nueve"*. Acto seguido se observa un documento en el que se resalta un cuadro sobrepuesto en el que se aprecia una firma en conjunto con la siguiente locución: *"Atentamente, Lic. Roberto Carriedo Rubio. Director Relaciones Laborales. Scotiabank Inverlat S.A"*, mientras la voz en off continúa diciendo: *"Se reveló: la carta firmada que Calderón siempre quiso ocultar."*

En forma inmediata, aparece un segundo cuadro sobrepuesto en el que sobresale el siguiente mensaje: *"Por la presente hacemos constar que el Sr. Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa ingresó a prestar sus servicios a esta institución"*. Conjuntamente con la imagen antes descrita, la voz en off continúa manifestando: *"en la que se comprueba que siendo presidente del PAN era también abogado defensor de Inverlat. 30 mil millones de dólares al FOBAPROA y prometió..."*. Seguida a las frases e imágenes antes detalladas se inserta una imagen de Felipe Calderón Hinojosa señalando lo siguiente: *"Hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA."* En forma inmediata aparecen en escena tres personas abrazadas y con un semblante sonriente.

Posteriormente se observa la efigie de Felipe Calderón Hinojosa, misma que se convierte en un cero en color rojo, imagen en cuya parte superior se aprecia la leyenda *"Manos sucias"*. A la par de las anteriores iconografías la voz en off culmina su mensaje señalando: *"Se robaron el dinero y siguen en la impunidad. Manos Sucias, cero empleos"*.

Por último, en un fondo de color negro se observa la leyenda: *"Candidatos a Senadores de la Coalición Por el Bien de Todos."*

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

Al respecto, conviene precisar que la existencia y contenido del promocional en estudio, no se encuentra sujeto a controversia ni es objeto de prueba, en virtud de que la otrora coalición "Por el Bien de Todos", al contestar el presente procedimiento, reconoce su difusión, por lo que en términos del artículo 25, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título

Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tratarse de un hecho reconocido, no es objeto de prueba, y en consecuencia se debe tener por cierto en cuanto a su existencia.

Sobre este particular, conviene reproducir la contestación que formuló la coalición denunciada al presente procedimiento, misma que en la parte conducente dice lo siguiente:

“ ...

es importante dejar de relieve que no es exacto, como se afirma en la resolución del supuesto incidente de inejecución del procedimiento especializado que ‘dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas contrarias al orden jurídico’; pues lo que se buscaba con dicho promocional es contrastar dos posiciones distintas en un tema de alta relevancia e interés nacional y evidenciar la participación de Felipe Calderón Hinojosa en la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, de la que fue partícipe el entonces candidato presidencial de dicho partido en su carácter de Presidente Nacional y como abogado defensor de una de las instituciones bancarias que a la postre fueron beneficiadas.

(...)

*En el mismo sentido, y para los mismos efectos, debe tenerse en cuenta que la coalición electoral Por el Bien de Todos difundió dicha campaña **en respuesta** a una campaña negra **iniciada** por el Partido Acción Nacional en la que, de manera **totalmente desproporcionada**, se atacó **reiterada y sistemáticamente** a su candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.”*

Para mayor claridad, conviene tener presente, en la parte que interesa, el contenido del dispositivo reglamentario antes invocado:

“Artículo 25

1. Son objetos de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

(...)

Asimismo, es necesario precisar que el contenido del promocional de referencia fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo General de este Instituto, al momento de resolver el primer incidente de inexecución de la resolución recaída al procedimiento especializado identificado con la clave de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, por lo que su existencia y autoría no se encuentra sujeta a controversia.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Una vez detallado el contenido del promocional sujeto a valoración, la autoridad de conocimiento colige que el contenido de las imágenes y afirmaciones expuestas en el mismo, tienen la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa se vale de un doble discurso, en virtud de que, por una parte se manifiesta a favor de una solución favorable con relación al tema del FOBAPROA, y por otra, fue abogado que prestó sus servicios a favor de una institución bancaria que aparentemente fue beneficiada con fondos del Fobaproa, protegiendo, en consecuencia, a los responsables de una conducta que, a su juicio, constituye un robo.

En efecto, el promocional de mérito trasmite a la ciudadanía la idea de que en el tiempo que el citado candidato ostentó el cargo de Presidente del Partido Acción Nacional, a la vez prestó sus servicios laborales dentro de la institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat S.A”, defendiendo los intereses de dicha institución, así como de personas que se robaron dinero a través del Fobaproa y siguen en la impunidad.

En este sentido, resulta atinente precisar de que con el objeto de acreditar que el mensaje del promocional materia del presente incidente se fundó en hechos reales, la coalición denunciada solicitó a esta autoridad realizara un requerimiento a la institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat S.A. con el objeto de acreditar que el C. Felipe Calderón Hinojosa prestó sus servicios en la citada entidad crediticia.

En este sentido, mediante oficio número SCG/1679/2008, la autoridad de conocimiento requirió al Presidente y/o Director General de Scotiabank Inverlat S.A. con el objeto de allegarse de la información de cuenta.

En respuesta al pedimento anterior, la C. Julieta Morales Toledano, representante jurídico del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S.A., dio contestación al requerimiento formulado por esta autoridad, en los siguientes términos:

(...)

Al respecto, en desahogo al requerimiento de referencia, por medio del presente esta Institución les proporciona la información solicitada manifestando que:

De los registros con que cuenta este grupo financiero a la fecha NO se desprende que el C. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA haya prestado sus servicios en periodo alguno al GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT S.A.

(...)

Como se observa, la institución crediticia denominada Scotiabank Inverlat S.A hizo del conocimiento de esta autoridad que dentro de sus registros no existe algún antecedente que permita desprender que el C. Felipe Calderón Hinojosa prestó sus servicios en dicha institución bancaria.

En tales circunstancias, las afirmaciones hechas por la coalición denunciada dentro del promocional en estudio relativas a que existe un documento que acredita que el multicitado candidato prestó sus servicios en la consabida institución bancaria, (mismo que no fue aportado por la coalición denunciada), soportadas en las imágenes que se presentan con el objeto de demostrar la existencia del documento en cuestión, carecen de sustento en un hecho real o al menos no demostrado, pues como se ha referido, la institución financiero negó que el C. Felipe Calderón Hinojosa haya colaborado con la misma.

En este tenor, toda vez que la premisa a partir de la cual la coalición denunciada pretende hacer creer a los receptores del mensaje que el ex candidato a la Presidencia de la República presenta un doble discurso al pronunciarse por una parte a favor de una solución responsable en relación al tema del Fobaproa, y por otra, defender los intereses de una institución bancaria que presuntamente se benefició por dicho fideicomiso (que a juicio de la coalición denunciada es un fraude), es irreal o errónea, y en consecuencia, la conclusión a la que se arriba en el mismo relativa a que protegió a los responsables de una conducta que, a su juicio, constituye un robo, no encuentra sustento en hecho cierto y objetivo.

En este sentido, se estima que el promocional bajo análisis, contraviene lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que como ha quedado expuesto con antelación, las expresiones contenidas en el mismo, constituyen afirmaciones que no se encuentran dentro de los límites establecidos al ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, concretamente por lo que hace a la afirmación *“Se robaron el dinero y siguen en la impunidad”* tienen la finalidad de transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, ciertos hechos consistentes en que el C. Felipe Calderón Hinojosa participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley derivadas de la aprobación del FOBAPROA. En este contexto, se advierte que el promocional que nos ocupa difunde un elemento similar a los que fueron declarados contraventores de las normas electorales en el procedimiento principal.

En tal virtud, esta autoridad estima que el contexto gráfico y lingüístico en que se presenta el promocional de mérito, guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como “Fobaproa # 1 y Fobaproa # 2”, en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación del FOBAPROA, toda vez que de nueva cuenta se vale de expresiones carentes de sustento en un hecho real y objetivo presentando a dicho candidato frente a los receptores de los mensajes como una persona vinculada con la ejecución de conductas fuera de la ley.

En ese mismo sentido, no pasa inadvertida para esta autoridad, la conclusión del promocional, utilizando la frase *“Manos sucias, cero empleos”*, concatenada con los elementos gráficos y lingüísticos expuestos en el promocional de mérito, presentándolo como una persona deshonesto que ha tenido vínculos con conductas contrarias a la ley (“fraude del FOBAPROA” en los promocionales estudiados en el principal y “robo” en este incidente), y que no genera empleos, lo que en la especie no encuentra sustento en hechos veraces o al menos no demostrados.

Sobre este particular, debe decirse que si bien la expresión *“Manos sucias”* no fue valorada individualmente dentro del procedimiento principal, lo cierto es que la misma formó parte una valoración en conjunto de las frases *“con tus manos sucias*

firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia”, “encubriste a los que nos robaron” “y sigues encubriendo a los culpables”, las cuales fueron estimadas por esta autoridad como contraventoras de la normatividad electoral, en virtud de que dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas contrarias al orden jurídico.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la expresión “*Manos sucias*”, se emplea como una conclusión mediante la que se expone al citado candidato como una persona deshonesto vinculado con la comisión de conductas contraventoras de la ley (FOBAPROA), sin que dicha circunstancia se encuentre sustentada en hechos reales o al menos no demostrados.

En tal virtud, la vinculación que hace la coalición denunciada del C. Felipe Calderón Hinojosa con la realización de conductas contrarias a la ley a través de su participación o vinculación con el multicitado fideicomiso, no se encuentra sustentado en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración, por lo que rebasa los límites de la libertad de expresión al exponer una crítica desproporcionada y excesiva que no se encuentra fundada en un hecho real o demostrado.

En conclusión, toda vez que las expresiones referidas en la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, al igual que las que se han analizado en el presente incidente, revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude o robo, es dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis.

Consecuentemente, procede declarar **fundado** el presente incidente, toda vez que el promocional difundido por la Coalición “Por el Bien de Todos”, contiene elementos similares a los que fueron declarados contraventores de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, incumpliendo el punto resolutivo “CUARTO” de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal de fecha cuatro de junio del presente año, por lo que resulta inconcuso que al difundir dichas expresiones incumplió con las prohibiciones decretadas en la resolución en cuestión, lo cual constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del ordenamiento legal antes citado, el cual textualmente prevé:

“Artículo 269.

*Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:
(....)*

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

b) incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral... ”

En este sentido, resulta infundado el argumento expuesto por la coalición denunciada en el sentido de que no existe identidad entre los elementos expuestos en los promocionales materia del procedimiento principal y los contenidos en el promocional identificado como “Informativa 9”, toda vez que del análisis desarrollado en los párrafos que anteceden, es válido arribar a la conclusión de que dicho mensaje sí contiene expresiones que denigraron al C. Felipe Calderón Hinojosa, a través de elementos que fueron prohibidos por el resolutivo CUARTO de la resolución recaída al procedimiento especializado principal identificado con el número **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, toda vez que de nueva cuenta se basó en hechos carentes de sustento en un hecho real, pues no demostró que el C. Felipe Calderón Hinojosa prestara sus servicios para Scotiabank Inverlat S.A, además de vincularlo de nuevamente con conductas delictivas derivadas del Fobaproa (robo), ello con el ánimo de causarle un daño a su imagen.

En este sentido, resulta atinente precisar que en la resolución antes referida, este órgano colegiado prohibió expresamente a la coalición denunciada la difusión de cualquier publicidad que tuviera por objeto denigrar a los partidos políticos o candidatos, particularmente aquella que fuera similar a la que fue declarada contraria al orden electoral.

Al respecto, conviene reproducir los argumentos expuestos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP- RAP- 049/2006**, misma que en la parte conducente determinó lo siguiente:

“... ”

Por último, es **inoperante** el agravio relativo a que la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral es ambigua y violatoria de los principios de certeza y objetividad, así como que la autoridad debió haber explicado a qué se refiere con 'elementos similares'.

En efecto, opuestamente a lo que sostiene el recurrente, la utilización de la frase 'elementos similares' en el resolutivo cuarto de la resolución recurrida, no es, por sí misma, violatoria de los principios de certeza y objetividad, pues se encuentra vinculada a lo que se señala en el propio cuarto resolutivo, así como a la parte considerativa de la resolución.

De la lectura integral de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa especifica cuáles son esos 'elementos similares' y expresamente señala en el resolutivo cuarto que son particularmente las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o candidatos.

Asimismo, la coalición actora no tiene en cuenta que los resolutivos de una resolución siempre deben analizarse en relación con la parte considerativa de la misma, en tanto que la resolución es un todo, que guarda íntima relación con cada una de sus partes.

En la especie, contrariamente a lo que señala la coalición actora, en el apartado B) del considerando 10 de la resolución recurrida se señala expresamente qué tipo de expresiones son aquellas que la autoridad administrativa considera que denigran a los partidos políticos, coaliciones o candidatos. En la página 93 de la resolución se determinó que la configuración de una expresión que implique diatriba, calumnia, infamia o injuria, se puede dar a través de la simple exteriorización de calificativos, expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonorosas o infamantes, o bien, a través de aquellas expresiones que resulten impertinentes, innecesarias o desproporcionadas, es decir, aquellas locuciones cuyo propósito fundamental sea descalificar a otro instituto político basadas en hechos aparentemente verídicos.

También en las páginas 93 a 95 de la resolución impugnada se sostienen y transcriben los criterios que ha utilizado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-RAP-34/2006 y SUP-RAP-36/2006, para determinar cuándo hay denostación, calumnias, diatribas, injurias o difamación. Asimismo, se hace un análisis específico de los promocionales en litigio, atendiendo a su finalidad, se destacan las definiciones de las figuras delictivas y se hace una evaluación global de las características observadas en los promocionales, a efecto de evidenciar la necesidad del cese inmediato de su difusión.”

Ahora bien, en relación con los argumentos sostenidos por la coalición denunciada en el sentido de que en el escrito a través del cual el Partido Acción Nacional promovió el incidente de mérito, reconoció que el promocional identificado como “Informativa 9” es un nuevo promocional, por lo que su trámite debió ser mediante la sustanciación de otro procedimiento especializado, la autoridad de conocimiento estima que dicha aseveración deviene infundada, toda vez que desde la presentación del incidente de cuenta, se advirtió la existencia de elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro del procedimiento principal, por lo que es válido arribar a la conclusión de que la vía a través de la cual se sustanció dicho incidente fue la procedente.

De la misma forma, esta autoridad estima que los argumentos sostenidos por la coalición denunciada en el sentido de que los promocionales materia del actual procedimiento guardaban relación con las propuestas de gobierno que se encontraba obligada a difundir dentro del pasado proceso electoral, en obvio de repeticiones, le resultan aplicables las consideraciones expuestas dentro del procedimiento principal.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la otrora coalición denunciada, respecto a que el procedimiento administrativo sancionador debe ser más exhaustivo porque podría implicar la imposición de una sanción, cabe señalar que de las constancias que obran en autos, así como de lo precisado en los resultandos que fueron detallados en el presente fallo, se advierte que esta autoridad realizó todas aquellas diligencias necesarias para allegarse de las probanzas adecuadas que permitan efectuar una correcta calificación de la infracción, así como la debida individualización de la sanción que conforme a derecho resulte procedente.

Sobre este particular, cabe decir que con fecha quince de octubre de dos mil ocho, la autoridad de conocimiento notificó a los integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, el acuerdo a través del cual se pusieron a su disposición las actuaciones del presente expediente con el objeto de que manifestaran lo que a su derecho conviniese en relación con las mismas, sin embargo, fueron omisos en la atención al mismo.

Por lo que hace al alegato relativo a que la otrora coalición responsable difundió el promocional denunciado por el Partido Acción Nacional en respuesta a una campaña negra iniciada por el citado partido en contra de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en obvio de repeticiones, le resultan aplicables las consideraciones expuestas dentro del procedimiento principal.

Por último, cabe decir que, en relación con el argumento vertido por la coalición denunciada en el sentido de que el Partido Acción Nacional no presentó prueba alguna que fuera útil para acreditar la difusión del promocional de mérito, así como su duración, periodicidad, canales o frecuencias en que podría haber sido difundido, cabe recordar en principio que la existencia, contenido, autoría y difusión del mismo, no se encuentra sujeto a controversia ni son objeto de prueba, en virtud de que, en primer término, fue aportado en medio magnético por parte del Partido Acción Nacional, y adicionalmente obra en poder de esta autoridad, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aunado a que su existencia y transmisión fue admitida por la coalición denunciada, en su escrito de contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad.

Una vez sentado lo anterior, conviene reseñar de forma sucinta, los elementos probatorios antes valorados, mismos que a continuación se detallan:

ELEMENTOS DE PRUEBA

Corren agregados en autos los siguientes elementos probatorios:

- I. El reconocimiento en la autoría y difusión del promocional** que realizó la coalición denunciada.
- II. La documental privada consistente en la información presentada por la institución bancaria denominada **Scotiabank Inverlat S.A.****

III. La documental pública consistente en el informe relativo al resultado del **monitoreo de medios que fue remitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos** de este Instituto del cual se desprende, lo siguiente:

- Que el promocional identificado como “Informativa 9” tuvo en televisión 133 impactos, los días 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de dos mil seis, en el Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Sonora, Jalisco, San Luís Potosí, Guanajuato y Puebla.
- Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundidos por los canales con las siglas, XEW-TV, XEQ, XHY-TV, XHCCU-TV, XHIMT-TV, XHDF-TV, XHQ-TV, XHGC-TV, XHAQ, XHCJE, XHGDP, XHIC, XHVHT-TV, XHCCQ, XHBG, XHBC-TV, XHAK-TV, XHGUE, XHDE-TV, XHLG-TV y XHP-TV.
- Que el periodo de transmisión del promocional fue del 7 al 14 de junio de 2006.

IV. La documental privada consistente en la **respuesta que presentó el apoderado legal de Televisión Azteca S.A. de C.V.**, a través de la cual hizo del conocimiento de esta autoridad que el promocional “Informativa 9” fue difundido en cincuenta y tres ocasiones los días siete, ocho y nueve de junio de dos mil seis.

V. Informe rendido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, documental pública con pleno valor probatorio de cuyo análisis, no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

VI. Documental privada consistente en la respuesta del “*Semanario de Información y análisis, Proceso*”, relacionada con el artículo denominado “La Impunidad” publicado en dicha revista, documental privada de cuyo análisis no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

VII. Documental privada consistente en la publicación denominada “**Los Suspirantes; Los Precandidatos de Carne y Hueso**”, de cuyo estudio no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

VIII. Investigación relacionada **con la nota periodística intitulada: Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona**”, publicada en el periódico “la Jornada”, de la que no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

Conforme a los elementos antes descritos se evidencia que la transmisión del promocional objeto del presente procedimiento es atribuible a la otrora coalición denunciada, precisando que las pruebas aportadas por la coalición denunciada, de ninguna forma demuestran, en primer término, que dicho candidato haya participado en la aprobación del FOBABROA; en segundo lugar, que tal fideicomiso pueda ser considerado como fraude; en tercer lugar, que el citado personaje se pronuncie en favor de una solución responsable en relación al tema del Fobaproa, y por otra, haya defendido los intereses de una institución bancaria que presuntamente se benefició por dicho fideicomiso, y finalmente, que con las conductas antes referidas, el C. Felipe Calderón Hinojosa haya causado un perjuicio a la población.

La anterior conclusión, se encuentra fundamentada en una valoración conjunta de los elementos de convicción de los que se allegó esta autoridad, así como de las pruebas aportadas por el quejoso, atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y la experiencia, tal como lo disponen los artículos 28, párrafo 1, inciso a) y 35, párrafos 1 y 2 del reglamento de la materia, mismos que señalan lo siguiente:

“Artículo 28

1. Serán documentales públicas:

b) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

(...)

Artículo 35

- 1. Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.*
- 2. Las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran...”*

Por su parte, cabe decir que la información que presentó la empresa TV Azteca S. A. de C. V., complementa los datos del monitoreo en cuestión, toda vez que hizo del conocimiento de esta autoridad que el promocional identificado como “Informativa 9” fue difundido en cincuenta y tres ocasiones los días siete, ocho y nueve de junio de dos mil seis.

En este orden de ideas, esta autoridad considera que la difusión del promocional de mérito, se tiene por acreditada con base en los resultados del monitoreo televisivo y radiofónico practicado por la empresa IBOPE AGB, México S.A. de C.V., durante el período comprendido del dieciséis de enero al dos de julio de dos mil seis, así como con la información que presentó la empresa TV Azteca S. A. de C. V.

En ese tenor, esta autoridad tomará en cuenta la información contenida en el reporte de monitoreo de medios en el que se señala que el promocional identificado como “informativa 9” tuvo en televisión 133 impactos, los días 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de dos mil seis.

Una vez sentado lo anterior, esta autoridad considera que cuenta con los elementos necesarios que deben ser valorados al momento de individualizar la sanción correspondiente, toda vez que ha quedado acreditada la responsabilidad de la otrora coalición responsable en la autoría y difusión del promocional identificado como “Informativa 9”.

En mérito de lo expuesto, se propone declarar **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador, a efecto de imponer las sanciones que correspondan.

SEGUNDO INCIDENTE DE INEJECUCIÓN

6.- Ahora bien, corresponde a esta autoridad entrar al estudio de fondo de los hechos materia del **segundo incidente** de inejecución de la resolución recaída al procedimiento especializado identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, reseñados en el apartado **C)** del considerando 4 del presente fallo, consistentes en determinar si el promocional identificado como **“Salinas Fobaproa”**, difundido en medios electrónicos por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” incumplió con lo ordenado por la Constitución Federal, y en específico con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como determinar si el mismo contiene elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro de la resolución recaída al procedimiento principal.

Al respecto, conviene recordar que el Consejo General del Instituto Federal Electoral **sobreseyó el segundo incidente de inejecución** presentado por el Partido Acción Nacional en contra de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”, toda vez que los hechos materia del mismo se habían consumado de un modo irreparable.

No obstante lo anterior, toda vez que del análisis al promocional identificado como “Salinas Fobaproa”, materia del segundo incidente de inejecución incoado por el Partido Acción Nacional, se advierte la existencia de elementos similares a los contenidos en los promocionales que fueron considerados violatorios de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en la resolución emitida dentro del procedimiento especializado identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, esta autoridad procede a valorar su contenido, a efecto de determinar la existencia o no de una violación a la normatividad electoral vigente.

CONTENIDO DEL PROMOCIONAL DENUNCIADO

El promocional materia del presente incidente, el cual fue detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y que obra en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es del tenor siguiente:

En primer término aparece en pantalla la imagen de un televisor en el que se observa al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari y el número “1995”, acompañado de una voz en off que dice: *“Salinas creó la peor crisis de la historia”*. Acto seguido, se muestra sobre un fondo blanco la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, en cuya parte inferior se advierte la palabra “FOBAPROA” y el número “1999”, mientras la voz en off manifiesta: *“La crisis derivó en el fraude del Fobaproa en mil novecientos noventa y nueve que aprobó el PAN y el PRI con Calderón.”*

En forma inmediata, se muestra la imagen de una casa y un automóvil; sobrepuesta a la iconografía inserta la frase: *“Más de 628 mil Casas Embargadas”*, acompañado de la voz fuera de cuadro que afirma: *“se embargaron más de seiscientas veintiocho mil casas”*.

A continuación se muestra la imagen de varias personas junto a una barda en la que se ostenta la leyenda: *“Más de Un Millón de Empleos Perdidos”*, mientras la voz antes referida asevera: *“Se perdieron más de un millón de empleos”*. En seguida se observa a una mujer con las manos en el rostro y la leyenda sobrepuesta: *“Una deuda de 120 Mil Millones de Dólares”*, entretanto, la voz sigue diciendo: *“y tenemos una deuda de ciento veinte mil millones de dólares.”*

Posteriormente, aparece la efigie del C. Felipe Calderón Hinojosa y sobrepuesta la palabra “FOBAPROA” en la parte inferior, mientras que la voz refiere: *“Que Calderón no te siga engañando. El PAN y el PRI te dañaron”*. Inmediatamente se muestra el rostro del aludido candidato que se transforma en el número “1” y en la parte superior se advierte la frase *“Manos Sucias”* y otra en la parte inferior que señala: *“1 Empleo”*, acompañando a dichas imágenes la voz en off que dice: *“Manos sucias, un empleo para su cuñado.”*

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

Al respecto, conviene precisar que la existencia y contenido del promocional en estudio, no se encuentra sujeto a controversia ni es objeto de prueba, en virtud de que la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, al contestar el presente procedimiento, reconoce su difusión, por lo que en términos del artículo 25, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tratarse de un hecho reconocido, no es objeto de prueba, y en consecuencia se debe tener por cierto en cuanto a su existencia.

Sobre este particular, conviene reproducir la contestación que formuló la coalición denunciada al presente procedimiento, misma que en la parte conducente dice lo siguiente:

“...

Con el promocional en cuestión, la otrora coalición Por el Bien de Todos promovió el desarrollo de la opinión pública, pues expuso un tema de alta relevancia e interés nacional como lo es la crisis económica del año 1995 y las derivaciones de la misma, entre las cuales se encuentra la aprobación conjunta del Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, del tema conocido como FOBAPROA, y las consecuencias que ésta trajo.

...”

Para mayor claridad, conviene tener presente, en la parte que interesa, el contenido del dispositivo reglamentario antes invocado:

“Artículo 25

1. Son objetos de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

(...)

Asimismo, es necesario precisar que el contenido del promocional de referencia fue objeto de pronunciamiento por parte del Consejo General de este Instituto, al momento de resolver el segundo incidente de inejecución de la resolución recaída al procedimiento especializado identificado con la clave de expediente JGE/PE/PAN/CG/006/2006, por lo que su existencia y autoría no se encuentra sujeta a controversia.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Así las cosas, una vez detallado el contenido del promocional sujeto a valoración, la autoridad de conocimiento colige que el contenido de las imágenes y afirmaciones expuestas en el mismo, concretamente por lo que hace a las afirmaciones “*Salinas creó la peor crisis de la historia*”, “*La crisis derivó en el fraude del Fobaproa en mil novecientos noventa y nueve que aprobó el PAN y el PRI con Calderón.*” “*Más de Un Millón de Empleos Perdidos*” conllevan la finalidad de

transmitir en los receptores de ese mensaje, con apariencia de verdaderos, hechos consistentes en que derivado de una crisis económica, el C. Felipe Calderón Hinojosa conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional, participó o está vinculado en la comisión de conductas contrarias a la ley a través de la aprobación del fideicomiso público conocido como FOBAPROA, y que dicha aprobación se tradujo en un perjuicio económico para la población.

Consecuentemente, esta autoridad estima que el contexto gráfico y lingüístico en que se presenta el promocional de mérito, guarda similitud con los elementos contenidos dentro de los promocionales identificados como “Fobaproa # 1 y Fobaproa # 2”, en los que se vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con la comisión de un fraude, el encubrimiento de un robo y la generación de un daño consistente en la pérdida de empleos, a partir de la aprobación del Fobaproa, toda vez que de nueva cuenta se vale de expresiones carentes de sustento en un hecho real y objetivo con la única finalidad de denigrar la imagen del entonces candidato presentándolo frente a los receptores de los mensajes como una persona vinculada con la ejecución de conductas fuera de la ley que causaron un perjuicio económico en la ciudadanía.

Así tenemos, que tratándose de la expresión *“La crisis derivó en el fraude del Fobaproa en mil novecientos noventa y nueve que aprobó el PAN y el PRI con Calderón”* dentro del promocional de mérito, este órgano resolutor estima el uso de la **denigración** en perjuicio del C. Felipe Calderón Hinojosa al comunicar a los receptores del promocional la vinculación de dicho candidato con la comisión de un delito o una conducta contraria a la verdad derivado de la aprobación del FOBAPROA, presentándolo como una persona deshonesto que ha estado relacionado con conductas contrarias a la ley; por tanto, tal aserción se realizó con la única finalidad de denigrar su imagen. En este contexto, se colige que el promocional que nos ocupa, lo mismo que en aquellos que constituyeron materia del procedimiento principal, la coalición “Por el Bien de Todos” difunde un elemento similar a los que fueron declarados contrarios al orden constitucional y legal por el Consejo General de este Instituto dentro de la resolución recaída al procedimiento principal, confirmada por la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral recaída al recurso de apelación identificada con el número de expediente SUP-RAP-49/2006, de fecha veintidós de junio de dos mil seis.

En términos generales, la concatenación de los elementos visuales y auditivos expuestos en el promocional bajo estudio, mediante la vinculación que hace la coalición denunciada del C. Felipe Calderón Hinojosa con la realización de

conductas contrarias a la ley a través de su participación en el multicitado fideicomiso que tuvo como resultado un detrimento financiero, no se encuentra sustentado en hechos reales, concretos y susceptibles de demostración, por lo que rebasa los límites de la libertad de expresión, al exponer una crítica desproporcionada y excesiva que no se encuentra fundada en un hecho real.

En este entendido, es razonable estimar que la información difundida en el promocional sujeto a valoración, se apoya en alusiones que no responden al canon de veracidad con que debieron ser emitidas, pues como ha quedado expresado, no existe un hecho real comprobable objetivamente por el que se acredite, en primer término, que la peor crisis en la historia del país haya acaecido durante la gestión del C. Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República; en segundo lugar, que dicha crisis propiciara que el C. Felipe Calderón Hinojosa en conjunto con los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional hayan cometido una conducta delictiva o contraria a la verdad, a través de la aprobación del Fobaproa; tercero, que dicho fideicomiso haya generado el embargo de bienes, la pérdida de empleos y que la población tenga que pagar una deuda, y finalmente, que como consecuencia de las actividades contrarias a la ley que se le atribuyen, es una persona deshonesto.

De igual forma, no pasa inadvertido para esta autoridad que la conclusión del promocional en cuestión, al utilizar la frase *“Manos sucias, un empleo para su cuñado”* concatenada con los elementos auditivos y visuales expuestos en el promocional de mérito, lleva implícita la finalidad de mostrar al C. Felipe Calderón Hinojosa como una persona deshonesto que ha tenido vínculos con conductas contrarias a la ley (“fraude del FOBAPROA”) que han devenido en un menoscabo económico en la sociedad y que sólo genera empleos para sus familiares, hechos que en la especie no encuentran sustento en hechos veraces o al menos demostrados.

Sobre este particular, debe decirse, que si bien la expresión *“Manos sucias”* no fue valorada individualmente dentro del procedimiento principal, lo cierto es que la misma formó parte de una valoración en conjunto de las frases *“con tus manos sucias firmaste junto al PRI el fraude más grande de la historia”*, *“encubriste a los que nos robaron”* *“y sigues encubriendo a los culpables”*, las cuales fueron estimadas por esta autoridad como contraventoras de la normatividad electoral, en virtud de que dichas expresiones tenían la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa al relacionarlo con conductas contrarias al orden jurídico.

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, la expresión “*Manos sucias*”, se emplea como una conclusión mediante la que se expone al citado candidato como una persona deshonesto vinculado con la comisión de conductas contraventoras de ley (FOBAPROA), sin que dicha circunstancia se encuentre sustentada en hechos reales o al menos demostrados.

En conclusión, toda vez que las expresiones referidas en la resolución de fecha cuatro de junio de dos mil seis, al igual que las que se han analizado en el presente incidente, revelan como elementos comunes tanto la falta de sustento en hechos reales, como la finalidad de denigrar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa vinculándolo con el FOBAPROA, al que se califica como un fraude que causó un daño económico en la población, es dable concluir la similitud existente entre los mensajes bajo análisis.

En tal virtud, procede declarar **fundado** el presente procedimiento respecto de los hechos sintetizados dentro del inciso **C)** del considerando 4 del presente fallo, toda vez que el promocional difundido por la coalición “Por el Bien de Todos”, vulnera lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y además contiene elementos similares a los que fueron declarados contraventores de incumpliendo el punto resolutivo “CUARTO” de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento principal de fecha cuatro de junio del presente año, lo cual constituye una violación a lo dispuesto en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del ordenamiento legal antes citado, el cual textualmente prevé:

“Artículo 269.

*Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:
(....)*

2. *Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:*

b) incumplan con las resoluciones o acuerdos del Instituto Federal Electoral... ”

En tal virtud, cabe decir que si bien dentro del incidente de mérito no fue posible ordenar el cese de la difusión del promocional “Salinas Fobaproa”, en atención a que dicha conducta se consumó de manera irreparable, lo que impidió la posibilidad fáctica de corregir tal suceso, lo cierto es que dicha circunstancia no impide que esta autoridad electoral imponga a la coalición responsable de su emisión una sanción al haber trasgredido el orden electoral.

En este sentido, resulta infundado el argumento expuesto por la coalición denunciada en el sentido de que no existe identidad entre los elementos expuestos en los promocionales materia del procedimiento principal y los contenidos en el promocional identificado como “Informativa 9”, toda vez que del análisis desarrollado en los párrafos que anteceden, es válido arribar a la conclusión de que dicho mensaje si contiene expresiones que denigraron al C. Felipe Calderón Hinojosa, a través de elementos que fueron prohibidos por el resolutivo CUARTO de la resolución recaída al procedimiento especializado principal identificado con el número **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, toda vez que de nueva cuenta se basó en hechos carentes de sustento en un hecho real, pues de nueva cuenta vinculó al C. Felipe Calderón Hinojosa con conductas delictivas o deshonestas derivadas del Fobaproa (robo), ello con el ánimo de causar un daño a su imagen, por lo que resulta inconcuso que al difundir dichas expresiones incumplió con las prohibiciones decretadas en la resolución en cuestión.

En este sentido, resulta atinente precisar que en la resolución antes referida, este órgano colegiado prohibió expresamente a la coalición denunciada la difusión de cualquier publicidad que tuviera por objeto denigrar a los partidos políticos o candidatos, particularmente aquella que fuera similar a la que fue declarada contraria al orden electoral.

Al respecto, conviene reproducir los argumentos expuestos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP- RAP- 049/2006**, misma que en la parte conducente determinó lo siguiente:

“...

*Por último, es **inoperante** el agravio relativo a que la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral es ambigua y violatoria de los principios de certeza y objetividad, así como que la autoridad debió haber explicado a qué se refiere con ‘elementos similares’.*

En efecto, opuestamente a lo que sostiene el recurrente, la utilización de la frase "elementos similares" en el resolutivo cuarto de la resolución recurrida, no es, por sí misma, violatoria de los principios de certeza y objetividad, pues se encuentra vinculada a lo que se señala en el propio cuarto resolutivo, así como a la parte considerativa de la resolución.

De la lectura integral de la resolución impugnada se desprende que la autoridad administrativa especifica cuáles son esos 'elementos similares' y expresamente señala en el resolutivo cuarto que son particularmente las expresiones que tengan por objeto denigrar a los partidos, coaliciones o candidatos.

Asimismo, la coalición actora no tiene en cuenta que los resolutivos de una resolución siempre deben analizarse en relación con la parte considerativa de la misma, en tanto que la resolución es un todo, que guarda íntima relación con cada una de sus partes.

En la especie, contrariamente a lo que señala la coalición actora, en el apartado B) del considerando 10 de la resolución recurrida se señala expresamente qué tipo de expresiones son aquellas que la autoridad administrativa considera que denigran a los partidos políticos, coaliciones o candidatos. En la página 93 de la resolución se determinó que la configuración de una expresión que implique diatriba, calumnia, infamia o injuria, se puede dar a través de la simple exteriorización de calificativos, expresiones intrínsecamente vejatorias, deshonorosas o infamantes, o bien, a través de aquellas expresiones que resulten impertinentes, innecesarias o desproporcionadas, es decir, aquellas locuciones cuyo propósito fundamental sea descalificar a otro instituto político basadas en hechos aparentemente verídicos.

También en las páginas 93 a 95 de la resolución impugnada se sostienen y transcriben los criterios que ha utilizado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-RAP-34/2006 y SUP-RAP-36/2006, para determinar cuándo hay denostación, calumnias, diatribas, injurias o difamación. Asimismo, se hace un análisis específico de los

promocionales en litigio, atendiendo a su finalidad, se destacan las definiciones de las figuras delictivas y se hace una evaluación global de las características observadas en los promocionales, a efecto de evidenciar la necesidad del cese inmediato de su difusión.”

Ahora bien, en relación con los argumentos sostenidos por la coalición denunciada en el sentido de que en el escrito a través del cual el Partido Acción Nacional promovió el incidente de mérito, reconoció que el promocional identificado como “Salinas Fobaproa” es un nuevo promocional, por lo que su trámite debió ser mediante la sustanciación de otro procedimiento especializado, la autoridad de conocimiento estima que dicha aseveración deviene infundada, toda vez que desde la presentación del incidente de cuenta, se advirtió la existencia de elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro del procedimiento principal, por lo que es válido arribar a la conclusión de que la vía a través de la cual se sustanció el mismo es la procedente.

De la misma forma, esta autoridad estima que los argumentos sostenidos por la coalición denunciada en el sentido de que el promocional de mérito guardaba relación con las propuestas de gobierno que se encontraba obligada a difundir dentro del pasado proceso electoral, en obvio de repeticiones, le resultan aplicables las consideraciones expuestas dentro del procedimiento principal.

Ahora bien, por lo que hace a la manifestación de la otrora coalición denunciada, respecto a que el procedimiento administrativo sancionador debe ser más exhaustivo porque podría implicar la imposición de una sanción, cabe señalar que de las constancias que obran en autos, así como de lo precisado en los resultandos que fueron detallados en el presente fallo, se advierte que esta autoridad realizó todas aquellas diligencias necesarias para allegarse de las probanzas adecuadas que permitan efectuar una correcta calificación de la infracción, así como la debida individualización de la sanción que conforme a derecho resulte procedente.

Sobre este particular, cabe decir que con fecha quince de octubre de dos mil ocho, la autoridad de conocimiento notificó a los integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, el acuerdo a través del cual se pusieron a su disposición las actuaciones del presente expediente con el objeto de que manifestaran lo que a su derecho conviniese en relación con las mismas, sin embargo, fueron omisos en la atención al mismo.

Por lo que hace al alegato relativo a que la otrora coalición responsable difundió el promocional denunciado por el Partido Acción Nacional en respuesta a una campaña negra iniciada por el citado partido en contra de su entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en obvio de repeticiones, le resultan aplicables las consideraciones expuestas dentro del procedimiento principal.

Por último, cabe decir que, en relación con el argumento vertido por la coalición denunciada en el sentido de que Partido Acción Nacional no presentó prueba alguna que fuera útil para acreditar la difusión del promocional de mérito, así como su duración, periodicidad, canales o frecuencias en que podría haber sido difundido, cabe recordar en principio que la existencia, contenido, autoría y difusión del mismo, no se encuentra sujeto a controversia ni son objeto de prueba, en virtud de que, en primer término, fue aportado en medio magnético por parte del Partido Acción Nacional, y adicionalmente obra en poder de esta autoridad, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aunado a que su existencia y transmisión fue admitida por la coalición denunciada, en su escrito de contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad.

Así las cosas, esta autoridad procede a determinar las circunstancias particulares en las que fue transmitido el promocional identificado como “Salinas Fobaproa”, el cual contiene elementos similares a los que fueron declarados contrarios al orden electoral dentro de la resolución emitida por el Consejo General de este Instituto dentro del procedimiento especializado identificado con el número de expediente **JGE/PE/PAN/CG/006/2006**, con el fin de que se imponga la **sanción** que corresponda a los partidos integrantes de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”.

Una vez sentado lo anterior, conviene reseñar de forma sucinta, los elementos probatorios antes valorados, mismos que a continuación se detallan:

ELEMENTOS DE PRUEBA

Corren agregados en autos los siguientes elementos probatorios:

- I. El reconocimiento en la autoría y difusión** del promocional que realizó la coalición denunciada.

II. Informe rendido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, documental pública con pleno valor probatorio de cuyo análisis, no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

III. Respuesta del *“Semanario de Información y análisis, Proceso”*, relacionada con el artículo denominado “La Impunidad” publicado en dicha revista, documental privada de cuyo análisis no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

IV. Publicación denominada “Los Suspirantes; Los Precandidatos de Carne y Hueso”, de cuyo estudio no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

V. Investigación relacionada con la nota periodística intitulada: *Calderón, Gurría y Zedillo, los artífices del IPAB: Reyes Orona*”, publicada en el periódico “la Jornada”, de la que no es posible acreditar que las expresiones contenidas en los promocionales objeto del presente procedimiento se encuentren basadas en hechos reales y objetivos.

VI. El informe relativo al resultado del monitoreo de medios que fue remitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, del cual se desprende lo siguiente:

- Que el promocional identificado como “Salinas Fobaproa”, tuvo en televisión 26 impactos, los días 21 y 22 de junio de dos mil seis en el Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Jalisco, San Luís Potosí y Puebla.
- Que la transmisión del promocional se hizo a nivel nacional, siendo difundidos por los canales con las siglas, XHTV-TV, XHDE-TV, XHGUE, XEQ, XHY-TV, XEW-TV, XHAK-TV, XHCCU-TV, XHQ-TV, XHP-TV

- Que el periodo de transmisión del promocional fue del 21 al 22 de junio de 2006.

Conforme a los elementos antes descritos se evidencia que la transmisión del promocional objeto del presente procedimiento es atribuible a la otrora Coalición denunciada; por tanto, toda vez que se trata de información que obra en poder de esta autoridad, específicamente, en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al haber sido detectado en el monitoreo practicado a petición del Consejo General del Instituto Federal Electoral, su difusión y contenido se encuentran acreditados, máxime que la coalición denunciada reconoció su autoría.

En ese tenor, esta autoridad tomará en cuenta la información contenida en el reporte de monitoreo de medios en el que se señala que el promocional identificado como “Salinas Fobaproa” tuvo en televisión 26 impactos, los días 22 y 23 de junio de dos mil seis.

Una vez sentado lo anterior, esta autoridad considera que cuenta con los elementos necesarios que deben ser valorados al momento de individualizar la sanción correspondiente, toda vez que ha quedado acreditada la responsabilidad de la otrora coalición responsable en la autoría y difusión del promocional identificado como “Salinas Fobaproa”.

En mérito de lo expuesto, se propone declarar **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador, respecto de los hechos sintetizados en el inciso **C)** de la parte inicial del considerando **4** del presente fallo, a efecto de imponer las sanciones que correspondan.

7. Que una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión del ilícito y la responsabilidad de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, se procede a imponer la sanción correspondiente.

Cabe señalar que como se precisó en el considerando segundo de la presente resolución, la individualización y calificación de la infracción se realizará conforme a lo previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el 14 de enero de 2008, toda vez que en el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se aprueba el ordenamiento legal antes citado, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio *tempus regit actum* (que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización), el fondo del presente asunto deberá ser resuelto conforme a las disposiciones aplicables al momento en que se concretaron los hechos denunciados.

En esa tesitura, el artículo 269, apartado 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las sanciones aplicables a los partidos y agrupaciones políticas nacionales, en tanto que el apartado 2, refiere los supuestos típicos sancionables y en específico el inciso a), señala que podrán ser impuestas cuando los partidos políticos incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 38 y demás disposiciones aplicables del ordenamiento invocado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las Tesis de Jurisprudencia identificadas con los rubros: **"ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"** y **"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN"**, con números **S3ELJ 09/2003** y **S3ELJ 24/2003** respectivamente, señala que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para fijar la sanción correspondiente, debe tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta.

Así, para **calificar** debidamente las faltas, la autoridad debe valorar, para cada una de ellas, las que se enuncian a continuación:

- El tipo de infracción
- La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas).
- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.
- Intencionalidad
- Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.
- Las condiciones externas y los medios de ejecución
- Condiciones externas (contexto fáctico)
- La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.
- Reincidencia.
- Sanción a imponer

- La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

El tipo de infracción.

La conducta cometida por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” vulneró lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con las restricciones previstas en el artículo 6° de la Constitución Federal para, a partir de ello, establecer la finalidad o valor protegido en la norma violentada, así como la trascendencia de la infracción.

Al respecto, es necesario recordar que dicha prohibición formó parte de las reformas que sufrió el sistema electoral en el año 1996, la cual tuvo entre sus propósitos centrales, según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, fortalecer y consolidar un sistema plural y competitivo de partidos políticos y equidad en las condiciones de la contienda electoral.

En ese orden de ideas, es posible afirmar que el legislador ordinario federal al establecer la prohibición contenida en el artículo 38, apartado 1, inciso p) del código electoral federal consideró que no sería posible avanzar en la consolidación de un sistema de partidos plural y competitivo y con apego a los principios constitucionales que debe cumplir toda elección democrática para que sea considerada válida, si se permitía que los actores políticos utilizaran diatribas, calumnias, infamias o difamación en contra de otros partidos políticos o de sus candidatos. Dicha prohibición se vuelve de mayor relevancia durante el tiempo de campañas electorales, toda vez que durante ese periodo el debate político es mucho más intenso; es por ello, que en el artículo 186, apartado 2 del cuerpo normativo en cita, también se establece la prohibición de utilizar ese tipo de expresiones en el contenido de la propaganda política.

Es por ello, que se considera que el propósito de la prohibición contenida en el numeral 38, apartado 1, inciso p) del código federal electoral, por un lado es incentivar verdaderos debates públicos enfocados no sólo en presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, sino también que permita afirmar que la elección se efectuó de forma libre y auténtica, pues en todo momento se propició la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y particularmente en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieran registrado y por otro lado, inhibir que la propaganda política se degrade en una escala de expresiones no protegidas en la ley, como lo son las que

impliquen diatriba, calumnia, injuria, difamación o que denigre a los partidos políticos, candidatos, instituciones públicas o ciudadanos.

En **segundo** término, la difusión de los promocionales identificados como “Informativa 9” y “Salinas Fobaproa”, los cuales fueron materia de los incidentes de inejecución promovidos dentro del procedimiento principal dieron lugar a la trasgresión del artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal Electoral, en virtud de que violaron la resolución del Consejo General de este Instituto emitida dentro del procedimiento principal, de fecha cuatro de junio del presente año, al contener elementos similares a los que fueron declarados contraventores de los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que no obstante haberse acreditado la violación a lo dispuesto en distintos preceptos legales por parte de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, ya que en dichas normas el legislador pretendió tutelar, en esencia, el mismo valor o bien jurídico (el cual se define en el siguiente apartado).

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

En esa tesitura, se puede afirmar que los **bienes jurídicos tutelados** por los preceptos antes señalados consisten en el normal desarrollo del proceso electoral y la equidad en la contienda, basada en la exposición de las ideas que permitan a la ciudadanía decidir entre una u otra de las opciones políticas existentes, es decir, que con ella se logre que el electorado emita un voto razonado, por ello es que los partidos políticos deben abstenerse de utilizar cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales y en específico en el contenido de la propaganda política que se utilice durante las mismas.

Por lo que hace a la **jerarquía de tales bienes**, debe decirse que dicha prohibición fue incluida con la finalidad de que exista un funcionamiento armónico de la vida democrática, máxime que se debe tener mayor cuidado durante el desarrollo de un proceso electoral toda vez que en ese tiempo el debate político aumenta pues todos los actores políticos pretenden conseguir más adeptos

exponiendo sus plataformas y programas de acción frente a los que exponen otros institutos políticos o candidatos.

En ese orden de ideas, es válido afirmar que el artículo 38, apartado 1, inciso p) del código electoral federal tiene por **objeto** excluir del ámbito de protección normativa aquellas críticas, expresiones, frases o juicios de valor que sólo tengan por objeto, o como resultado, la denostación, ofensa o la denigración de otro partido, de sus candidatos, de las instituciones públicas o de los ciudadanos, ya sea que ello sea consecuencia de una intención deliberada o como mero resultado de los términos lingüísticos utilizados.

Lo antes razonado es consistente con el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-34/2006.

En el caso concreto, la finalidad que persigue el legislador al señalar que no podrá utilizarse cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales, es precisamente garantizar que la contienda electoral se realice en un ambiente adecuado, que permita afirmar que la elección se efectuó de forma libre y auténtica, pues en todo momento se propició la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieran registrado.

Por otra parte, según se advierte en autos, la infracción administrativa se derivó de la difusión de promocionales que esta autoridad consideró conculcatorios de lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso p) y 186, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que contenían afirmaciones que se encontraban dirigidas fundamentalmente a demeritar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato a la Presidencia de la República postulado por el Partido Acción Nacional, y de ninguna manera se contribuía a formar una opinión pública mejor informada.

En esa tesitura, se estima que el efecto de la infracción administrativa consistió en causar un daño en la imagen pública del entonces candidato en cita y con ello se violentó la prohibición de utilizar en la propaganda política expresiones que implicaran diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación ya que el promocional, objeto de este procedimiento, no proporcionó a los ciudadanos elementos que les

hubieran permitido contrastar y valorar las opciones políticas propuestas, y de esa forma poder optar por alguna de ellas con base en la exposición de sus ideas y no así en el descrédito de sus candidatos.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta que debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. Los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1) “Fobaproa 2”, (Informativa 2), “Informativa 9” y “Salinas Fobaproa” que fueron difundidos en televisión y en radio por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” contenían afirmaciones que tenían como fin causar un daño en la imagen pública del entonces candidato a la Presidencia de la República registrado por el Partido Acción Nacional, el C. Felipe Calderón Hinojosa, lo que en la especie trastocó los límites en el ejercicio del derecho de libre manifestación de ideas.

b) Tiempo. De los elementos que obran en autos, se evidencia que la transmisión de los promocionales se efectuó durante el proceso electoral federal llevado a cabo en el año dos mil seis, en los meses de mayo y junio, según se desprende del informe remitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos relacionada con el resultado del monitoreo de medios que esta autoridad ordenó se realizara, así como lo informado por TV Azteca S.A. de C.V. respecto del promocional identificado como “Informativa 9”.

En específico, el promocional identificado como “Fobaproa 1” (informativa 1), tuvo en televisión 37 impactos en el transcurso de los días 16, 17, 18 y 19 de mayo de dos mil seis y 436 impactos en radio los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 27 del mismo mes y año.

Por su parte, el promocional identificado como “Fobaproa 2” (Informativa 2) tuvo en televisión 231 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de mayo de dos mil seis y los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de junio del mismo año; y en radio 2691 impactos, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de mayo de dos mil seis; 1, 16, y 23 de junio del mismo año

En relación con el promocional identificado como “Informativa 9” tuvo en televisión 133 impactos, los días 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de dos mil seis.

Por último, el promocional identificado como “Salinas Fobaproa” tuvo en televisión 26 impactos los días 21 y 22 de junio de dos mil seis.

c) Lugar. Al respecto, cabe señalar que el monitoreo de medios arrojó los siguientes resultados:

PROMOCIONAL “Fobaproa 1” (Informativa 1), fue difundido en televisión en el Distrito Federal, Yucatán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California por los canales con las siglas XEW-TV, XHGC-TV, XHDF-TV, XEQ, XHCCU-TV, XHY-TV, HXQ-TV y XHEX; en radio se transmitió en el Distrito Federal, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, y por las frecuencias 102.7, 670 103.5, 107. 5, 1270, 105.1, 94.7, 99.7, 93.3, 97.7, 91.3, 1030, 107.3, 93.7, 1110, 88.1, 92.1, 690, 1150 y 92.1.

PROMOCIONAL “Fobaproa 2” (Informativa 2), fue difundido en televisión en el Distrito Federal, Yucatán, Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo y Baja California, a través de los canales identificados con las siglas XEW-TV, MPRE2- MCMVS, ZAZ, MCIN2, FSPOTM, XHQ-TV, XEQ, XHY-TV, XHCCU-TV, XHGC-TV, MPREMV, XHDF-TV, HXST-TV, XHEX, XHIJ-TV, TVC, XHILA-TV. En radio en se difundió en en el Distrito Federal, Baja California, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Jalisco, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, y fue difundido por las frecuencias XHPF-FM (101.9), XHV6-FM (103.3), XHTIM-FM (97.7), XHJC-FM (91.5), XHTY-FM (99.7), XHMMF-FM (92.3), XHMD-FM (104.1), SX50-FM (99.9), (HOO-FM (102.3) XERPL-AM (1270), XHRPL-FM (93.9), XHPQ-FM (97.5), XELeo-AM (1110), XHRED-FM (88.1), XHFAJ-FM (91.3), XERL-FM (97.7), XEJP-FM (93.7) XEQR-AM (1030), XERED-AM (1110), XEQR-FM (107.3), XHFO-FM (92.1), XEJP-AM (1150) XEN-AM (690), XHEXA-FM (104.9), XHMVS-FM (102.5), XEDF-AM (1500), XEDF-FM (104.1), XHBH-FM (98.5), XHNV-FM (93.9), XEYF—AM (1200), XHUSS-FM (92.3), XEWN-AM (1270), XETOR-AM (670), XHRCA-FM (102.7), XHLTO-FM (93.1) XEGZ-AM (790), XHVOZ-FM (107.5), XHDK-FM (94.7), XHBLO-FM (92.3), XEBA-FM (97.1), XHIM-FM (105.1), XHEM-FM (103.5), XHNZ-FM (107.5), XHNQ-FM (99.3), XHNS-FM (69.9), XHPA-FM (93.7), XHPO-FM (103.9), XHPBA-FM (98.7), XHRP-FM (103.3), XHZM-FM (92.5), XEQT-AM (800), XEFM-AM (1010), XHVE-FM

(100.5), XHPS-FM (93.3), XHPB-FM (99.7) XEENO-FM (90.1), XHRJ-FM (92.5), XHZA-FM (101.3), XHEDT-FM (93.3), XHTOM-FM (102.1), XHRQ-FM (97.1), XHMQ-FM (98.7) XEMON-AM (1370), XET-FM (94.1), XHJD-FM (98.9), XHPA6-FM (105.3), XHSP-FM (99.7) XHMRA-FM (99.3), XHMRI-FM (93.7), XHGL-FM (97.7), XEMH-AM (970), XHMH-FM (95.3), XHMYL-FM (92.1), XHTR-FM (92.5), XHLI-FM (98.3), XHKV-FM (88.5), XHJAP-FM (90.9), XHOB-FM (96.1), XHSNP-FM (97.7), XHBM-FM (105.7), XHPM-FM (100.1) XEEX-AM (1230), XHCLI-FM (98.5), XHNW-FM (103.3)

PROMOCIONAL “Informativa 9” fue difundido el Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla por los canales con las siglas, XEW-TV, XEQ, XHY-TV, XHCCU-TV, XHIMT-TV, XHDF-TV, XHQ-TV, XHGC-TV, XHAQ, XHCJE, XHGDP, XHIC, XHVHT-TV, XHCCQ, XHBG, XHBC-TV, XHAK-TV, XHGUE, XHDE-TV, XHLG-TV y XHP-TV.

PROMOCIONAL “Salinas Fobaproa” fue difundido en Distrito Federal, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Jalisco, San Luis Potosí y Puebla por canales con las siglas, XHTV-TV, XHDE-TV, XHGUE, XEQ, XHY-TV, XEW-TV, XHAK-TV, XHCCU-TV, XHQ-TV, XHP-TV.

Intencionalidad

Al respecto, se considera que los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1), “Fobaproa 2” (Informativa 2), Informativa 9 y Salinas Fobaproa contenían afirmaciones que tenían como fin causar un daño en la imagen pública del entonces candidato a la Presidencia de la República registrado por el Partido Acción Nacional, el C. Felipe Calderón Hinojosa.

En este sentido, es importante mencionar que en el caso se debe poner especial atención en el contenido de los promocionales denunciados, toda vez que el mismo no es resultado de declaraciones espontáneas e improvisadas, por el contrario es producto de una reflexión previa, lo que nos permite considerar que existió el animo de causar un daño a la imagen de uno de los contendientes electorales.

La anterior consideración encuentra sustento en lo expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-009/2004, en el cual señaló lo siguiente:

*“...no cabe dar el mismo tratamiento a expresiones espontáneas e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, de un debate, de una discusión, a las emanadas de una intervención oral en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que aquellas producto de un natural sosiego, planificación o **en las que cabe presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para dicho sector de la población...**”*

En virtud de lo anterior, se considera que en el caso que nos ocupa el contenido de los multicitados promocionales implica un *animus injuriandi*, ya que representa la voluntad interna de un sujeto de derecho, como lo era la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, que se manifiesta en forma perceptible y produce un resultado formalmente antijurídico, ya que la difusión de los anuncios comerciales aluden a conductas negativas que implican denigración al entonces candidato a la máxima magistratura del país postulado por el Partido Acción Nacional, mismos que fueron transmitidos durante los meses de mayo y junio de dos mil seis, es decir, dentro del período de campaña para promocionar la candidatura a la Presidencia de la República e incluso es de resaltarse que la transmisión se realizó en los últimos días a que concluyera el periodo de campaña en el proceso electoral federal de dos mil seis, el cual como se dijo con antelación fue producto de una planificación en la que cabe presumir una reflexión previa y metódica, tanto para su realización cuanto para su difusión frente al electorado.

Con base en lo narrado, es claro que la intención de la coalición infractora consistió en demeritar la imagen del entonces candidato al cargo de Presidente de

la República postulado por el Partido Acción Nacional y con ello se quebrantó el orden jurídico en el que se debía realizar la respectiva elección.

En consecuencia, se concluye que la otrora coalición “Por el Bien de Todos” actuó de forma intencional tanto en la realización de los promocionales de referencia, como en la contratación de la transmisión de los mismos, con el objetivo de desprestigiar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato al cargo de Presidente de la República postulado por el Partido Acción Nacional frente al electorado, a fin de obtener para sí el voto en los comicios nacionales acaecidos en dos mil seis, lo que apreciado de forma conjunta permite vislumbrar que la conducta violatoria reprochable a la otrora coalición denunciada se verificó como producto de un sistema encaminado a vulnerar el orden en la contienda electoral.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

No obstante que en los apartados relativos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedó de manifiesto que los promocionales de mérito fueron difundidos por distintos canales o frecuencias de radio y televisión, y en diversas ocasiones, ello no puede servir de base para considerar que la conducta infractora se cometió de manera reiterada o sistemática.

Las condiciones externas y los medios de ejecución

Condiciones externas (contexto fáctico)

La difusión de los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1), “Fobaproa 2” (Informativa 2), Informativa 9 y “Salinas Fobaproa” se realizó durante el pasado proceso electoral federal, en específico en los meses de junio de 2006, momento en el que se realizaban las últimas actividades de proselitismo, con el fin de obtener el voto de la ciudadanía.

Medios de ejecución

Por cuanto a la difusión del promocional objeto del presente procedimiento, cabe señalar que de la investigación realizada por esta autoridad se encontraron elementos para acreditar su difusión en televisión y en radio.

II. Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y **a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una **gravedad ordinaria**, ya que la misma infringe los objetivos buscados por el legislador al ponderar el respeto a la integridad de la imagen pública de los partidos políticos.

En este punto, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Efectivamente, mientras que una determinada conducta puede no resultar grave en determinado caso, atendiendo a todos los elementos y circunstancias antes precisados, en otros casos, la misma conducta puede estar relacionada con otros aspectos, como puede ser un beneficio o lucro ilegalmente logrado, o existir un determinado monto económico involucrado en la irregularidad, como puede darse en el caso de la revisión de informes anuales y de campaña, o un procedimiento administrativo sancionador electoral relacionado con una queja en contra de un partido político por irregularidades derivadas del manejo de sus ingresos y egresos, de tal forma que tales elementos sea necesario tenerlos también en consideración, para que la individualización de la sanción sea adecuada.

Reincidencia

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudo haber incurrido el partido responsable.

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el código federal electoral incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Así las cosas, cabe decir que no existe constancia en los archivos de este Instituto Federal Electoral de que los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia en anteriores procesos electorales hubiesen cometido este mismo tipo de falta.

Sanción a imponer

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que las sanciones que se pueden imponer al partido político infractor se encuentran especificadas en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:

- a) Amonestación pública;
- b) Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
- c) Reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda por el periodo que señale la resolución;
- d) Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el periodo que señale la resolución;
- e) Negativa del registro de las candidaturas;
- f) Suspensión de su registro como partido político o agrupación política, y
- g) La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

Toda vez que la conducta se ha calificado como **grave ordinaria** y la misma infringe los objetivos buscados por el legislador al establecer un sistema electoral que permita la equidad en las campañas electorales, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en el inciso b) citado, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en los incisos c) al g), serían de carácter excesivo, y la prevista en el inciso a) sería insuficiente para lograr ese cometido.

Ahora bien, para determinar el tipo de sanciones a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor y, que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otra persona (en la especie, partidos políticos) realice una falta similar.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Con base en lo anterior, se puede concluir que teniendo en cuenta la gravedad de la falta, así como las circunstancias particulares que se dieron en el caso concreto, como se ha explicitado previamente, la sanción que debe aplicarse a éste es una multa, misma que, sin ser demasiado gravosa para el patrimonio del infractor, sí sea significativa, a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro, se concluye que una multa de **cinco mil días de salario mínimo** general vigente para el Distrito Federal, equivalente a la cantidad de **\$ 262.950 (doscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.)** puede cumplir con los propósitos antes precisados.

No es óbice a lo anterior referir que dicha multa deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis S3EL 025/2002, ***“COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE”***.

En este sentido, es menester señalar que de acuerdo con el convenio de coalición total celebrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia para la contienda electoral del año dos mil seis, dichos institutos políticos acordaron aportar el total del financiamiento público que recibieron para gastos de campaña, elemento que se tomará como base para determinar el grado de participación en la misma, toda vez que aun y, cuando los partidos políticos reciben financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades, esta cifra es

CONSEJO GENERAL
EXP. JGE/QCG/347/2006

la que con certeza se puede tener como la mínima aportada a la coalición que se formó.

Así, con base en el acuerdo CG14/2006 del Consejo General del Instituto Federal Electoral de fecha treinta y uno de enero de dos mil seis, se obtiene que el Partido de la Revolución Democrática recibió como financiamiento público para gastos de campaña la cantidad de \$ 360,710,804.15 (Trescientos sesenta millones, setecientos diez mil, ochocientos cuatro pesos 15/100 M.N.), en tanto que el Partido Convergencia obtuvo la suma de \$ 133,100,713.12 (Ciento treinta y tres millones, cien mil, setecientos trece pesos 12/100 M.N.) y el Partido del Trabajo recibió como financiamiento para gastos de campaña la cantidad de \$ 135,071,426.34 (Ciento treinta y cinco millones, setenta y un mil, cuatrocientos veintiséis pesos (34/100 M.N.).

De las cifras antes mencionadas válidamente se puede concluir que el Partido de la Revolución Democrática participó en la formación de la coalición “Por el Bien de Todos” con una aportación equivalente al 57.357% (cincuenta y siete punto trescientos cincuenta y siete por ciento), mientras que el Partido del Trabajo aportó un 21.477% (veintiuno punto cuatrocientos setenta y siete por ciento) y Convergencia contribuyó con un 21.164% (veintiuno punto ciento sesenta y cuatro por ciento) del monto total para la formación de dicha coalición [cifras redondeadas al tercer decimal].

Dicho lo anterior, la multa que corresponde al **Partido de la Revolución Democrática** es de dos mil ochocientos sesenta y siete punto ochenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal equivalente a **\$150,820.23 (ciento cincuenta mil ochocientos veinte pesos 23/100 M.N.)**.

La sanción correspondiente al **Partido del Trabajo** es de mil setenta y tres punto ochenta y cinco días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que asciende a la cantidad de **\$56,473.77 (cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 77/100 M.N.)**.

Por su parte, la sanción correspondiente a **Convergencia** es de mil cincuenta y ocho punto dos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que asciende a la cantidad de **\$55,650.73 (cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N.)**, que resulta de realizar la operación aritmética que corresponde a los porcentajes antes mencionados.

La cantidad que resulta de realizar la operación aritmética que corresponde a la suma de las cantidades antes mencionadas, es de **\$262.950 (doscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.).**

Dada la cantidad que se impone como multa a cada partido, comparada con el financiamiento que reciben de este Instituto Federal Electoral para el presente año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, y que en esta anualidad no se celebrarán elecciones federales, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades de los partidos sancionados.

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

En el caso a estudio, se estima que la campaña publicitaria de la otrora coalición “Por el Bien de Todos” generó el descrédito o descalificación del C. Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional, afectando negativamente la imagen de dicho contendiente frente al electorado y violentando con ello el sistema de partidos al no permitir que prevaleciera el respeto entre los institutos políticos dentro de la contienda electoral.

Es importante considerar que los promocionales denunciados no tenían la finalidad de dar a conocer la ideología, principios o programa de acción que postulaba la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, sino afectar la imagen de un candidato postulado por uno de sus adversarios, lo cual trastoca la calidad y civilidad de la vida democrática y la competencia electoral.

Lo anterior, dio como resultado que no se diera una convivencia armónica dentro de la comunidad a la que pertenecen los partidos políticos ni se generara una crítica constructiva de cada uno de ellos, siendo que los partidos políticos son uno de los pilares de la formación y desarrollo democrático de la sociedad.

En este sentido, se trasgredió el bien jurídico tutelado por el artículo 38, párrafo 1, inciso p) del código comicial, que en lo general atiende a la salvaguarda del sistema de partidos y, en lo particular, procura el respeto al principio fundamental de participación de los mismos dentro y fuera de las contiendas electorales, tal como se explicó en los párrafos que anteceden.

En este tenor, la difusión de los promocionales identificados como “Fobaproa 1” (Informativa 1), “Fobaproa 2” (Informativa 2), “Informativa 9” y “Salinas Fobaproa” realizada por la otrora Coalición “Por el Bien de Todos”, formó parte de una

campaña sistemática dirigida a desacreditar la imagen del C. Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional frente al electorado, motivo por el cual se estima que la entidad política denunciada trastocó el **principio de celebración de elecciones pacíficas**.

Lo anterior, en virtud de que el contenido del promocional de mérito, tuvo como finalidad generar antipatía en la ciudadanía respecto del candidato a la máxima magistratura del país, lo que se presume generó un distanciamiento entre los electores que optaban por esa fuerza política frente a otros que compartían una diversa ideología o interés en particular.

En este contexto, se considera que existen elementos suficientes para afirmar que la difusión de los mensajes desplegados por la otrora coalición “Por el Bien de Todos” contribuyeron a la generación de un ambiente adverso al que debe rodear una contienda equitativa, derivado de la emisión de mensajes que no aportaron propuestas que coadyuvaran al fortalecimiento de una auténtica cultura democrática que permitiera que la ciudadanía emitiera un voto razonado, sino que por el contrario, polarizaron la posición de éstos frente a una determinada opción política.

Las condiciones socioeconómicas del infractor

Dada la cantidad que se impone como reducción de ministraciones a cada partido, comparada con el financiamiento que reciben de este Instituto Federal Electoral para el presente año, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, se considera que no se afecta su patrimonio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo CG10/2008 aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día veintiocho de enero del presente año, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática recibirá para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes la cantidad de \$424,209,886.25 (Cuatrocientos veinticuatro millones doscientos nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos 25/100 M.N.), el Partido del Trabajo recibirá \$201,211,946.92 (doscientos un millones doscientos once mil novecientos cuarenta y seis pesos 92/100 M.N.) y Convergencia obtendrá el equivalente a \$190,244,835.15 (Ciento noventa millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco pesos 15/100 M.N.).

Con base en lo antes expuesto, se considera que la sanción impuesta a los partidos políticos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, de ninguna forma puede considerarse significativa, o bien, un obstáculo para el

cumplimiento de los fines constitucionales y legales impuestos a dichos institutos políticos.

Impacto en las actividades del sujeto infractor

Derivado de lo anteriormente señalado, se considera que de ninguna forma la sanción impuesta es gravosa para los partidos políticos integrantes de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, es decir, no se verán afectados para cumplir con las actividades que durante este periodo realicen (actividades ordinarias y específicas).

8.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 366, párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara **fundado** el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, en términos de lo dispuesto en los considerandos **4, 5 y 6** de la presente resolución.

SEGUNDO. Se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, integrante de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos” una multa de **dos mil ochocientos sesenta y siete punto ochenta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal**, equivalente a la cantidad de \$150,820.23 (ciento cincuenta mil ochocientos veinte pesos 23/1000 M.N.), en términos de lo señalado en el considerando **7** del presente fallo.

TERCERO.- Se impone al **Partido del Trabajo**, integrante de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos” una multa equivalente a **mil setenta y tres punto ochenta y cinco días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**, que asciende a la cantidad de \$56,473.77 (cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres pesos 77/100 M.N.), en términos de lo señalado en el considerando **7** del presente fallo.

CUARTO.- Se impone a **Convergencia**, integrante de la otrora Coalición “Por el Bien de Todos” una multa equivalente a **mil cincuenta y ocho punto dos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal**, que asciende a la cantidad de \$55,650.73 (cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos 73/100 M.N), en términos de lo señalado en el considerando **7** del presente fallo.

QUINTO.- En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de la multa será deducida de la siguiente ministración mensual del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciban los partidos que integraron la otrora coalición “Por el Bien de Todos”, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SEXTO.- Notifíquese la presente Resolución.

SÉPTIMO.- En su oportunidad archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de dos mil ocho, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LEONARDO VALDÉS
ZURITA**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**